

LA DEMOCRACIA TRAICIONADA

JUAN PABLO CÁRDENAS SQUELLA



La democracia traicionada

©Juan Pablo Cárdenas Squella
Ediciones Radio Universidad de Chile
ediciones@uchile.cl
www.radio.uchile.cl

Diagramación : Gloria Barros Olave
Registro de Propiedad Intelectual : 229406
Inscripción ISBN : 978-956-353-025-4

Prohibida la reproducción total o parcial, sin autorización.

Impreso en LOM
Santiago de Chile, julio de 2013

“El arte de la política es el ganarse el apoyo de la gente por una buena causa, aun cuando la búsqueda de ésta pueda interferir con los intereses del momento”.

VACLAV HAVEL

ÍNDICE

Presentación	9
El autoritarismo de cada día	11
Las primarias que faltan	15
Protestar y desobedecer	19
Para no repetirnos el plato	23
La política en su más bochornoso momento	27
La privatización de la política	33
Súbditos versus Republicanos	37
¡Con qué cara!	41
¿Una nueva “pijestocracia”?	45
Políticos del montón	49
La ruptura	53
El triunfo del NO más	57
Elecciones Municipales: Los riesgos de sufragar	59
El gran patrón de nuestra política exterior	63
Asamblea Constituyente, queremos	67
¿Quiénes son los terroristas?	71
¿Fin de la transición?	75
El triste papel del Parlamento	79
Nuevo sindicalismo y movilización	83
Autocomplacencia y oportunismo	87
¿Quiénes son los buenos políticos?	91

Cuando la política es mediocre	95
El ocaso de la CUT	99
La corrupción como objetivo político	103
La democracia ahogada	107
La vacuidad de los candidatos	111
No hay remedio	115
En estado de colusión	119
El dilema del PC	123
Con Pinochet en el corazón	127
¿Para qué sirve el diálogo?	131
La otra inequidad	135
La batalla decisiva	139
Al pueblo lo que es del pueblo	143
El Rescate	147
Abriendo las alamedas	151
¡Qué hipocresía!	153
El verdadero dilema	155
Ricos pero pobres	159
Un collar de esmeraldas	163
El triunfo del No	165
Después de 20 años	167
A modo de epílogo... Abstenerse o marcar el voto	171

PRESENTACIÓN

Lo que intento con este libro es recopilar un conjunto de reflexiones y escritos que he difundido a través de Radio Universidad de Chile y su Diario Electrónico. Expresiones simplemente de mi propio malestar con la larga transición de más de dos décadas que todavía nos tiene bajo la institucionalidad y el sistema económico impuesto por la Dictadura Militar que gobernó hasta 1990. Para dejar un testimonio reunido en un libro de la frustración que comparto con tantos chilenos por la forma en que los gobiernos de la posdictadura se rindieron, en definitiva, al ideario pinochetista, se acomodaron al sistema electoral acotado y terminaron haciéndose cómplices de la grave inequidad social derivada de una estrategia de desarrollo al servicio del gran capital y la inversión extranjera. Un modelo que, por cierto, exhibe excelentes índices macroeconómicos en la usurpación inicua de nuestros recursos naturales, la mano de obra barata, la desregulación, el afán de lucro y la usura. Que constata la degradación de nuestra política, la corrupción de sus referentes y protagonistas. Que busca, además, evidenciar el cierre programado de los medios de difusión democráticos y la pavorosa concentración informativa en manos de empresarios y gestores que han desnaturalizado la misión ética y social del periodismo, degradado los contenidos de noticieros y periódicos en el afán de distraer la atención pública en la frivolidad, la farándula y el exitismo particular de sus comunicadores u opinólogos.

Reúno un conjunto de escritos que tienen como eje la forma en que la política ha traicionado el ideal democrático de la protesta social que puso término al autoritarismo. La represión que se ha extendido en este tiempo en contra de quienes se manifiestan en las calles y se levantan en la Araucanía, en Punta Arenas, en Calama y hasta en los dignos poblados como Freirina para oponerse al santiagocentrismo, la expoliación de las empresas y ese mundo de atentados contra nuestro medio ambiente, tan bien representado por las pretensiones cri-

minales de Hidroaysén y las termoeléctricas; la estafa concertada de las cadenas farmacéuticas y las multitiendas; el asalto de las AFP y las isapres al bolsillo de la clase media y de los más pobres, entre tantos episodios vergonzosos.

Para constatar, también, la forma en que los partidos vienen desacreditándose de derecha a izquierda en nuestro espectro político. Para expresar, en particular, la vergüenza que nos provoca una izquierda indolente y atomizada que le ha cedido espacio a los diputados y senadores que “se repiten el plato” incesantemente, que abandonaron sus discursos radicales por los cuales, y por ellos, tantos jóvenes fueron asesinados y torturados, como tantas familias quedaron despedazadas en el exilio. Para fustigar, además, a aquellos dirigentes sindicales cuya sola perpetuación en la CUT y otras organizaciones han inhibido la sindicalización y cada año “negocian” con los gobiernos de turno el salario mínimo y dejan pasar los despidos arbitrarios y otras lacras fomentadas por nuestra legislación laboral.

Reflexiones que con cada publicación recibieron el apoyo y, muchas veces, la reprobación de los lectores y auditores que me honran con su atención, estímulo y crítica. Que dan tributo, por lo demás, a la libertad en que me desempeño y al compromiso que mantengo con el periodismo comprometido, insurgente y, cuando corresponde, irreverente. En el privilegio que me da mi independencia y el trabajo bajo el patrocinio de la Universidad de Chile, institución que se resiste a descender siquiera un peldaño en su fama de ser la mejor, la más grande y la primera. A pesar de los intentos del conjunto de la clase política por privatizar la enseñanza, la salud, la previsión y tantos derechos fundamentales.

Dedico estas letras libres a los estudiantes de Chile que, como en los grandes momentos de nuestra historia libertaria, están en las calles y construyen en ella la solidaridad, las ideas y el arrojo que requiere todo proceso a favor de la justicia. Las reúno y publico en un año electoral en que la propaganda millonaria, el cohecho y el oportunismo vuelven expresarse en los candidatos de siempre, en los pactos negociados cupularmente, en la ingenuidad de los que creen que, ahora sí, tendremos una nueva Carta Fundamental, un sistema electoral proporcional, una economía solidaria. En la candidez o la hipocresía de los que sostienen que, ahora sí, los mismos que traicionaron el ideal democrático van a reconocerle al pueblo sus derechos y soberanía. Involucrados en la mentira, las prebendas del poder y su patética genuflexión ante los que mandan efectivamente detrás de nuestra fatua institucionalidad.

EL AUTORITARISMO DE CADA DÍA

Aunque la soberanía popular es la base de un régimen democrático, lo cierto es que las sociedades le reconocen distintos grados de injerencia a la ciudadanía. De esta forma es que se habla de democracias representativas y participativas a la hora de definir su Constitución Política, sus leyes, gobiernos, parlamentos, municipios y otras instancias republicanas. En Chile, ya se sabe que la Carta Fundamental fue sancionada en una consulta espuria de la Dictadura, que las cámaras legislativas se han venido integrando bajo un sistema electoral acotado y en que la votación no es universal y plenamente informada. Lo que se colige fácilmente al comprobar que nuestro sistema comunicacional está alta y crecientemente concentrado, como que sus medios masivos cantan al son de la ideología oficial del Estado y de las empresas que los sustentan.

Hasta el quiebre institucional de 1973, la sociedad chilena había alcanzado niveles ejemplares de ejercicio democrático, no sólo para determinar a las autoridades del Estado sino de su vasto tejido social. Sindicatos, colegios profesionales, juntas de vecinos, federaciones estudiantiles vivían en estado de asamblea y las resoluciones resultaban del voto libre y secreto de sus integrantes. Al mismo tiempo que diarios, radios y canales de televisión mostraban las más distintas opciones de nuestra diversidad política, social y cultural. Todo un espíritu republicano que fue desbaratado por la violencia militar, el autoritarismo y el terrorismo de estado que se enseñoreó por largos 17 años en nuestra convivencia.

Después de ello, han pasado más de dos décadas y, de verdad, las transformaciones a nuestra vida institucional son muy débiles, así como existe un sinnúmero de referentes sociales aferrados a sus antiguos y ya seniles conductores, en un desprecio completo por la voz de sus integrantes, como acostumbrados a prácticas completamente autoritarias. De allí que la inmensa mayoría de los trabajadores hoy desprecien afiliarse a organización alguna y, muy especialmente, los jóvenes estén discurriendo organizarse en nuevas opciones, en vez de militar en los partidos políticos tradicionales, tan manipulados por las cúpulas, la influencia del dinero y la corrupción más desvergonzada.

Ni las universidades han recuperado, aún, los niveles de participación de sus estudiantes y administrativos alcanzados con la Reforma Universitaria de 1967, mientras que las iglesias, por ejemplo, que en algún momento se vieron forzadas a escuchar a sus feligreses, hoy vuelvan a estar completamente manejadas por sus jerarquías eclesiásticas, donde la voz de laicado es cada vez más marginal. Hasta los clubes deportivos reemplazaron a sus socios por paquetes accionarios controlados por operadores que ni siquiera necesitan ser hinchas de los mismos. Ni pensar, siquiera, que en las Fuerzas Armadas y los Tribunales de Justicia pudieran avanzar hacia alguna práctica de democracia interna.

Diga lo que se quiera, en este año electoral los candidatos presidenciales, cuanto los que postularán por un escaño legislativo, ya han sido designados a dedo por las distintas colectividades de derecha a izquierda, pese a que en dos meses más tendremos unas curiosas elecciones primarias que, supuestamente, vendrían a profundizar nuestro régimen democrático... Vaya qué crasa ilusión, cuando hasta los organizadores de éstas reconocen que su convocatoria tiene por principal objetivo avivar la contienda electoral en un país cada vez más impertérrito frente a las elecciones, así como hastiado de escoger entre las mismas opciones.

Como la política también comete errores fatales, es que se consumó hace poco el traspie de aprobar la inscripción automática de los potenciales ciudadanos, junto con establecer la voluntariedad de su voto, con lo cual el primer proceso electoral que lo siguió arrojó un 60 por ciento de abstención y, con ello, la patente deslegitimación de nuestros pretendidos

representantes. Diagnóstico que señala la posibilidad de un nuevo quiebre institucional, como muchos ya lo temen.

La tardanza en edificar la democracia prometida tiene origen en el autoritarismo heredado de la Dictadura y que dejó impregnada toda nuestra institucionalidad. Pero también se explica en la inconsciencia colectiva respecto de nuestros deberes cívicos. Gran parte de la población, desgraciadamente, desconoce sus derechos esenciales consagrados por la legislación internacional; al mismo tiempo que la ideología hecha suya por todos los gobiernos de la posdictadura propaga la ilegalidad de la huelga, de las manifestaciones callejeras y otras formas de protesta social que son garantizadas allí donde existen regímenes democráticos serios. Avalando, para colmo, la brutalidad policial para reprimir cualquier acto que pueda “alterar el orden público”, al grado de que todavía se mantiene vigente la Ley Antiterrorista con sus terroríficos procedimientos.

La misma acusación constitucional que el Parlamento ha consumado contra el último ministro de Educación es expresiva de cómo en nuestra legislación las bancadas políticas bien alineadas y aceitadas por los operadores electorales fueron capaces tanto de imputar como defender a un secretario de estado para luego, apenas por un voto de diferencia, declararle la “muerte cívica” por cinco años a quien sus propios acusadores calificaron de hombre probo y como un sólido experto. En una prerrogativa típicamente colonial destinada ahuyentar a los afuerinos de la política, a los técnicos allegados a esta actividad o a una mujer que hace un lustro no era parte de los barones y baronesas de las cúpulas partidarias.

El autoritarismo entronizado en nuestro sistema, así como la ausencia de una sociedad más crítica y resuelta a frenar los abusos del poder, explican que la práctica del lucro en la educación no haya sido oportunamente denunciada y castigada por todos los gobiernos de estas dos últimas décadas, con el criminal perjuicio que se les hizo a los estudiantes y familias. Se contravino la Ley de forma grosera y hoy recién la hipocresía política repara en ello, sin más intención que aplacar el severo levantamiento estudiantil y tratar de conseguir, incluso, que los jóvenes concurran a votar por ellos. Es decir, por los mismos responsables de tal impunidad.

Por lo mismo es que ya observamos el descaro de toda suerte de candidatos que, contrariando de nuevo los preceptos legales, iniciaron una multimillonaria campaña electoral mucho antes de lo dispuesto. En una competencia en que se despliegan avisos en la prensa, gigantografías urbanas y camineras, como toda suerte de propaganda que ya lleva gastado más recursos que toda la dieta parlamentaria o presidencial que percibirán posteriormente quienes resulten electos. En una comprobación más de que el financiamiento de la política hoy es un ítem de los presupuestos de las empresas nacionales y extranjeras posicionadas de nuestro país, sus recursos básicos y de los poderes de nuestro feble estado ¿democrático?

23 de abril de 2013

LAS PRIMARIAS QUE FALTAN...

Ya se sabe que el sistema de elecciones primarias operará muy parcialmente en este año electoral. Una vez más, las cúpulas se han dado maña para definir las listas parlamentarias mediante el cuoteo y la voluntad de favorecer a quienes buscan reelegirse. Bajo este imperecedero sistema binominal, de seguro que la correlación de fuerzas en ambas cámaras legislativas no variará sustantivamente y que el duopolio de la Derecha y la Concertación va a seguir enseñoreado en el Congreso pese al alto nivel de desprestigio de sus partidos y dirigentes. Ambos referentes políticos mantienen el sartén por el mango y, otra vez, dependerá de ellos y de la “ingeniería electoral” de sus máximos operadores la posibilidad de que algunos líderes juveniles y sindicales puedan alcanzar un escaño en el segundo poder del Estado.

En cuanto a la contienda presidencial todo dice, sin embargo, que tendremos primarias en estos dos bloques electorales. Que el oficialismo va a dirimir su candidato único en una consulta popular, a no ser que desde el Ejecutivo o las cúpulas de los partidos de derecha se imponga desestimar a sus actuales contendientes para concordar un candidato o candidata que tenga más posibilidades de retener el Ejecutivo. Lo propio se proponen hacer los partidos de la Concertación y sus adláteres en una primaria que tendrá, además de la ex Presidenta, a otros tres competidores. En un proceso en que lo que más se persigue es agitar la contienda electoral y quedar bien “ubicado” para un eventual gobierno de esta coalición.

Panorama muy lamentable es el que presenta la Izquierda extraparla-

mentaria, donde a la fecha se exhiben al menos 6 candidatos presidenciales designados por esa multifacética expresión de partidos, movimientos, tendencias y “sensibilidades”. En una atomización ya crónica entre los principales animadores de la movilización social, las demandas educacionales, la protesta laboral, las exigencias medioambientales y el respeto a los Derechos Humanos. Entre los que han sido capaces de hacer el mejor diagnóstico de las inequidades fomentadas por el modelo neoliberal, como fustigar con sólidos fundamentos nuestra institucionalidad y sistema electoral. Entre quienes han expresado las mejores ideas para consolidar democracia y soberanía, demandar la recuperación de nuestros recursos básicos, promover la educación y la salud como un derecho de todos. Así como abogar por una Asamblea Constituyente, una reforma tributaria y previsional de magnitud, que se encaminen a superar los profundos rezagos y el altísimo riesgo en que está nuestra bipolar convivencia.

Una situación paradójica, sin duda, que descubre el profundo sectarismo que afecta todavía a tantas expresiones de izquierda. Que habla de la vanidad, ambiciones y falta de realismo de un conjunto de capillas y pequeños caudillos que, al igual que lo que sucede en todo el espectro político nacional, desestima tanto la voz de sus bases como la necesidad de renovación de sus conductores. Operadores políticos que no se cansan de profitar del membrete y la campanilla de sus rimbombantes denominaciones para competir por el financiamiento foráneo, disfrutar del turismo ideológico internacional y sumirse en un activismo rutinario y panfletario.

Es curioso que sectores tan elocuentes en denunciar la cupularidad y malas prácticas de los grandes referentes, no atinen a hacerse una autocrítica, a abrirle paso a los líderes emergentes y promisorios, cuanto a converger en una efectiva unidad para romper el empate político que asfixia la vida pública chilena. Parece increíble que no se les ocurra hacer primarias vinculantes que acaben con este espectáculo grotesco de candidatos presidenciales que ahora pueblan como hongos la imagen de la Izquierda y se hacen cómplices del mismo sistema electoral que critican ácidamente y con tanta razón. Que no se atrean a consultarle a sus bases, por ejemplo, la posibilidad de abstenerse de presentar candidatos y sufragar en las

elecciones parlamentarias, en una actitud activa y consecuente que logre desacreditar y desmoronar el sistema electoral. Que ya recibió la sanción del 60 por ciento de los ciudadanos que se negaron a votar en las recientes elecciones municipales.

En la idea de no seguir acumulando derrotas y ponerse a la cabeza, más bien, de todo un despertar social que necesita renovados conductores, mucha generosidad y real unidad. Así como, también, imitar la ejemplar resolución de aquellos referentes mundiales y nacionales que tanto aplauden en sus actos y proclamas, pero traicionan cotidianamente con su dispersión y fatuas presunciones.

18 de abril de 2013

PROTESTAR Y DESOBEDECER

La paralización de los trabajadores portuarios nos reiteró que la movilización social y el paro constituyen acciones legítimas y eficientes para obtener logros y seguir arrinconando a un modelo institucional y económico que viola sistemáticamente los derechos democráticos y laborales. El ejemplo de unidad entregado por miles de operadores portuarios del país obligó a los empresarios a atender sus demandas, cuanto a obligar a las autoridades gubernamentales a exigir un diálogo y garantizar una solución. Este año electoral es una magnífica oportunidad para expresar el descontento de millones de chilenos que se sienten burlados en sus derechos.

El conjunto de la “clase política” ya no resiste más descrédito y aprecia que, si no se pone del lado de las demandas sociales, lo que estará a punto de quiebre será luego todo el andamiaje de la posdictadura. En este sentido, el 2013 debiera ser el año en que los contratados y tercerizados del cobre consigan ponerle fin a una segregación ya crónica en los yacimientos, así como ofrecerle al país un camino de recuperación de nuestras riquezas básicas en manos de inversionistas privados y foráneos usureros y sin consideración alguna respecto de nuestra naturaleza.

Los estudiantes, asimismo, difícilmente podrán encontrar otra posibilidad de la que les ofrece este año electoral a sus demandas de educación pública digna y gratuita. En este sentido, deberán ser capaces de establecer acuerdos claros y concretos con las actuales autoridades y las venideras. Por ningún motivo, dejarse embolinar con “ofertones” propagandísticos

como los ya lanzados por algunos presidenciables. La censura a un ministro de Estado es apenas un hito más en la revolución de la enseñanza y, por cierto, no debiera conformar a quienes tienen asumido que la responsabilidad del lucro, por ejemplo, es una transgresión que compromete a más de 20 años de gobiernos cómplices de una política destinada a apartar al Estado de una responsabilidad que debe ser siempre ineludible en una sociedad que presume de democrática. Tanto es así que fue en el primer gobierno de la Concertación donde se le dio un salvoconducto al pago de los apoderados a los colegios particulares subvencionados, con lo cual rápidamente estos establecimientos marcaron distancia de los colegios municipalizados. Como que después de la “Revolución Pingüina” viniera la aprobación de la Ley General de Educación (LGE), un volador de luces aprobado transversalmente por la política que se deshiciera como pompa de jabón a poco andar y comprobarse que las demandas estudiantiles habían sido nuevamente burladas.

Tanto el sistema previsional como el de la salud privada debieran también mover a sus millones de víctimas a las calles y a la resistencia efectiva contra las entidades que se enriquecen a cargo de sus fondos previsionales y requerimientos médicos. Imponer, también, con su protesta, la acción del Estado en la exigencia de una jubilación digna, como en la solvente atención tanto de clínicas privadas como hospitales y policlínicos. Además de boicotear la inescrupulosa colusión que siguen practicando las farmacias.

A lo anterior, los trabajadores y los estudiantes deben oponerse a la escandalosa proliferación de termo e hidroeléctricas que tienen en riesgo nuestros ecosistemas y la vida de nuestras poblaciones. Para contrarrestar los millonarios recursos de estas empresas que compran la información y sobornan a parlamentarios y ministros, no queda más recurso que impedir físicamente la instalación de las mismas. Así como denunciar al mundo sus despropósitos. Lo mismo que hay que hacer con iniciativas de tal agresión medioambiental como la llevada a cabo por Agrosuper en Freirina, donde —de nuevo— la movilización popular inhibió el desarrollo de éste y otros atentados.

Pero donde todos los actores sociales deben confluír y actuar es a favor de una nueva Constitución Política que surja de una Asamblea Consti-

tuyente y se legitime con la consulta ciudadana. Esta demanda debiera acompañar a cualquier exigencia sectorial, en el convencimiento de que las soluciones finalmente dependen de la posibilidad de que en La Moneda y el Parlamento tengamos genuinos representantes del pueblo. A la vez que nuestras instituciones estén regidas por leyes justas y de raigambre republicana y no por los resabios autoritarios y excluyentes de nuestra actual Ley Electoral, como de aquellos articulados de la constitución pinochetista que coartan la acción del Estado en la economía, le siguen otorgando poderes y recursos omnímodos a las Fuerzas Armadas y a la represión policial, así como limitan el sindicalismo libre y todo el derecho de asociación consagrado por la legislación internacional. No en vano se avanza en la convicción de que tenemos un cuerpo legal repugnante que permite todavía el ejercicio del terrorismo de Estado, el yugo cultural y social a las minorías étnicas y otro tipo de discriminaciones. De la misma manera que se descubre la corrupción de los referentes sindicales cooptados por la política y por el soborno de las entidades patronales y el propio Gobierno.

Los chilenos tenemos derecho a estar indignados y a manifestar públicamente nuestro malestar, desobedeciendo las leyes injustas e imponiendo un bloqueo efectivo a la injusticia y el atropello propio de uno de los países más inequitativos del orbe. En la convicción histórica de que los cambios rara vez suceden por iniciativa de los gobernantes. Sobre todo en un tiempo en que los partidos políticos han devenido en entelequias electoralistas y agencias de empleo. Sin espacio alguno para la reflexión ideológica o estratégica. Como tristemente se constata que ya tengamos toda suerte de candidatos sin programa. Nominados sin consentimiento de sus bases. En lo que ya es una práctica nacional: anteponer la carreta a los bueyes. El interés de las cúpulas a la razón de estado.

8 de abril de 2013

PARA NO REPETIRNOS EL PLATO...

La promesa de mayor igualdad entre los chilenos se ha instalado en todas las declaraciones de los diversos candidatos. De derecha a izquierda, todos constatan la falta de equidad que afecta a nuestra población y la necesidad de tomar medidas al respecto antes de que nuestra convivencia pueda afectarse más severamente.

Aunque les costó asumir la idea, el oficialismo ha terminado aceptando, aunque a regañadientes, que los índices de criminalidad y violencia tienen mucho que ver con las pavorosas diferencias en el ingreso de las familias, al mismo tiempo que empiezan a comprender que la entronización del narcotráfico tiene también sustento en el salario miserable de muchos trabajadores y la falta de expectativa laboral de las jóvenes generaciones.

La centroizquierda, en tanto, comienza una autocrítica respecto de lo poco o nada que hicieron sus gobiernos en materia económica al aplicar con un celo, propio de los conversos, los postulados neoliberales y permitir que el mercado regulara todo, aunque campearan el lucro, la usura del sistema financiero y se acrecentara la brecha entre los que más ganan y los que reciben un sustento precario.

En su común desvergüenza, políticos y grandes empresarios son los responsables del estado de malestar, de las protestas que se multiplican, como de que la promesa democrática fuera traicionada en sus fundamentos tanto económico sociales como éticos. De esta forma, la posdictadura es culpable de la alta y creciente concentración de la riqueza, como de la propiedad de

los medios de comunicación. Procesos en que unos y otros se han coludido con la consecuente corrupción que afecta a congresistas, ediles y altos funcionarios públicos. Fenómeno elocuentemente expresado con la condonación de las multas e intereses a uno de los más poderosos mandamases del *retail*, tal cual lo decidiera en propio director de Impuestos Internos. Así como que una universidad privada haya estafado a sus estudiantes a vista y paciencia de varios ministros de Educación.

En este estado de indolencia es que podría explicarse, además, que nuestros parlamentarios se hayan concertado tan rápida y unánimemente para reajustarse sus ya abultadas dietas, poco después de regatearle un salario mínimo digno a cientos de miles de trabajadores.

Cómo no celebrar, entonces, este consenso que ahora existe en cuanto a que la desigualdad podría traernos convulsiones sociales y cambios políticos que pusieran en jaque al sistema, como ya ocurre hasta en los países más ricos y democráticos, donde nunca hubo diferencias tan ominosas en su población. Sin embargo, tal diagnóstico común no es garantía para nada de que el país vaya a tomar las medidas efectivas para encarar la pobreza y la marginalidad en que tantos viven, cuando ya estamos alcanzando un PIB de 20 mil dólares per cápita y llevamos creciendo más de un cinco por ciento al año.

Haría falta que los candidatos presidenciales se definieran, por ejemplo, respecto a la posibilidad de emprender una reforma tributaria en serio o si van a seguir buscando desregular el mercado laboral a fin de que se pueda contratar mano de obra sin salario mínimo e incumpliendo con otras obligaciones que “desincentivan el empleo”, como acaba de plantearlo uno de las más descaradas editoriales del duopolio. Asimismo, los que se ufanan de su pasado vanguardista y hasta revolucionario deberán plantearse cuántos recursos quieren efectivamente recaudar para mejorar las remuneraciones y atender a los planes sociales del Estado.

En esta materia, los postulantes a posar sus sentaderas en el sillón presidencial deberán pronunciarse frente a las promesas electorales de los sectores más radicales cuando proclaman recuperar el cobre y nuestros yacimientos principales. Junto con recuperar para el Estado la instrucción y los sistemas previsionales, como de salud. Demandas, éstas, altamente populares luego

de la especulación criminal de los sostenedores educacionales, las AFPs y las isapres. Como al comprobar las ingentes utilidades de las empresas transnacionales instaladas en la minería, en el suministro de energía y de agua potable. En este sentido, en el temor de que sus millonarias inversiones se desbaraten, es que el presidente de Hidroaysén acaba de ofrecer el pago de un royalty de parte de las hidroeléctricas, a ver si con esto las autoridades del gobierno actual se allanan a autorizar este ecocida propósito urdido en los gobiernos anteriores y que el actual no se atreve a consolidar.

Soluciones más explícitas debieran plantearse también los candidatos respecto de nuestra crisis institucional, a fin de no seguir empatando el tiempo si son reelectos o elegidos por primera vez (algo muy difícil, como se sabe). Definirse explícitamente ante el país sobre cuál será su estrategia al respecto: si seguir haciéndole modificaciones cosméticas a la Constitución y al sistema electoral o proponerse en serio convocar a una Asamblea Constituyente, para una nueva Carta Fundamental, así como para restablecer nuestro sistema proporcional. Definirse, cuando corresponda, cómo encararán la renuencia crónica del Parlamento, cuya inmensa mayoría de integrantes volverá a ser reelegido y seguirá apoltronado en él gracias al binominalismo sacralizado. Si encabezarán una ruptura con el orden heredado de la Dictadura o seguirán excusándose en los quórum que imponen estas reformas también demandadas por el pueblo.

De esta forma es que los candidatos, si son serios, deberán ofrecerle a nuestros vecinos soluciones plausibles para alcanzar la paz en nuestras fronteras y dar un testimonio al mundo de nuestra voluntad de acceder, por ejemplo, a la justa demanda boliviana de salida soberana al mar. Deberán definir si su estrategia será la de la tozudez y la fuerza; si seguirán escudándose en un falso diálogo para postergar una solución que nos permita destinar millonarios recursos para el desarrollo y la paz y no para el más insensato y arcaico militarismo. En cuanto a nuestras relaciones internacionales, bueno sería también conocer la voluntad de los candidatos por consolidar a los organismos multinacionales de los cuales formamos parte de manera pasiva e hipócrita a objeto de seguir buscando una política “igualada” y de sumisión a las grandes potencias.

Sería saludable, asimismo, que los programas presidenciales ofrecieran medidas explícitas para promover la lectura, acabar con el indignante IVA a los libros y a tantas manifestaciones culturales. Si se comprometerán a atacar la falta de diversidad informativa, estimulando (como se hace en las democracias sólidas) el desarrollo de medios escritos, radiales y audiovisuales de distinta orientación. Si se la jugarán por el matrimonio o la unión cívica de los homosexuales. Si avanzaremos plenamente hacia la independencia real del Poder Judicial; esto es, con ministros y jueces elegidos por los ciudadanos o por las mismas cortes, y no por el conciliábulo o el cuoteo gubernamental y legislativo.

Si el gran pendiente de la Araucanía se abordará con más represión (pacificación) o con justicia social, real autonomía de nuestras etnias y respeto a los cánones internacionales referidos a los derechos de los pueblos y sus minorías.

1 de abril de 2013

LA POLÍTICA EN SU MÁS BOCHORNOSO MOMENTO

Nunca la política revela mejor sus miserias que en tiempo de elecciones. Como ahora, en un año en que los ciudadanos son convocados a elegir un nuevo gobierno y a los integrantes del Poder Legislativo. En la víspera, además, de consultas primarias, un mecanismo que se estrena en nuestra institucionalidad con el peregrino objetivo de que los postulantes a representar al pueblo sean determinados por las propias bases de los partidos, las organizaciones sociales o simplemente los independientes con sentido cívico o adicción por el sufragio.

Después de 23 años de posdictadura, todos estos comicios van a estar regidos nuevamente por la misma Constitución y las leyes electorales excluyentes heredadas por el Régimen Militar, por cierto que con algunas correcciones cosméticas consensuadas por el duopolio político enseñoreado en La Moneda y el Parlamento y que, con el correr de los años, ha venido concordando posiciones en el ámbito institucional y económico, más allá que en el discurso se empeñen por ser reconocidos como oficialistas u opositores. En cuanto a la comunicación social, también rige un acotamiento severo en lo ideológico, así como una concentración pavorosa y creciente de periódicos, estaciones de televisión y radio que, en general, ofrecen muy limitado espacio al disenso con un régimen que se sostiene en la desigualdad social, la discriminación y otros sesgos, tanto que seguimos en los últimos puestos del escalafón mundial referido a la inequidad.

Este año electoral dejará todavía más evidente que la política es una

actividad de una fronda cuyos miembros se reparten los altos cargos de la administración del Estado para medrar en ellos y servir a los lineamientos tutelados por las instituciones castrenses y patronales en quienes radica realmente el poder. Toda vez que nuestra propia Carta Fundamental prohíbe la intervención del Estado en la economía y consagra al “mercado” como su propio regulador. Además de darle a las Fuerzas Armadas una autonomía tan descarada como para seguir garantizándoles tribunales de justicia propios, un sistema ad hoc de previsión, de salud y un sinnúmero de otros privilegios.

Nos rigen leyes de quórum calificado que se han demostrado imposibles de derogar o modificar, como la que establece el binominalismo en la elección de diputados y senadores y que por más de dos décadas nos ha condenado a los mismos rostros, como a una decadente rutina legislativa en la que prevalecen los mediáticos dimes y diretes entre sus cínicos integrantes. Los mismos que, sin embargo, logran consensos sorprendentes al momento de incrementarse sus ingresos y escamotearle el aumento salarial a los trabajadores. En estos días, una nueva acusación constitucional contra un ministro de estado vuelve a demostrar cómo esta prerrogativa de los diputados se ha degenerado en su recurrencia y en la nula posibilidad de que éstos voten en conciencia a la hora de remover a una autoridad que ha faltado a su deber.

En el Palacio de La Moneda sólo ronda el espíritu de nuestros extintos estadistas. Hoy ocupada por presidentes digitados por los grupos fácticos y de quienes no ha surgido una sola iniciativa trascendental. Incapaces, por ejemplo, de emprender la reforma educacional consistente como la que es demandada por esos cientos de miles de chilenos que han salido a las calles. De corta visión y audacia como para definir una estrategia energética para el país o proponerse una reforma tributaria que, a la luz de nuestro crecimiento económico, busque resolver las siderales diferencias en el ingreso familiar. Jefes de Estado embobados por el precio internacional del cobre y sus beneficios temporales, que ni siquiera atinan a diversificar nuestra producción, promover inversiones que le den valor agregado a nuestra minería, cuanto prever el agotamiento inevitable de nuestros yacimientos en

manos de consorcios extranjeros empeñados en esta faena voraz antes que el pueblo vuelva a demandar su soberanía y dignidad.

Partidos que languidecen en la avidez por los cargos y prebendas y que llegan a postular que lo importante ya no son los programas de gobierno, sino únicamente aquellas figuras que conciten apoyo popular y logren cautivar el voto desinformado o irreflexivo. Siempre tan propicio al cohecho, como que los escrutinios de tales procesos resultan directamente proporcionales a los gastos de campaña y la publicidad desplegada por quienes logran “hacer caja” desde la administración pública, las grandes empresas o las transnacionales ideológicas a las que se adscriben nuestras colectividades políticas, justamente para recaudar dinero y sembrar dependencia extranjera.

El país podrá comprobar este año cómo en las dos cámaras de nuestro Congreso volverán a sentarse los mismos, salvo los que emigran de un hemisiclo al otro y ahora, ¡vaya novedad! los que resulten de los cupos que voluntariamente han abandonado algunos añosos personajes que, con seguridad, van a apostar por un cargo diplomático o asesoría bien pagada. En un Estado, cuyos altos jefes de servicio son designados por el cuoteo partidario como condición de que alleguen a su entorno un conjunto de operadores bien pagados y que son parte fundamental del clientelismo que anima a la farándula política. Al mismo tiempo que dispuestos a realizar el trabajo sucio de los grandes escándalos de fraudes, malversaciones, inversiones ecocidas, perdonazos tributarios, pago de sobresueldos e indemnizaciones y otras faltas a la probidad, como el nepotismo, que le han dado un sello a cada una de las últimas administraciones.

Asimismo podremos observar que el próximo 30 de junio debutará una consulta primaria acotada sólo a dirimir a los candidatos comparsas de los definidos ya por las cúpulas partidarias que integran los respectivos pactos y que, con toda probabilidad, serán ratificados por el binominalismo electoral. En estos días es como se ventila por los medios el nombre de los ungidos que por “derecho propio” no serán expuestos a primaria alguna en virtud de venir ocupando el cargo por tres y cuatro períodos consecutivos, como por los que se les otorga una suerte de derecho hereditario cuando

su padre, su abuelo o su mentor en la política lo ostentó anteriormente. Al mismo tiempo, observaremos la forma en que algunos partidos amarran su integración al pacto oficialista o concertacionista con la delimitación expresa de ciertos distritos o circunscripciones para sus candidatos estrella. Una vergüenza que incluso compromete a promisorias figuras de la política que ya, a tan temprana edad, se dejan envolver por los viciados procedimientos de la denominada “ingeniería electoral”.

Tal cual como se comprobará que, más allá de ideas o propuestas, lo que va a animar la contienda será el codicioso afán de algunos por allegarse a codazo limpio a los candidatos y candidatas a depositar sus nalgas en el sillón presidencial, para retener o recuperar su acceso y el de sus amigos a los ministerios, embajadas y otras reparticiones. En una estrepitosa carrera por subirse al carro de la victoria y luego encaramarse a los automóviles oficiales, aparecer retratados en las páginas de la vida social o política de los medios, acceder a los viajes y viáticos que ahora son ostensiblemente generosos con tanto evento exterior que nuestras autoridades se esmeran en estar presentes a fin de servir a aquello que llaman “imagen país”. Postulantes que tratarán de hablar lo mínimo, hacer promesas muy consabidas y generales a objeto de no intimidar a las organizaciones patronales o escandalizar al ponderado mundo de los “opinólogos”, que juega un papel muy relevante en la televisión uniformada y secuestrada. Presidenciables que evitarán confrontarse ideológicamente, que hablarán fundamentalmente a través de sus publicistas para no remecer su andamiaje político de partidos que sólo se mantienen unidos por la Ley Electoral y el común denominador de profitar de los cargos públicos. Tensiones intestinas que a diario ofrecen ruidosos sablazos entre las dos colectividades hijas del pinochetismo, como entre las cuatro que solamente siguen concertadas para arrebatarse la banda presidencial a la derecha. Para muy probablemente reiterar aquello de que no hay nada más conservador que un liberal en el poder.

El rubor que sintieron algunos políticos por ese 60 por ciento de abstención en las últimas elecciones municipales se expresó en autocritica durante algunos días, pero rápidamente unos y otros se volcaron otra vez a estos nuevos desafíos electorales. Total, lo que al final cuenta son los “votos válidos”.

damente emitidos”. No importa cuántos se abstengan; menos, todavía, la razones que expliquen la apatía electoral en un país que, sin embargo, se enciende en el descontento, la protesta y las demandas sectoriales. “Por ahora, le escuché decir a un cupular dirigente político, Chile no tiene el riesgo de un Chávez o cualquier caudillo... Ni tampoco están dadas las condiciones internacionales para un nuevo quiebre institucional en nuestro país”.

Por lo que la demanda de la Asamblea Constituyente, la recuperación de nuestras riquezas básicas, la educación gratuita y para todos, y el voto de los chilenos del exterior, no son más que pamplinas y majaderías con las cuales hay que acostumbrarse a convivir... Mientras que los propios líderes y referentes que las proclaman también se sienten atraídos por la parafernalia electoral y levantan sus presidencialitos por si acaso sus nombres llegan a inmortalizarse en las papeletas. Avalando con su actitud un régimen espurio, a fin de satisfacer sus onanismo político y retener el control de sus organizaciones de papel. En eso de que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león.

Porque hasta para los caudillos del izquierdismo criollo, los pobres y los discriminados pueden seguir esperando.

24 de marzo de 2013

LA PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA

La privatización de las empresas del Estado y de las actividades relacionadas con la educación, la salud, la previsión y los suministros fundamentales ha sido el gran hilo conductor de todos los gobiernos de la posdictadura. En la explotación de nuestros yacimientos, Codelco ha quedado completamente rezagado en relación a la producción y ganancias de las transnacionales instaladas en Chile bajo todo tipo de incentivos y ventajas, así igualmente todas las entidades sanitarias y distribuidoras de energía. En la educación, asimismo, lo que se implementó fue el paulatino desdén hacia las universidades y establecimientos escolares públicos, tal como se ha tolerado el más escandaloso lucro de las AFP y las isapres en desmedro del ahorro previsional y los hospitales. Porcentualmente, las utilidades de la banca extranjera son en nuestro país las más onerosas del mundo, gracias a que nuestra legislación es demasiado blanda respecto de la usura, cuanto bochornosamente complaciente con las evasiones tributarias y colusiones de las grandes empresas.

Aunque los escándalos y los abusos son el pan de cada día, todos los gobiernos finalmente han sido fieles en acatar esa inaudita indicación constitucional que impide o limita en extremo al estado chileno a inmiscuirse en la economía, cuanto a ser un agente activo en la promoción de emprendimientos que pudieran, al menos, competir con la inversión privada y extranjera, además de regularla. Sabemos de la incapacidad y falta de disposición de cada uno de los sucesivos gobiernos en cuanto a echar

mano a nuestras enormes reservas en el extranjero para generar actividades y empleo productivo, así como satisfactoriamente remunerado. Todo se permite, a vista y paciencia, para colmo, de la especulación y de los atentados medioambientales perpetrados por la empresa privada que viene demostrándose, por lo demás, menos eficiente que el Estado en aspectos tan importantes como la instrucción, el transporte colectivo y muchas de las obras de infraestructura.

Cuando se asume que Chile es uno de los países de menos equidad social, se soslaya la responsabilidad que tienen las privatizaciones y la falta de control del Estado sobre tantas inversiones que se valen, por ejemplo, del precario salario mínimo para lograr sus groseras utilidades. Los parlamentarios de nuestro país, tan dadivosos en fijarse sus propias remuneraciones, si todos los años concuerdan en un incremento bochornoso de los salarios de los trabajadores es porque saben que con esto estimulan las inversiones foráneas y otorgan “ventaja comparativa” al cometido exportador. Asimismo, en el afán de favorecer lo privado es que se aplican las millonarias condonaciones tributarias a las grandes empresas. En una actitud que no se condice con la estrictez de nuestro Servicio de Impuestos Internos con los contribuyentes comunes y corrientes.

En el transcurso de una política que favorece las privatizaciones y se empeña en disminuir al Estado, es que ésta misma se ha privatizado severamente y a la vez concentrado en muy pocas manos; es decir, en una élite de operadores cada día más rehén de poder al que sirven desde La Moneda, el Parlamento y los Municipios. Después de 6 gobiernos, en que cada uno de los cuales es más de lo mismo, el país está desencantado de nuestra institucionalidad y, de verdad, no avizora un cambio real en manos de quienes rotan de un cargo a otro. No aprecia, tampoco, diferencias sustantivas entre los partidos adscritos a la centroderecha o a la centroizquierda, en un desperfilamiento ideológico de tal magnitud que al final solamente es posible distinguir a sus actores por sus pretensiones personales.

Al respecto, parece insólito que los numerosos “abanderados” presidenciales no tengan bandera alguna, al grado que uno de los operadores de la Concertación proclamó que “el programa de gobierno era la propia Mi-

chelle Bachelet...” De esta forma es que nos parece asombroso, además, que ahora se le quiera asignar a ella la posibilidad de “cortar el queque” en la disputada definición de los candidatos a parlamentarios del conglomerado. Con todo lo cual se descubre la voluntad de que el Poder Legislativo permanezca como una entidad súbdita del Ejecutivo. De allí, la enorme irritación que le causara en el pasado a algunos mandatarios el voto díscolo de algunos diputados, así como el empeño posterior de éstos de abuenarse lo antes posible con La Moneda, a riesgo de perder su reelección.

El Servicio Electoral apura reformas a la Ley que lo rige a objeto de que las elecciones primarias presidenciales y legislativas se constituyan en unos comicios que contribuyan a la masiva participación ciudadana como a la renovación de los actores políticos. Una iniciativa que ha sido celebrada por el conjunto de los partidos, pero con mucho desgano en la práctica para cumplir con el espíritu que debiera animar esta consulta del próximo 30 de junio. En efecto, ya se sabe de la voluntad de algunas colectividades de no hacer competir en primarias a aquellos que buscan reelegirse en los cargos, organizándolas sólo donde alguien no quiera repostularse, pero siempre que se asegure la continuidad militante de su sucesor. O, en su defecto, su partido intercambie el cupo por otro distrito o circunscripción.

Desde el momento en que algunos partidos reclaman por adelantado un determinado número de cupos parlamentarios es que le están negando a la consulta primaria alguna solvencia. De esta forma, es que en la privatización del llamado “servicio público” debemos entender, también, la renuencia general de partidos o dirigentes para abrir sus listas a las nuevas figuras de las bregas estudiantiles y sociales, salvo que su incorporación les asegure salvar las correlaciones de fuerzas establecidas por el mismo sistema binominal, como lo negociado internamente en los referentes políticos perpetuados por el régimen institucional legado por Pinochet y sacralizado por sus sucesores.

Todo está concatenado. La consagración del modelo económico desigual requiere de gobernantes y legisladores dóciles con licencia para vociferar siempre que el sistema no corra riesgo alguno. De esta forma es que presenciamos debates mediáticos y parlamentarios de mucha virulencia

que indefectiblemente concluyen en votaciones consensuadas. Resultados matemáticamente convenidos por oficialistas y opositores, así haya que pagar la abstención, el pareo o el certificado médico de algunos diputados que, como René Alinco, acostumbran a obtener dividendos económicos de un sufragio que pudiera inclinar la balanza en favor de un cambio o un acuerdo que amenace quebrar la armonía de ese conjunto de bancadas. Y que llaman *fair play*.

Desgraciadamente, tanto el poder de la propaganda, y la uniformidad ideológica de los grandes medios, como la pertinaz ingenuidad electoral de quienes reiteradamente son despreciados por la política actual, obnubila a figuras y expresiones y les abre el apetito por competir bajo las reglas de una institucionalidad hecha a la medida de los intereses que se quieren perpetuar. Y que, como sabemos, se enseñorean efectivamente en los yacimientos, la banca y las organizaciones gremiales. Donde también algunos mediáticos personajes se divierten, al igual que muchos políticos, al son de agrandar a sus patrones y, por ningún motivo, incomodarlos. Es decir, a las sociedades anónimas, como a esa nómina de multimillonarios chilenos ya bien instados en el escalafón de Forbes.

Líderes, genuinas organizaciones sociales, grupos, grupúsculos y demases que curiosamente aciertan en representar las frustraciones del pueblo, al grado de tener una injerencia cierta en la explicación de ese sesenta por ciento que se abstuvo en las últimas elecciones municipales. Expresiones diversas de la sociedad civil que continúan menoscabando el poder, que ya se han manifestado en las calles, en esa multiplicidad de protestas que todos los días se pronuncian a lo largo del país pero que, a la hora de las elecciones, son seducidas por los políticos cooptados y la ilusión de que el crecimiento económico del país alguna vez les permita algo más que las migajas que le desparrama.

Que se resisten a entender que los grandes cambios necesitan ideas que rompan la inercia ideológica, de conductores probos y con arrojo. Los únicos que, en definitiva, se alojan en la historia de los grandes políticos y progresistas de la humanidad.

9 de marzo de 2013

SÚBDITOS VERSUS REPUBLICANOS

Después de 23 años, parece muy improbable que la Constitución Política del país y el sistema electoral puedan ser sustituidos o reformados drásticamente a fin de consolidar una institucionalidad genuinamente democrática. Más allá de algunas intenciones, lo cierto es que los sucesivos gobiernos y parlamentos no han provocado avance alguno en este sentido, salvo algunos retoques concordados por los partidos políticos que más bien han venido a sacralizar el régimen autoritario y excluyente impuesto por la Dictadura Militar. Tampoco en nuestras relaciones económicas y laborales se aprecian reformas sustantivas, como que después de tanto tiempo continuemos asignados como uno de los países más desiguales de la Tierra y con niveles de sindicalización que acaso superan el 10 por ciento de nuestra fuerza laboral.

De esta manera, las Fuerzas Armadas en los hechos siguen consolidadas como un gran poder fáctico dotado de ingentes recursos y favorecidos con una cantidad de privilegios inconcebibles en cualquier sistema que se repunte de republicano. A vista y paciencia de los habitantes de Viña del Mar y las cámaras de una turista, la manifestación xenofóbica de un contingente de la Armada es una expresión de lo despreciables que resultan para nuestras instituciones castrenses los objetivos de paz e integración con nuestros países vecinos. Asimismo, se asume hasta por los propios políticos el descarado tráfico de influencias que ejercen algunos grupos empresariales en la discusión de las leyes y el financiamiento de las contiendas electorales, lo

que ha tenido como resultado la imposibilidad de aprobar una reforma tributaria que efectivamente acorte la brecha de la inequidad social y obligue a las grandes transnacionales afincadas especialmente en la minería a pagar un royalty decente por vaciar nuestros yacimientos.

Para colmo, el país vive atónito con los sucesos de corrupción que afectan la credibilidad de nuestros gobernantes y legisladores y que tiene como capítulo más reciente la escandalosa decisión del titular del Servicio de Impuestos de condonar las deudas tributarias de un poderoso consorcio privado, mientras que a los contribuyentes comunes y corrientes se les descarga “todo el peso de la Ley” a la hora de evadir o eludir sus compromisos con el fisco.

De esta forma es que una vez más el país es convocado a las urnas para integrar las cámaras legislativas y darse un nuevo gobierno en que lo más probable es que el duopolio que controla la política mantenga su poder en el Parlamento, cuanto reponga o consolide en La Moneda a quienes ya tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas y cumplir con la promesa democrática que sigue demandando el pueblo en las calles, en las redes sociales y hasta en los Tribunales de Justicia. Único poder del Estado que ha enfrentado cambios de actitud de sus magistrados, pese a la existencia avergonzante de una Ley Antiterrorista, cuya aplicación es desestimada por los propios tribunales por oponerse al debido proceso y contemplar sanciones completamente absurdas para el derecho internacional y el sentido común. Al respecto, cómo no destacar los reiterados reveses de las autoridades frente a sus bullados montajes jurídico policiales que resultan con la absolución total de los imputados.

Una vez más, lo previsible es que retengan sus curules parlamentarios los mismos que se han cebado allí con una millonaria dieta y colaboren muy excepcionalmente a ciertas reformas. Diputados y senadores que ya ni sus partidos tienen el poder de reemplazarlos, pese a que varios de éstos se han “repetido el plato” por más de dos o tres períodos, y otros han superado los 70 o los 80 años de edad. Aunque ahora realicen algunas elecciones primarias, no escapa a la conciencia ciudadana que estos procesos resultan una completa impostura y son completamente manipulados con el caciquismo local, la propaganda millonaria y el arreglo cupular a la hora de confeccio-

nar las listas. El recambio de unos por otros radica más bien en el retiro voluntario o el fallecimiento de algunos de estos personajes, no sin antes asegurarse su reemplazo por un hijo u otro pariente o por algún miembro de la cúpula política que quiera emigrar de un poder del estado a otro, o se haya jubilado en una embajada u organismo internacional. En este sentido, es común observar cómo los elefantes de la farándula política buscan morir en el Senado de la República, cuando no prefieren alguna legación diplomática que les permita recibir un buen estipendio sin trabajar demasiado.

La promesa electoral de los nuevos candidatos al Parlamento es que -ahora sí- se podría alcanzar una mayoría legislativa que permita terminar con el sistema binominal e, incluso, conformar una Asamblea Constituyente o algo similar que nos conduzca a una nueva Carta Fundamental. Una completa falacia, por supuesto, desmentida por más de cinco elecciones y por las mismas normas del sistema. Cuyas trampas radican, como sabemos, en la imposibilidad de alcanzar los quórum necesarios para cambiar la Ley y acabar con las exclusiones precisamente concebidas por quienes nos heredaron este sistema acotado. Lo que explica, entre otras cosas, que buena parte de los llamados “hijos de Pinochet” sigan posicionados en los principales cargos del gabinete presidencial, como que los que negociaron con ellos la posdictadura se hayan convertido en senadores y diputados vitalicios, aunque avalados por consultas electorales espurias y que en los últimos años no concitan la participación mayoritaria de los ciudadanos. Tanto así, que los alcaldes y concejales acaban de ser ratificados en sus cargos con más de un 60 por ciento de abstención.

Lo increíble es que desde la autodenominada izquierda, en especial de los sectores extraparlamentarios, haya quienes postulen ingenuamente la posibilidad de resultar elegidos bajo el estricto imperio del sistema binominal. Que realicen, también, toda suerte de conciliábulos, para reunir firmas, estructurar listas y consolidar cuoteos todavía más insensatos que los que ostentan los actuales cargos, manejan las millonarias cajas electorales y controlan los grandes medios de comunicación tan adictos al régimen que se ha dado en llamar de “democracia protegida”... justamente para que nadie ose alterar los índices de la macropolítica y la macroeconomía.

Más bien, pareciera que ya ha llegado la hora de hacer frente a la farsa electoral y manifestar consecuencia con todo lo que se ha planteado, absteniéndose de participar en las elecciones parlamentarias. Para sólo concentrarse en la posibilidad de convocar al país a la lucha frontal por una Asamblea Constituyente. Declarando, desde ya y con resolución, la ilegitimidad de quienes vuelvan a ser elegidos bajo un sistema que se reitera rígido e inexpugnable, que sólo parece posible de desbaratar por la movilización social.

De esta forma, las opciones están radicadas entre quienes quieran permanecer como súbditos del régimen heredado por la Dictadura y sacralizado por sus sucesores en el Gobierno y el Parlamento, versus los ciudadanos conscientes y libres que manifiesten desdén por el orden actual y se propongan, como en los grandes capítulos de nuestra historia republicana, construir cambio democrático en las calles y sus propias organizaciones. Una vez que nuestra institucionalidad y sistema de partidos se han demostrado anquilosados y corruptos.

8 de febrero de 2013

¡CON QUÉ CARA!

A propósito de la concurrida cumbre CELAC Unión Europea en nuestro país, abundaron las opiniones y declaraciones para contrarrestar la solidez de algunas economías latinoamericanas con la crisis que afecta a las naciones del Viejo Continente. En este sentido, hay quienes han querido sacarle lustre a la cifra de un 5 por ciento del desempleo nacional en relación al 25 que acaba de marcar recientemente la cesantía en España. Practicando un vergonzoso chovinismo, es así como algunos se han ufano del buen nivel de nuestros índices macroeconómicos, en especial de nuestra tasa de crecimiento y PIB, soslayando la distancia sideral de nuestra economía respecto del tamaño de otras en nuestra propia región y, desde luego, de Europa.

Una eurodiputada y otros observadores internacionales han deparado el magnífico lobby internacional que hace Chile para convencer al mundo de la fortaleza de nuestra democracia y sistema económico, ocultando nuestra profunda inequidad en el ingreso, las discriminaciones que afectan a nuestros pueblos indígenas y situaciones tan bochornosas como la vigencia de la Constitución Política dictada por Pinochet, cuanto de un sistema electoral que permite el acceso al Parlamento sólo de las dos primeras mayorías. Se especula con las cifras de nuestro pretendido estatus económico, sin reconocer que algunos exitosos índices tienen explicación fundamentalmente en el buen precio del cobre en el mercado internacional, aunque éstos sigan señalándonos como un país monoprodutor, con una concentración abismante de la riqueza, mientras que la inmensa

mayoría de quienes integran nuestra fuerza laboral recibe un salario por debajo de los 300 mil pesos mensuales. Un monto que resultaría inicuo en Europa donde, además, el acceso a la salud, a la educación y a un retiro digno todavía siguen tutelados por los diferentes estados, mientras que aquí estos tres derechos constituyen las oportunidades más fértiles del lucro empresarial. Incluso más que la administración del crédito. No es casual que la última cifra que se ha exhibido de nuestro “crecimiento” advierte un descenso de la actividad industrial respecto de las copiosas utilidades que ofrecen los servicios y la administración privada del transporte público, entre otros rubros especulativos.

Vaya que ignominioso nos resultaría comparar los valores que se pagan en Chile, con otros países del área y en Europa para acceder a recursos tan indispensables como el agua potable, la electricidad y el gas, servicios que en nuestro país son administrados por empresas extranjeras, las cuales, además, tienen bajo su propiedad cerca del 90 por ciento de nuestros ricos manantiales y a más del 70 por ciento de los yacimientos mineros. ¡Cuánto más infamante resultaría, por ejemplo, evaluar el servicio del Transantiago en relación a la calidad del transporte público de los países del viejo continente y otros países hermanos que, felizmente no han renunciado, ni con crisis, a deslindar al Estado de la responsabilidad que tiene en garantizarle a la población elementos tan esenciales para una vida digna, como a la posibilidad de que sus ingresos no se agoten en este objetivo!

Después de años de saqueo de nuestros recursos naturales, en un informe destacado recién por El Mercurio se nos señala que Chile se ha ubicado como el segundo país en el Continente (después de México) en captar la inversión extranjera. Sin embargo, esto no le causa rubor alguno a la clase política nacional, ni a las cúpulas sindicales, cebadas como están, con los “generosos” aportes que estas compañías ofrecen a quienes se han apoltronado en el Parlamento y en nuestras instituciones públicas y gremiales, justamente para resguardar los intereses del capital foráneo, morigerar las demandas salariales e impedir una reforma tributaria que imponga gravámenes dignos al vaciamiento acelerado de nuestras minas, así como al agotamiento de nuestras reservas pesqueras. Otro informe nos señala que en

las últimas elecciones municipales fueron reelectos más del 70 por ciento de los alcaldes y ediles, votación donde un 60 por ciento de los ciudadanos prefirió abstenerse. Sin duda, que algo similar ocurrirá en los próximos comicios parlamentarios, donde varios de los diputados y senadores que se “han repetido el plato” por 3 o 4 veces, y han superado los 70 u 80 años de edad, ya han inscrito sus respectivas candidaturas. En el ánimo de seguir formando el duopolio político (hijo del sistema binominal) que, de tan larga connivencia, sus selectos actores ya están completamente desperfilados ideológicamente. Comulgando unos y otros con las directrices neoliberales que se hacen trizas en los que nos antecedieron en el mismo mal, así como elevando y radicalizando el malestar del pueblo chileno. Cuestión que pasa inadvertida a los partidos y a la autodenominada “clase política”, completamente embriagada de elecciones, repartijas y prebendas.

En efecto, más allá de la corrupción que también compromete a gran parte de los regímenes representados en esta Cumbre Presidencial, cómo no señalar que en el mismo momento que Francia y otros países disminuían los estipendios de ministros de estado, legisladores y altos funcionarios, aquí los “honorables” diputados y senadores se elevaban en dos millones de pesos más su ya abultada dieta. Es decir, un reajuste de más de 10 veces el monto del salario mínimo que recién le habían fijado, de consuno con el Gobierno, a más de un millón de trabajadores; es decir, a un 15 por ciento de nuestra masa laboral.

Cómo no sorprenderse de estos analistas y operadores políticos en su pretensión de igualarse con las grandes potencias y extenderle críticas y recomendaciones, más encima, por la situación que les afecta. Obnubilados, ciertamente, por el exitismo de algunas cifras económicas, la prosperidad individual y el desconocimiento grave de la agravante realidad en que vive, o sobrevive, de la mayoría de los chilenos. Explicado, también, por la falta de diversidad informativa que confina a diarios y canales de televisión a un periodismo monocorde, abyecto y financiado por los dueños del país. Gracias a la publicidad con la que los favorecen y, otra vez, por la nula injerencia del Estado en procurar que un pilar fundamental de la democracia esté garantizado por políticas comunicacionales que impidan la escandalo-

sa concentración y extranjerización, también, de nuestros grandes medios de comunicación. Cuestión en que también Europa y algunos países de nuestra región pueden darnos verdaderas lecciones de republicanismo.

Analistas impúdicos y pretensiosos que ocultan, además, que todo el modelo que nos ha ubicado como uno de los países más desiguales del planeta, sólo ha sido posible con la vigilancia activa que las Fuerzas Armadas chilenas ejercen sobre los poderes del estado, muy especialmente para resguardar el cumplimiento de las leyes de impunidad, y el despropósito de un cuerpo legal criminal como la Ley Antiterrorista que nos rige con todo el ordenamiento institucional legado del régimen castrense. Todo un poder fáctico que delibera más que los añosos partidos políticos y exige presupuestos millonarios para consolidar su incontrarrestable poder de fuego y la vida dispendiosa de sus oficiales. Que alimenta, por lo demás, las controversias y provocaciones limítrofes, cuanto que se asegura que nuestros dirigentes políticos por ningún motivo superen las controversias para cimentar la paz en nuestras fronteras.

Impunidad y despropósitos judiciales que han sido consagrados por todos los gobiernos de la posdictadura y, en concreto, por los mismos que hoy exigen la repatriación a Chile de los presuntos autores del asesinato del fundador del partido de derecha más gravitante del actual gobierno de Sebastián Piñera, cuando por tantos años avalaron el terrorismo de estado y la violación sistemática de los Derechos Humanos. Conviniendo al conjunto de la clase política de rescatar a Augusto Pinochet de la justicia internacional. Demanda que también nos ha avergonzado en medio de esta cumbre presidencial, donde concurren mandatarios que representan a países que por más de 60 años han perseguido los crímenes del fascismo, el nazismo y el estalinismo.

En este descaro colectivo que vive la presumida política, la economía y la moral pública en nuestro país.

27 de enero de 2013

¿UNA NUEVA “PIJESTOCRACIA”?

Como más se afecta el prestigio de la política es con la inconsistencia ideológica de quienes la ejercen, es decir, cuando comprobamos que lo planteado por los partidos y dirigentes difiere mucho de lo que éstos hacen una vez en el poder. De allí es que los grandes líderes sean reconocidos justamente por la solidez de su discurso, así como por su resistencia a entrar en componendas cupulares para acceder a los cargos de representación popular. En nuestro país y en el mundo se honra la memoria de quienes llegaron incluso a ofrendar su vida por sus convicciones y mantenerse siempre en una actitud de consecuencia en su trayectoria de servicio público.

La explosión estudiantil de los últimos años abrigó la esperanza del país en la posibilidad de que sus dirigentes más emblemáticos fueran capaces de refundar la política, superar sus viciadas prácticas y desarrollar nuevos referentes que renovaran el compromiso ciudadano que venía apagándose en toda la larga posdictadura. A causa, justamente, de la frustración que los chilenos hemos experimentado en cuanto a lo que se prometió y finalmente ha resultado.

Las generaciones mayores vimos en un puñado de jóvenes la posibilidad de que con ellos germinara un fenómeno similar al que llevó hace 100 años a fundar el Partido Comunista, las diversas expresiones del socialismo, así como la irrupción de la Democracia Cristiana y otras expresiones vanguardistas. Más allá de sus demandas educacionales, en sus declaraciones, entrevistas y proclamas éstos hicieron un lapidario diagnóstico de la política nacional, de la corrupción de sus instituciones y de la clase política, así

como de la perversidad del modelo económico vigente, la Constitución de 1980 que nos rige y particularmente la legislación que consagra el sistema electoral binominal. Alzando duramente la voz, escuchamos a varias de estas figuras proclamar la necesidad de derribar las viejas estructuras y la voluntad de erigirse como una alternativa política al “duopolio” del oficialismo y la Concertación. Es decir, a las expresiones representadas en La Moneda y en el Parlamento por más de dos décadas.

Su crítica al orden político establecido se hacía intérprete de un sin número expresiones que venían concluyendo desde hace mucho tiempo que la única posibilidad de acceder a una genuina democracia, como a un régimen económico y social justo y equitativo, era desconociendo la legitimidad de la actual Constitución. Abogando, por lo mismo, por la consolidación de una asamblea constituyente y una nueva Carta Fundamental. En sus marchas y protestas convergieron esos cientos de miles de chilenos, hartos, ya, de haber asistido a cinco elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales donde se eligieron representantes que rápidamente se apoltronaron en las instituciones del Estado sin posibilidad ni ganas de cambiar realmente las cosas. Al abrigo, por supuesto, de dietas millonarias y prebendas, cuanto de la magnífica posibilidad que le brindan las empresas y referentes patronales a todo el espectro partidista para enriquecerse y perpetuarse en sus cargos, siempre que se sometan a los cánones de lo establecido por los verdaderos soberanos del país: los inversionistas extranjeros y sus adláteres criollos.

En su radicalidad, hubo dirigentes que irrumpieron insolentemente en el Congreso Nacional, una joven estudiante que le lanzó un jarro con agua a la ministra de Educación y se efectuaron toda suerte de otras irreverencias que fueron, en general, celebradas por la población y hasta por aquellos jueces que se negaron a procesar a los detenidos. Haciendo caso omiso de la grotesca manipulación que de esos acontecimientos sigue realizando la prensa uniformada y dócil al orden establecido.

Resulta lamentable, por lo tanto, que muchos de estos dirigentes estudiantiles hayan renunciado, en tan poco tiempo, a consolidar sus referentes a nivel del país, pese a que las encuestas llegaron a brindarle más de un 70 por ciento de apoyo a sus demandas y liderazgos. Nos parece increíble que con tal “capital político” (como se identifica ahora al arraigo popu-

lar), estos líderes estén haciendo mérito en los partidos políticos del “establishment” (sic) que denunciaron con tanta vehemencia. Asumiendo, en definitiva, la misma liturgia de quienes buscan cupos parlamentarios o se quieren ubicar en la primera fila en la repartija de cargos de quien se cruce la próxima banda presidencial.

El extinto senador y ex candidato presidencial Radomiro Tomic calificó de “pijesticracia” a aquella generación de líderes estudiantiles que en la década de los setenta se destacó por un discurso rupturista desde las aulas, para luego arribar a la vida política en rápido acomodo a su voraz afán de acceder a cargos y reconocimiento social. Una lúcida generación de jóvenes, sin duda, pero que a la larga demostró una completa inconsistencia moral. Al grado de que varios de sus integrantes hoy son parte del acervo intelectual del neoliberalismo, de las patronales que lo representan y hasta se han convertido en redactores del diario *El Mercurio* que, en su época juvenil tildaron de mentiroso en aquel histórico lienzo que colgaron en el frontis de la Pontificia Universidad Católica.

Este nuevo y escandaloso oportunismo se funda en la peregrina idea de que es posible cambiar el modelo que implacablemente nos rige desde dentro del propio régimen que lo sacraliza y lo vigila, accediendo a las limitadas cuotas que la clase política y los partidos puedan otorgarles para convertirse en diputados, para así hacerlos cómplices de ese acotado sistema electoral mil veces denunciado en las campañas electorales, pero del cual después medran nuestros “honorables” parlamentarios hasta que envejecen y se secan ideológicamente en sus curules.

Jóvenes talentosos que se doblegan al sistema y a las viejas y revenidas prácticas de la política, después de haber abierto las grandes avenidas, hacer sonrojar al conjunto de los políticos y alimentar la esperanza de millones de chilenos. Cuya sólida y rebelde abstención electoral de más de un 60 por ciento en los últimos comicios se hizo eco de la voz de los estudiantes movilizados. Así como de la creciente convicción de que sólo será posible superar el autoritarismo y la injusticia desde las calles, la protesta social y el levantamiento de un nuevo referente popular y nacional. Como sobran ejemplo en la historia universal.

15 de diciembre de 2012

POLÍTICOS DEL MONTÓN

Lo que más afecta el prestigio de la política es la ausencia de estadistas y proyectos históricos que se propongan impregnar la conciencia colectiva y promover el cambio. En las últimas décadas, lo que tenemos son más bien administradores de modelo institucional heredado de la Dictadura, cuanto simples mandatarios de la estrategia económica definida por los teóricos neoliberales y los intereses de las grandes empresas nacionales o extranjeras asentadas en toda nuestra geografía. Cuando los políticos de hoy aseguran defender nuestra soberanía, lo cierto es que lo que se proponen verdaderamente es proteger a los propietarios reales de los ricos yacimientos, recursos hídricos, forestales, pesqueros y agroindustriales. Donde, se sabe, se enseñorean los capitales foráneos y uno que otro empresario nacional.

La línea divisoria que finalmente demarque los límites marítimos entre Chile y Perú no será más que una raya imaginaria o cartográfica que en nada podrá afectar la verdadera soberanía que las poderosas industrias pesqueras ejercen en nuestro común Océano Pacífico. Para que no haya dudas, el actual Gobierno y la mayoría de nuestros representantes en el Parlamento, cierran en estos días la discusión de una nueva Ley de Pesca en la que nuevamente un puñado de familias se asegura privilegios de explotación por otros 20 años renovables de nuestro mar. Sometido, como lo advierte la comunidad científica, a una actividad voraz que depreda nuestros recursos y amenaza con la extinción de muchas especies de nuestra fauna marítima. Además de atentar contra la subsistencia de miles de familias que viven de la pesca artesanal en toda nuestra larga costa.

Tanto en ésta y otras materias, los políticos del montón se mantienen en la inercia de lo ya establecido, porque hace rato que no surgen estadistas que piensen, tengan una visión de futuro y se jueguen por cambios estratégicos. Así es como resultó tan vergonzosa esa reunión en La Moneda entre el actual Presidente y sus predecesores para manifestar su falta de lucidez y un patriotismo tan burdo como para desafiar, incluso, la próxima sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en caso de que ésta no resuelva enteramente a favor de Chile su controversia limítrofe con un país vecino. ¡Cómo nos habría gustado que siquiera uno de ellos se hubiera pronunciado a favor de una solución estable y duradera! Que postulara, por ejemplo, consolidar la paz en el norte sobre la base de la integración a favor de nuestros comunes intereses, reconocimiento a las justas demandas bolivianas e, incluso, la oportunidad de un espacio común de soberanía que nos haga explotar en conjunto los maravillosos recursos naturales de la zona. Pero no, ni siquiera en su hora postrera éstos se asumieron como estadistas y se manifestaron, a contracorriente, a favor del patriotismo y la demagogia. Que siempre paga en dinero, votos y fama temporal.

No es casual que buena parte de los estadistas destacados por nuestra historia no hayan pretendido o llegado a alcanzar el sillón presidencial. Bilbao, Lastarria y tantos otros forjadores de nuestra república ciertamente fueron políticos de alto nivel que marcaron diferencia respecto de aquellos que se afanan únicamente por ganar el voto, el aplauso de las multitudes y el acomodo ideológico a la hora de apoltronarse en las pomposas instituciones del Estado. Para, finalmente, rendirse a los poderes fácticos que financian y le dan perfil a sus contiendas electorales.

No es extraño, asimismo, que personajes como O'Higgins, Balmaceda y Allende hayan sido forzados a abdicar o dar la vida por ser leales a sus idearios y negarse a entrar en connivencia con los intereses más abyectos y contrarios al interés nacional, como viven hoy tantos políticos del montón que ayer hasta se proclamaban revolucionarios. En un tiempo en que ser radical, y hasta termocéfalo, les daba rédito electoral y rápido acceso a las prebendas del poder.

La ausencia de líderes y estadistas es lo que actualmente tiene a la políti-

ca chilena en el marasmo y explica en buena parte que una mayoría ciudadana se abstenga de sufragar y se exprese renuente a ese “más de lo mismo” tan consolidado en nuestras instituciones y rutinas eleccionarias. De allí que equivoquen tanto el camino aquellas expresiones políticas y dirigentes juveniles que piensan que dentro de la democracia acotada, los vicios del partidismo y de las organizaciones sindicales y gremiales espurias es posible desafiar la inercia de la sociedad desigual, de las discriminaciones sociales y apropiación inicua de los recursos naturales de un territorio del que todavía muchos incautos aseguran que tenemos soberanía. Cuando hasta las altas cumbres de la Cordillera de los Andes se ofrendan al extranjero por intermediación de los políticos del montón.

Época gris y obtusa la que vivimos y que persistirá un tiempo más por las consabidas recaídas de la historia. Porque sabemos que no es fácil torcerle el rumbo a las naciones cuando éstas, además, permanecen en el rezago educacional, bajo la influencia de los más poderosos medios de comunicación, como de la acción del cohecho que se ejerce para controlar a los gobernantes, jueces y legisladores, al mismo tiempo que cooptar a los líderes juveniles que debieran desplazarlos. Cuestión que al menos ya está quedando en evidencia con los escándalos que se suceden en las instituciones públicas, el mundo empresarial, en las iglesias y hasta en los clubes deportivos. Cuando los pastores, los pretendidos emprendedores, los comunicadores y hasta los dirigentes del fútbol se corrompen al unísono con los políticos del montón.

2 de diciembre de 2012

LA RUPTURA

Dentro del 60 por ciento de ciudadanos que se abstuvo de sufragar en las últimas elecciones municipales no sólo están los que siempre se muestran desinteresados por la política. Es evidente que esta vez un buen número de chilenos quiso manifestar ruptura con el orden político y económico actual, su repudio al comportamiento general de la clase política, como su opción por un orden nuevo que surja, como es debido, de una carta fundamental refrendada libremente por el pueblo.

Incluso entre los que concurrieron a sufragar se expresó con nitidez el alto respaldo a los candidatos independientes o a quienes se atrevieron a desafiar a los alcaldes y concejales perpetuados y corrompidos en sus cargos. De esta forma es que se pudo celebrar el triunfo de una Josefa Errázuriz, en la comuna de Providencia, victoria que ella misma atribuyó a “una nueva forma de hacer política”, como textualmente se lo representara a la expresidenta Bachelet. Por más que los partidos sacaran “cuentas alegres” al momento de los escrutinios, lo cierto es que la militancia de los candidatos se tomó muy poco en cuenta a la hora de sufragar, toda vez que la propaganda desplegada soslayara deliberadamente algo que debiera estar explícito en un proceso serio y transparente, como la opción política de quienes dicen representarnos.

No es casual que el partido más populoso del país, la UDI, prefiera apoyar la postulación presidencial de un independiente en vez de un hombre de sus filas. Parece realmente increíble que al interior de la Democracia

Cristiana, partido que tuvo fuerte carácter ideológico, haya quienes prefieren postular a una candidata de otro partido en vez de esos dos camaradas deseosos de medirse en una elección primaria con ella. En estos y otros casos está visto que estos referentes políticos lo que quieren es asegurar su mantención, retorno o acceso a La Moneda por sobre cualquier ideario programático. En el reconocimiento, por supuesto, de que el país viene practicando una ruptura con el pasado y las expresiones más recurrentes de la cupularidad partidista.

Los más intensos operativos actuales se concentran en la búsqueda de abanderados “mágicos” que puedan capturar apoyo sin mayor consideración de las ideas que profesan o de los partidos que representan.

Resulta extraño que en el cuadro de desencanto general con los actores y referentes de la política, en la convicción de tantos votantes y no votantes de que ya es hora que se rompa con el pasado y se opte por nuevos rostros y desafíos políticos, no emerja estrategia y liderazgos que se propongan sin equívocos el cambio, renuncien a todo intento de obtener migajas electorales del sistema electoral binominal y con valentía demanden el apoyo del pueblo para ejercer una franca ruptura con el orden establecido y sacralizado por lo que se identifica como el duopolio político representado por las dos grandes alianzas electorales y los partidos que los integran como titulares y comparsas. Expresiones que en los “votos válidamente emitidos” todavía marcan porcentaje, pero que en el universo electoral quedaría todos muy por debajo de los dos dígitos.

Un camino de ruptura que aspire a llegar a la Moneda con votos pero, sobre todo, con el respaldo popular necesario para cercar la política autoritaria y excluyente que se erige como la gran camisa de fuerza de los cambios que Chile espera. Institucionalidad dentro de la cual parece completamente ingenuo esperar equidad social, educación y salud para todos, como una democracia participativa. Cuando los integrantes del Ejecutivo y del Poder Legislativo son, justamente, grandes beneficiarios de las leyes que se perpetúan o dictan.

En el enorme desprestigio de la clase dirigente, hasta sectores del empresariado nacional han decidido apostar por nuevos derroteros políticos,

otorgándole millonario apoyo a una opción como la del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco (independiente también), en un ingrato esfuerzo por desalojar ahora de La Moneda a los actuales y anteriores moradores que tanto colaboraron en la más escandalosa concentración de la riqueza de nuestra historia. En su propia ruptura con el duopolio político, la clase patronal demuestra su agudo olfato por los buenos negocios y busca un servidor que sea todavía más dócil a sus intereses. Antes que la ruptura popular con el orden establecido, convierta las actuales movilizaciones sociales en inevitables convulsiones. Y una nueva crisis institucional.

17 de noviembre de 2012

EL TRIUNFO DEL NO MÁS

El resultado más contundente de la reciente elección municipal fue el del número de ciudadanos que se abstuvieron de votar. Se demuestra, así, que la clase política dio un paso severamente en falso cuando legisló para hacer voluntario el ejercicio electoral en un momento en que el descrédito que afecta a los partidos es tan generalizado y éstos mantienen bajísimo influjo en la opinión pública.

El hecho de que la inmensa mayoría de los candidatos a alcaldes y concejales haya ocultado su identidad política durante la contienda electoral es expresiva de que las cúpulas dirigentes están conscientes de la frustración y la desesperanza de la población respecto de nuestra precaria democracia, la ineptitud de sus instituciones y la creciente corrupción de quienes debieran representar los intereses del pueblo. Resulta repugnante, por esto, que los distintos referentes políticos saquen cuentas alegres respecto de los “votos válidamente emitidos” y se arroguen victorias que más bien le corresponden a los caudillos entronizados en los municipios o a quienes contaron con los más acaudalados recursos para sostener los millonarios gastos electorales, cuanto ejercer las múltiples formas de cohecho arraigadas, expresa o sutilmente, a este tipo de procesos.

Vista la abstención, quienes resultaron electos no alcanzan otra vez un respaldo ciudadano contundente que los legitime como representantes nuestros en los municipios. Situación que se empeora cuando debemos elegir a nuestros parlamentarios, puesto que el régimen binominal vigente le impone todavía más cortapisas a la soberanía popular, como a la aspiración de un régimen de verdadera solvencia republicana. Pese al estremitoso estre-

no de la inscripción automática y el voto voluntario, todo indica que la clase política va a seguir postergando una reforma al régimen electoral y que, en un abrir y cerrar de ojos, va a enfrentar las contiendas que se aproximan bajo la institucionalidad heredada de la Dictadura y, luego, sacralizada por los gobiernos del duopolio político enseñoreado en nuestro país.

Pero hay que celebrar que durante esta campaña electoral se hayan multiplicado las voces críticas o disidentes del sistema que nos rige, cuya majadera continuidad es probable que nos conduzca a una nueva crisis institucional. De una justa y responsable lectura de los resultados, lo que cabe es sumar conciencia y movilización en favor de una Asamblea Constituyente y una Carta Fundamental refrendada por el pueblo. Para que con democracia pueda derrotarse la frustración, el desánimo y los inquietantes niveles de violencia que se manifiestan y crecen después de 22 años de post dictadura y dilaciones.

Es preciso, asimismo, que la izquierda y los políticos responsables abandonen las prácticas cupulares, el oportunismo electoralista y se manifiesten ante al país con ideas, programas y compromisos de buen gobierno. Que superen su actual vacuidad ideológica y sus líderes se ofrezcan como portaestandartes del cambio real y no como salvavidas de expresiones que ya perdieron vigencia o demostraron su fracaso en las oportunidades que la ciudadanía ya les brindó. Tanto en Chile como en el mundo.

Es necesario, además, el retiro de las viejas guardias y la irrupción de las nuevas generaciones en proyectos vigorosos, asentados en los tiempos actuales, como en las demandas del porvenir. En este sentido, no cabe sino lamentar que algunos dirigentes juveniles que despertaron la más sólida adhesión de los chilenos hayan sido embadurnados en este último proceso electoral por los intereses de los viejos partidos y los cantos de sirena de sus revenidos administradores. Es francamente lamentable que figuras juveniles promisorias hayan terminado de comparsa de las viejas organizaciones y de quienes quieren mantener sus prebendas dentro de un régimen político económico y social necesario de ser sustituido por la fuerza del pueblo movilizado. Sistema perverso que se muestra impermeable a las más mínimas transformaciones dentro de la camisa de fuerza institucional que ahoga los anhelos de justicia social y democracia participativa.

28 de octubre de 2012

ELECCIONES MUNICIPALES LOS RIESGOS DE SUFRAGAR

El próximo 28 de octubre vamos a asistir a uno de los comicios más inciertos en sus resultados de todos los últimos años. Debutando con una reforma al sistema electoral que ya no exige la obligación de sufragar, no se sospecha cuántos serán los ciudadanos que concurran a las urnas y cuántos prefieran abstenerse o anular el voto. Tampoco es previsible a ciencia cierta quienes resulten electos como alcaldes y concejales, aunque sabemos que este tipo de elecciones municipales siempre está muy influido por el poder de los caudillos locales, el peso de la propaganda y, ciertamente, de las distintas formas de cohecho que todavía prevalecen en nuestras prácticas “republicanas”.

Aunque el resultado de esta contienda podría marcar el destino de las siguientes elecciones parlamentarias y presidenciales, la verdad es que los propios partidos desestiman tal posibilidad. Si todos estos procesos estuvieran concatenados, cabría esperar que tanto el oficialismo como el amplio espectro de la oposición resultaran completamente derrotados por la abstención o el repudio ciudadano. A juzgar por las encuestas, ni los partidos de la Alianza, ni los de la Concertación podrían superar en conjunto más del 28 o 30 por ciento de las preferencias. Discretos resultados, según éstas, podrían obtener los comunistas, el partido Progresista y otros referentes que difícilmente sobrepasan el 4 o 5 por ciento de apoyo popular.

Ello explica que hoy recorran las comunas miles de candidatos sin rostro partidario. Postulantes que tienen tapizado el país con eslóganes y promesas sin siquiera recurrir a los colores distintivos de sus colectividades, pese a que

todos (incluso los independientes que integran las diferentes listas) han sido nominados a dedo por las colectividades y sólo excepcionalmente proclamados por consultas primarias. Pactos, subpactos y toda suerte de acomodos cupulares que no se reconocen en la publicidad, pero que a la hora de los escrutinios seguramente les permitirá a los políticos sacar cuentas alegres respecto de los “votos válidamente emitidos”, cuando de verdad los ciudadanos poco o nada los identifican con el espectro político partidista. Ciertamente que los guarismos que se invoquen no tomarán para nada la decisión de los que no marquen preferencia, salvo que la abstención golpee la cátedra y sea el conjunto de la “clase política” la que lamente haber aprobado la inscripción electoral automática y el sufragio voluntario. Legislación que, de mantenerse, podría deslegitimar no sólo la elección de ediles sino la de los próximos parlamentarios y Presidente de la Republica.

Ciertamente lo que podría salvar esta elección es la enorme cantidad de postulantes donde resulta difícil no descubrir a un amigo o pariente que quiere llegar a los más de 320 municipios del país. Incluso algunas expresiones políticas marginales y difícilmente identificables ideológicamente se han dado maña para estar presentes en las papeletas. Así sea para elegir un solo edil o concejal que pueda hacer caja de las arcas municipales para solventar su referente más allá del timbre y la campanilla que ostentan sus mandamases. Sabido es que en ocasiones electorales como éstas es posible reunir todo tipo de recursos provenientes de empresarios, comerciantes locales y chilenos comunes y corrientes que quieren asegurarse un “pituto” en los municipios. Es decir, allí donde se tranzan las concesiones viales, las patentes del comercio y otras decisiones en las que corren mucho las influencias, las coimas y otros estímulos que a los políticos les resultan fundamentales para atender a sus respectivas clientelas.

A codazo limpio, los candidatos pechan por aparecer en su afiches con Michelle Bachelet, el propio Piñera y unos cuantos dirigentes empeñados en catapultarse para llegar a La Moneda o mantenerse en el Congreso Nacional. Toda una maquinaria electoral que hace descender temporalmente los índices de desocupación e, incluso, estimular la actividad de imprentas, de los transportistas, así como allegar algunos pesos a la sustentación de

las publicaciones y radios regionales cuya principal fuente de ingreso es la publicidad política.

En este cuadro, realmente la única novedad que podrían tener estas elecciones es lo que suceda con los cinco millones de chilenos que han incrementado el padrón electoral, la mayoría de los cuales son jóvenes que nunca mostraron interés por inscribirse en los registros y que, ahora, señalan que muy mayoritariamente siguen sin interés por votar. Está pendiente, incluso, la resolución que tomen no pocos líderes estudiantiles muy activos en sus movilizaciones, pero en quienes se manifiesta el deseo de “funar” estos comicios, molestos como están por la falta de soluciones políticas a sus demandas. Cómo no destacar el enorme esfuerzo hecho por algunos partidos para enrolar como candidatos a estos dirigentes secundarios y universitarios. Pocos, sin embargo, fueron tentados por esta posibilidad.

Se habla de comunas emblemáticas cuyos resultados podrían ser realmente influyentes en los comicios parlamentarios y presidenciales del próximo año, pero lo que se reconoce es que, en general, la situación de las comunas y de sus vecinos no variará mucho según quien resulte elegido. Menos todavía si estos pertenecen al duopolio político Alianza Concertación que, en efecto, no manifiesta muchas diferencias de comportamiento en el poder. Menos, todavía, a nivel comunal. Sin embargo, será en la comuna de Santiago y en las cabeceras provinciales donde la competencia será feroz, aunque en ésta no se manifiesten diferencias programáticas. Se sabe, y se nota, que hay candidatos provistos de ingentes recursos de campaña que muy posiblemente superen el monto de todas las remuneraciones que pudieran percibir los alcaldes y concejales que resulten electos. Mal que mal, los honorarios de estos “servidores públicos” está muy por debajo de los estipendios de diputados y senadores, aunque se reconoce el hecho de que en los municipios se hace más propicio desviar recursos para los partidos o el propio bolsillo de nuestros representantes.

Lo único promisorio de esta contienda es la posibilidad que tienen los grupos medioambientalistas, de derechos humanos y otros de interpelar a los candidatos y abrir espacio a nivel local al debate público sobre la educación, la salud y tantos otros temas de interés general y particular de las

distintas comunidades. La misma campaña por exigir una Asamblea Constituyente y una nueva Carta Fundamental podría verse favorecida por este proceso electoral. Pero, desgraciadamente, hasta las mejores intenciones pudieran quedar burladas a la hora de los mañosos cómputos, o una vez que los militantes con caretas asuman los nuevos cargos edilicios. Porque, por cierto, se trata de un proceso electoral en que la mayoría de los candidatos no muestra sus verdaderos rostros e intenciones.

13 de octubre de 2012

EL GRAN PATRÓN DE NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR

Lo único que puede explicar los irritantes privilegios que las Fuerzas Armadas mantienen en materia de recursos, previsión, salud e, incluso, justicia, es que no se avance nada hacia la solución de nuestras controversias vecinales, que se mantenga latente la posibilidad de un conflicto armado con Bolivia y Perú o la posibilidad de revivir hostilidades entre Argentina y Chile. El hecho de que nos hayamos consolidado como una potencia bélica, y nuestros presupuestos militares sean escandalosos en relación a lo que gastamos, por ejemplo, en educación, tiene como excusa la eventual defensa que podrían hacer los militares de nuestra soberanía.

De esta manera, ninguno de los gobiernos posdictadura ha tenido el coraje de restringir la adquisición millonaria de armamentos y reubicar a las fuerzas castrenses en el organigrama institucional donde todavía la parafernalia de las charreteras siguen teniendo inusitada presencia en los actos y festividades públicas y que debieran tener a la civilidad como protagonista. Septiembre, en este sentido, nos brinda cada año una muestra del dispendio de las paradas militares y de las temibles y onerosas armas que nuestro país adquiere y que a los pocos años se obsoletan o van desbaratándose en los ejercicios que entretienen a nuestros uniformados. La historia demuestra que los aviones de guerra y artillería cuando más efectivos han sido es apuntando hacia el palacio de La Moneda y a nuestro propio pueblo.

Hemos vivido aguardando la posibilidad de que algún gobernante tenga la entereza de proponer un arreglo a la demanda marítima boliviana y una

solución definitiva a nuestras correspondientes proyecciones oceánicas con el Perú. Con insistencia, expertos y visionarios nos señalan la conveniencia de un nuevo y definitivo acuerdo en el norte que potencie las relaciones con nuestras naciones hermanas, las lleve a explotar en conjunto los prodigiosos recursos de nuestro Desierto y, por supuesto, nos permita a todos renunciar a la carrera armamentista. Reorientando nuestros caudales públicos en favor de inversiones productivas y mancomunadas que siempre se han demostrado ser la mejor inversión a favor de la paz entre los pueblos.

Pero lo que ha ocurrido, sin embargo, es que nuestra Cancillería ha venido burlando la confianza de los distintos gobiernos bolivianos en la promesa de que atenderemos oportunamente sus demandas dentro de un arreglo bilateral. En el gobierno anterior, un grupo de periodistas chilenos invitados a La Paz quedamos sorprendidos con la ingenuidad de Evo Morales y su ministro de RR.EE por su confianza en que la Presidenta Bachelet les otorgaría la tan ansiada salida al mar que perdieron en la Guerra del Pacífico, de manos justamente de nuestro superior poder de fuego. Poco tiempo después, entre pichangas futbolísticas y sonrisas oficiales, las autoridades bolivianas parecían de nuevo esperanzadas en que Sebastián Piñera pudiera encarar una solución.

Ahora, finalmente, ya se sabe que nuestra Cancillería se mantendrá intransigente con lo dispuesto por el Tratado de 1904 el que, sin duda, consolidó una rendición y un armisticio impuesto por el vencedor al país que perdió soberanía sobre vastos territorios que después han sido los que más riqueza le han aportado a nuestro país. Ni siquiera un corredor hacia nuestra inmensa costa que tuviera presente compensar mínimamente, siquiera, los inmensos yacimientos y reservas de cobre que hemos explotado por más de un siglo en lo que fue de Bolivia. Felizmente con Perú existe la voluntad mutua de respetar un arbitraje internacional; de esta forma es que esperamos que la decisión, cualquiera sea, resulte acatada por ambas naciones y no se busquen después del laudo pretextos para volver a tensionar nuestras relaciones.

En efecto, los últimos presidentes de nuestro país no han sido estadistas y, por ende, ni visionarios y líderes en materia de relaciones internacio-

nales. Abyectos, en general, a los intereses de los Estados Unidos y de las grandes potencias mundiales, la verdad es que por años hemos estado a contrapelo con América Latina y la multiplicidad de iniciativas encaminadas a consolidar nuestra área regional. Ufanándonos, por el contrario, de pertenecer a organismos multinacionales como la OCDE que lo que más nos señalan es nuestra inferioridad, los niveles escandalosos de nuestra inequidad interna, como los enormes rezagos que mantenemos respecto de países que, sin tanta pretensión, crecen y distribuyen su ingreso mejor que el nuestro. Además de fundar su desarrollo en objetivos como la igualdad y la solidaridad, en vez de aquellos fríos y engañosos guarismos macroeconómicos con que hace gárgaras nuestra clase política.

El Presidente Piñera acaba de enfatizar que “los tratados se firman para cumplirlos” y que “Chile va a defender con toda la fuerza del mundo nuestro territorio, nuestro mar y nuestro cielo”. Una bravata patrioteria pueril cuando su gobierno es precisamente uno de los que ha seguido cediendo soberanía a las inversiones extranjeras que hoy se plantean inamovibles en nuestro subsuelo, ríos, bosques y Océano. Incluso, es Pascua Lama, donde rozamos, justamente, el cielo. Al tiempo de dominar nuestro sistema financiero y servicios fundamentales, como la energía y el agua.

Imaginamos lo satisfactorio que debe resultar para nuestros gallardos oficiales una amenaza presidencial que, indiscutiblemente, concibe en nuestra superioridad militar la posibilidad de defender con ira bélica nuestra pretendida soberanía. Garantizándole una oportunidad magnífica a nuestras Fuerzas Armadas para mantener o aumentar sus recursos y dotaciones a la hora que se inicia la discusión sobre el nuevo Presupuesto de la Nación.

29 de septiembre de 2012

ASAMBLEA CONSTITUYENTE, QUEREMOS

En el reconocimiento de que nuestro Parlamento es poco representativo de la diversidad política y social del país sería absurdo confiarles a nuestros diputados y senadores la definición de una nueva Constitución o las reformas que se le pudieran hacer a la actual Carta Fundamental para transformarla en un texto de real solvencia democrática. Quienes hoy integran ambas cámaras legislativas han sido elegidos mediante un sistema electoral binominal acotado y absolutamente deslegitimado en la ciudadanía. Salvo honrosas excepciones, los actuales legisladores más bien representan los intereses corporativos de sus partidos políticos, entidades que en su desempeño se reiteran completamente abyectas a los poderes factuales que definen los grandes lineamientos de la política, la economía, las relaciones internacionales y, en general, toda la actividad nacional.

Ante el descrédito que se expresa en las encuestas respecto de toda la política, las colectividades partidarias y las propias instituciones públicas, lo que más pudiéramos esperar del Gobierno y del Parlamento es una iniciativa legal que convoque a una Asamblea Constituyente amplia e incluyente y que en un período determinado defina un nuevo texto fundamental. El que debiera ser refrendado, luego, en una elección popular para este fin. Es éste, por lo demás, el camino seguido por otros países que han salido de regímenes autoritarios. Es decir, por aquellas naciones que no le temen a la opinión del pueblo y en que sus clases dirigentes no se sienten tan iluminados por el don de representar lo que éste anhela y necesita. Llevamos demasiados años tutelados por las Fuerzas Armadas y por los protagonistas

de la posdictadura; parece ser la hora, entonces, de que se consulte la voluntad de quienes las democracias asignan como sus verdaderos soberanos. Es decir, los ciudadanos.

Sin embargo, podemos apreciar que en la clase política lo que a lo sumo existe es voluntad para hacerle otras enmiendas cosméticas a la Constitución heredada de Pinochet, mientras algunos se resisten, incluso, a modificar el actual sistema electoral. Convencidos de que un Parlamento que se abra a otras expresiones que no sean las del duopolio político que nos rige pudieran convertirse en un riesgo para la estabilidad institucional sacralizada en nuestro ordenamiento jurídico. Unos y otros se niegan a reconocer el alto grado de tensión que vive nuestro país en la Araucanía, en las calles de las grandes ciudades y en la explosión social de múltiples localidades y pueblos. Obtusas posiciones que le siguen confiando a la represión policial el control del llamado “orden público”, sin considerar para nada que la mejor forma de garantizarlo es con justicia y equidad, dos términos respecto de los cuales nuestro país presenta severos déficit, pese al crecimiento económico sin duda alcanzado.

Ante la necesidad de que Chile avance realmente a su consolidación democrática, y la renuencia de las autoridades a reconocer este objetivo, es preciso que asumamos la movilización social como el más efectivo expediente de los cambios. Así como los estudiantes movilizados lograron poner en el debate público la responsabilidad que al Estado le compete en la recuperación de una educación pública, igualitaria y de calidad, también éstos y otros sectores del país deben emprender una movilización intensa para exigir Asamblea Constituyente y plebiscito. Para ello debemos contemplar, necesariamente, el recurso de la desobediencia civil, la renuencia a participar en las elecciones acotadas y otras formas de resistencia ciudadana efectivas.

Tal como a la Dictadura se la derrotó con el alzamiento popular, hoy es necesario oponerle a la posdictadura nuevas movilizaciones en la convicción de que —al final— las ideas son más efectivas que la represión y las armas. Así como la solidez moral termina derrotando siempre a los políticos e intereses corruptos y abyectos.

Luego de un año de movilizaciones, se podrá argumentar que es insu-

ficiente todavía lo logrado por el mundo educacional en recursos e iniciativas gubernamentales o parlamentarias. Sin embargo, la tozudez de las autoridades puede estar próxima a desmoronarse con algo mucho más contundente: la comprensión general de que las demandas educacionales, laborales, medioambientales, previsionales y tantas otras sólo podrán alcanzar solución con un logro esencial. Esto es, con un nuevo ordenamiento institucional, el fin de nuestros falsos representantes y el ejercicio de una democracia participativa. Que le pierda, ciertamente, el miedo al pueblo y a los ciudadanos.

16 de septiembre de 2012

¿QUIÉNES SON LOS TERRORISTAS?

Mientras la justicia ordinaria condena al joven Luciano Pitronello por haber detonado una bomba que causó sólo mínimos destrozos a una sucursal bancaria, la Corte Marcial revoca una sentencia de presidio por la muerte de Jaime Mendoza Collío, ultimado por la espalda por un carabiniero en La Araucanía. En el primer caso, el afectado pierde una mano y un ojo en su propia ejecución, mientras que en los incidentes del sur se establece que ninguno de los comuneros mapuches agredidos por la policía uniformada portaba armas de fuego que pudieran explicar una reacción policial tan extrema y cobarde.

El Gobierno se demuestra enfurecido con la Justicia Ordinaria por haber desestimado aplicar la Ley Antiterrorista en contra de Pitronello y postula la necesidad de endurecer una legislación largamente cuestionada y repudiada por las entidades de Derechos Humanos de nuestro país y del mundo. Sin embargo, poco o nada han hecho éste y los anteriores gobiernos por resolver esa enorme cantidad de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y en que sólo algunos de sus ejecutores han recibido penas, por lo general, muy discretas. En la constatación, además, de que varios de sus cómplices o encubridores han llegado y se mantienen en altos cargos de la administración pública.

En ello se explica que ciertas autoridades de gobierno y de los municipios ordenen aquellas brutales y reincidentes represiones que, al igual que en la Dictadura, se les propina a los estudiantes que se proponen marchar

pacíficamente por las calles de Santiago y ciudades regionales. Desoyendo el clamor popular y vecinal, es ilustrativo que el Alcalde de Providencia se niegue todavía a restituirle el nombre a una de las principales avenidas de su comuna, bautizada por él con el nombre de “11 de Septiembre”, a fin de rendirle tributo a Pinochet, al Golpe de Estado y los crímenes que se cometieron larga y sistemáticamente por los militares y otros agentes del Estado que derrocaron al gobierno constitucional.

El ministro del Interior y otros voceros rasgan vestiduras y atemorizan a la nación constantemente con sus arengas que prometen más “mano dura” y “aplicar todo el peso de la ley” contra los opositores u disidentes. Se escandalizan de la detonación de un artefacto que parece más bien un juego juvenil si se lo compara con ese horrible bombardeo de la Fuerza Aérea contra nuestro principal edificio institucional, en escenas de odio, crimen y destrucción que el mundo entero rememora con horror en cada mes de septiembre. Se perturban por un bombazo que no tiene para nada el poder de destrucción de toda esa enorme cantidad de minas antipersonales sembradas por nuestras valientes Fuerzas Armadas en nuestra frontera norte para aterrorizar a nuestros vecinos y, finalmente, causarle la muerte o mutilación a innumerables personas. Incluso a los propios soldados encargados ahora de desactivarlas.

Hasta hoy se descubren nuevos episodios criminales como el que nos proporciona una excelente investigación periodística sobre lo acontecido en el centro de exterminio de La Reina en Santiago, donde se descubre la impunidad de que todavía gozan quienes perpetraron la tortura, muerte y desaparición de prácticamente todas las directivas del Partido Comunista que cayeron en manos de un comando operativo financiado y asistido, entre otros, por el empresario Ricardo Claro, quien muriera hace algún tiempo en el reconocimiento y homenaje de los grandes medios de comunicación, de las autoridades del país e, incluso, de la Jerarquía Eclesiástica. Un conspirador y terrorista de larga data y del cual sería saludable alguna expresión de La Moneda y de la clase política tan celosa por la acción de estos jóvenes “anarquistas” que no son más que *guatapiqueros* frente a quienes manejan el poder de fuego en Chile y lo siguen descargando contra su

propio pueblo. Motejándolos de feroces enemigos del “estado de derecho”, de la “paz social” y otras pamplinas que hoy dicen cautelar los golpistas de ayer e instruyendo a sus fiscales para que les armen burdos montajes a fin de incriminarlos y que, finalmente, no tienen más destino que ser desestimados por los Tribunales.

En la cobertura que nuestra legislación le sigue dando al terrorismo de Estado se explica la mantención de la justicia militar, de sus fiscales y “magistrados” dependientes de las jerarquías castrenses y cuyas resoluciones explican que un cobarde uniformado sea absuelto después de dos sentencias condenatorias, luego de que sus propios abogados defensores se empeñaran más bien en rebajarle la pena que alegar su inocencia. Un gravísimo sobreesimiento que, indudablemente, encenderá la hoguera que vive la Araucanía, desacreditará aún más nuestro sistema institucional y nos causará un enorme daño a nuestra imagen externa. Escenario que siempre resulta propicio para quienes tienen vocación autoritaria, desconfianza profunda por la democracia y desprecio consuetudinario por los principios establecidos por el derecho internacional.

19 de agosto de 2012

¿FIN DE LA TRANSICIÓN?

Que hayamos tenido un buen número de elecciones para elegir gobiernos, parlamentarios y representantes en los municipios por más de 20 años no significa que este país viva en democracia. Uno a uno, los presidentes de turno han querido dar por concluida la transición política, pero lo cierto es que las últimas cinco administraciones son parte más bien de la larga posdictadura que ha sucedido al régimen de Pinochet, en la que mucho de lo legado por ésta ha sido sacralizado por sus sucesores o no ha podido ser corregido.

En primer lugar, cuesta comprender que una democracia pueda edificarse sobre los cimientos institucionales del autoritarismo, sobre su Constitución, régimen electoral y monstruosidades tan cuestionadas como la Ley Antiterrorista, las que al momento de su imposición fueron severamente fustigadas por quienes después llegaron a La Moneda y el Parlamento. En este sentido, lo único que puede inaugurar un régimen democrático es la aprobación mediante un plebiscito de una nueva Carta Fundamental que resulte, como debe ser, de una Asamblea Constituyente. De esta forma, tampoco podremos arribar a un orden más republicano mientras exista un sistema binominal que acota la representación parlamentaria sólo a las dos primeras mayorías y por ende resulta de los arreglos cupulares de una clase política que languidece en los poderes del Estado. Conminada constantemente por los poderes fácticos a dejar todo como estaba y perpetuarse con el financiamiento electoral asignado por los grandes grupos económicos

que, para colmo, ya son más foráneos que internos. Con lo cual nuestra soberanía nacional está completamente en entredicho.

Como lo manifiesta la mayoría de los científicos políticos, resulta muy poco genuina una democracia cuando la población está marcada por profundas desigualdades en el ingreso y posibilidades de vida; menos, todavía, cuando la sociedad civil está coartada o restringida en derechos tan fundamentales como el de asociación y movilización. En efecto, los bajísimos índices de sindicalización y la represión policial que se ejerce en cada manifestación callejera, lo cierto es que hace poco concebible que los ciudadanos puedan ejercer sin temor y de forma informada su derecho a sufragio. Las cifras de la pobreza y marginalidad en que viven todavía tantos millones de chilenos los expone a distintas formas de señuelo propagandístico y cohecho electoral. Tanto así que en la competencia municipal que recién se inicia los partidos y candidatos disfrazan sus denominaciones con nombres de fantasía para ganar justamente el voto de los incautos o de quienes tienen las peores carencias educacionales.

Hoy en el mundo no se concibe una democracia sin que exista un régimen comunicacional caracterizado por la diversidad informativa. En efecto, la superficial y uniformada televisión abierta, la escandalosa concentración de la prensa, como la extranjerización de los medios radiales, sólo le dejan al internet y a un puñado de expresiones libres e independientes la posibilidad de formar conciencia, ejercer la crítica y promover los cambios que el país necesita. Aunque hoy ya no se encarcela el pensamiento, lo cierto es que éste vive amordazado por las expresiones periodísticas controladas por los mismos poderes económicos enseñoreados en nuestros yacimientos, empresas estratégicas y sistema financiero. Cosa de ver quienes han arribado en estos últimos años a los canales de televisión que pertenecieron a las universidades, como apreciar el enorme número de radioemisoras de propiedad de una empresa española que, ciertamente, no viene a lucrar directamente con éstas, sino a servir, o actuar de “palo blanco” de las ingentes inversiones de sus connacionales en el control del agua y los recursos energéticos y la banca en nuestro país.

Estas dos últimas décadas nos demuestran que las distintas fórmulas

que se han rotado en la política de verdad no difieren unas de otras, como tampoco legislativamente es posible vislumbrar actores que se desmarquen de la rutina en que vivimos. Por el contrario, vemos que cada día se consolida el régimen de inequidades e impunidades heredado, ahora tan signado por la corrupción de la clase dirigente, la colusión empresarial, los abusos contra los consumidores, el narcotráfico, el crimen organizado y otra serie de lacras que siempre prosperan cuando los ciudadanos no inciden en la toma de decisiones, la prensa no vigila a las autoridades y los militares medran de toda suerte de privilegios. En la posibilidad que siempre se reservan de atentar contra el orden establecido.

De lo cual ahora nos libramos justamente porque nuestro régimen institucional tiene mucho más de lo dispuesto por su Dictadura que por lo demandado por el pueblo consciente.

5 de agosto de 2012

EL TRISTE PAPEL DEL PARLAMENTO

Estas últimas semanas han sido elocuentes en demostrar la debilidad institucional de nuestro Poder Legislativo. Las resoluciones sobre el monto del salario mínimo y la práctica del lucro en la educación superior dejaron de manifiesto lo poco que importa este supuesto poder del estado en el acontecer político, cuando incluso las mayorías expresadas en sus votaciones internas finalmente son burladas por los vetos presidenciales y mecanismos tan absurdos como que los votos en blanco puedan sumarse a la posiciones minoritarias y, así, dejar a senadores y diputados en el más completo ridículo frente a la opinión pública.

El sistema electoral binominal que todavía rige para elegir a los parlamentarios cumple exactamente con la trampa perseguida de dejar prácticamente empatados a los dos grandes bloques políticos legislativos, lo que le entrega siempre al Poder Ejecutivo la adopción de decisiones bajo un sistema constitucional que, además, no contempla la consulta ciudadana para resolver sobre cuestiones cruciales, como ocurre en otros países republicanos. Las negociaciones políticas para mantener el duopolio que por más de dos décadas sigue apoltronado en nuestras dos cámaras les da a las cúpulas de los partidos un poder abusivo en la determinación del voto de sus parlamentarios, quienes a la hora de adoptar posiciones, ciertamente, se inclinan por lo que le instruyen sus colectividades, más que por lo que les dicta su conciencia o le demandan sus supuestos representados.

En estos días, el país ha tenido la oportunidad de comprobar la enorme

presión ejercida desde La Moneda para asegurarse los votos de Renovación Nacional en la definición de un monto indecoroso para los más de 500 mil trabajadores condenados a recibir un salario de hambre, pese a que el propio presidente de esta colectividad oficialista y no pocos parlamentarios demandaron infructuosamente un monto mayor. Pero sabemos que éstos, finalmente, terminaron alineando su voto con la posición del Ejecutivo, pero ni así éste pudo reunir los votos parlamentarios para aprobar su proyecto. De esta forma es que tuvo que sacar de la manga un veto aditivo, triquiñuela que en 73 oportunidades ha servido de instrumento a los gobiernos de la posdictadura para burlar los acuerdos parlamentarios.

Por estos vicios institucionales sin corregir, no es de extrañarse que la labor legislativa y el prestigio de los partidos compitan por los últimos lugares en el grado de credibilidad de la población. Sabido es que la baja popularidad del propio Presidente de la República es todavía mucho menor respecto de los partidos y el desempeño de nuestros diputados y senadores. Quienes ni siquiera se ruborizan por las escandalosas dietas y asignaciones que reciben por una labor que se aprecia cada día más irrelevante. No escapa a la observación ciudadana que, en el momento en que se determina fijar en apenas 193 mil pesos el salario mínimo mensual, nuestros “legisladores” se hayan incrementado sus ingresos en más de dos millones, con lo que sus remuneraciones se igualan o sobrepasan las percibidas por los parlamentarios de los países más ricos y en cuyas democracias el poder legislativo ciertamente cumple un papel relevante en la toma de decisiones.

A pesar de los conciliábulos que algunos dirigentes políticos vienen realizando para promover reformas a la ley electoral y la institucionalidad vigente, lo más probable es que se cumpla un período más de plena vigencia de la Carta Fundamental, y el país enfrente elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales bajo las máculas autoritarias, las leyes represivas y el diseño económico desigual heredados de la Dictadura. No se ve en los actuales moradores de La Moneda, ni en estos pretendidos representantes del pueblo, voluntad seria de escuchar al país y prevenir la inminencia de un nuevo quiebre institucional, en que la protesta popular cada vez más extendida, cuanto el desencanto y la desafiliación masiva de los referentes

políticos tradicionales, legitimen acciones más drásticas como las que ya se manifiestan en nuestra Araucanía, como en la creciente indignación de los jóvenes y trabajadores a lo largo de todo nuestro territorio.

Por más que quienes nos gobiernan, o le hagan de comparsa en el Parlamento, se empeñen en dictar leyes que ahora prohíban expresar su público descontento. Cometido que ahora desvela al Ministro del Interior, a su asesor de Seguridad y a un buen número de legisladores después de que el otro Poder del Estado los expusiera al ridículo al descubrirles todo un montaje jurídico policial caratulado por la prensa como el “Caso Bombas”, y que tenía por objeto inhibir la protesta social, como desacreditar las demandas estudiantiles.

Divorciada la clase dirigente del país real, hay quienes ya recurren a los poderes fácticos (empresarios, dignidades eclesiásticas, militares y otros) para que impongan medidas de corrección institucional, o determinen simplemente la interdicción de muchos de sus subordinados en esta actividad, especialmente de quienes se perpetúan fatalmente en los cargos públicos. Un camino, sin duda, inútil y arriesgado, cuando son exactamente estos referentes el verdadero poder detrás de trono de los políticos profesionales.

Es más saludable, por cierto, alentar el camino de la movilización social, de la desobediencia civil y del poder popular, aunque para ello debamos arriesgar convulsiones sociales y costos que, de todas maneras, serían menos traumáticos que la perpetuación de la injusticia y la violencia institucionalizadas. O de los cuartelazos que cíclicamente interrumpen nuestra convivencia.

22 de julio de 2012

NUEVO SINDICALISMO Y MOVILIZACIÓN

Más allá de que el Gobierno hizo imposible la marcha convocada por la CUT para demandar un salario mínimo justo, la convocatoria sindical fue mínima comparada con las movilizaciones de los estudiantes, de los medioambientalistas y otros. Lo que vimos es a los mismos dirigentes y adláteres que todavía podrían notarse menos en las calles si no fuera por el apoyo solidario y entusiasta de un buen contingente de jóvenes y activistas. En vez de reprimirla desde un comienzo, más le habría convenido al Ministerio del Interior que el país hubiese percibido que los manifestantes eran sólo los de siempre, pese a que no han cesado los horrores perpetrados contra los derechos laborales y salariales de la inmensa mayoría de la población. Por cierto que en uno de los países más desiguales de la Tierra, donde los grandes ejecutivos de las empresas perciben ingresos 700 u 800 veces más que sus empleados. Cuando la propia dieta parlamentaria asciende a sumas 30 veces por encima del ingreso familiar promedio de los chilenos.

No es posible explicarse la inmovilidad laboral sólo en el precario porcentaje de sindicalización del 10 por ciento y que denuncia una realidad vergonzosa aún sin corregir en más de dos décadas de post pinochetismo. La Dictadura Militar desactivó toda la organización social del país, pero los estudiantes, por ejemplo, fueron capaces después de recomponer sus organizaciones e, incluso, consolidar referentes de mayor amplitud que las de nuestro pasado republicano. No hay duda de que lo que hay aquí es negligencia de los dirigentes sindicales, casi únicamente afanados en perpetuarse en sus cargos y en una colusión escandalosa con los gobiernos de turno y las cúpulas partidarias.

En la rutina de todos los años, como es la fijación del salario mínimo y el reajuste general de remuneraciones, lo que observamos siempre es que las cifras se arreglan en conciliábulos convocados por La Moneda, las grandes entidades patronales y algunos partidos. Salvo ahora, posiblemente, en que frente a un gobierno de centro derecha las demandas laborales se hacen más ambiciosas y son respaldadas por aquellas dirigencias políticas que, en su hora, ofrecieron reajustes salariales todavía más mezquinos que los del actual Ejecutivo.

Es evidente que importantes sindicatos del país, como el de los empleados bancarios y los del sector de la salud, están desafiliados de hecho de la CUT, cansados de los arreglos de las cúpulas laborales, los padrones electorales secretos y la poca transparencia de los procesos para elegir o, más bien, reiterar en sus cargos a los mismos de siempre. En tantas negociaciones frustradas con las autoridades, se ha instalado la sospecha de que los dirigentes obtienen coimas de las autoridades a fin de “ablandar” sus demandas, cuanto aportes de los gastos reservados de las administraciones de turno para ayudar a financiar los gastos operacionales de las entidades gremiales.

En tantos años, resulta inconcebible que los trabajadores chilenos no tengan derecho a negociar colectivamente con sus empleadores y que a vista y paciencia de ellos el sector patronal atomice sus RUT o giros tributarios para burlar los derechos laborales, condicionando a que legalmente en nuestro país exista un mínimo de trabajadores por empresa para poder sindicalizarse. Por otro lado, sabemos que el derecho a huelga mantiene restricciones inauditas, como la prohibición que pesa sobre todos los funcionarios del Estado, a quienes se les puede exonerar o descontar de sus salarios los días no trabajados.

Lo que ya no será posible es que los actuales referentes sindicales o gremiales puedan recuperar credibilidad y poder de convocatoria frente a la necesidad que tiene el mundo laboral de exigir remuneraciones dignas y acordes con el crecimiento de la economía. Las próximas elecciones para renovar la directiva de la CUT y otras agrupaciones lo más probable es que perpetúen los vicios y nuevamente se vuelvan a imponer las mafias político sindicales. En este sentido, no podemos dejar de sorprendernos de la ingenuidad reinante en tantos dirigentes y agrupaciones que, en la es-

peranza de una renovación de estos arcaicos referentes, terminan todos los años legitimando sus espurios procesos electorales. Por otro lado, tampoco la solución pasa por marginarse de los mismos y quedarse a la intemperie social. Es preciso que los líderes de la Confederación de los Trabajadores del Cobre y de ese gran número de sindicatos descolgados de la CUT converjan en instancias genuinamente democráticas que lleguen a representar las demandas de los maestros, los funcionarios públicos, los campesinos, como de tantos otros trabajadores que forman parte de ese ancho mundo laboral sin instancias mínimas de sindicalización.

Señalado como el objetivo rector del modelo económico que nos rige, el afán de lucro no le va a dar sitio a la ética empresarial y a los derechos de los trabajadores. Como tampoco es dable esperar que la clase política se sacuda de sus vínculos dilectos con quienes los financian y los digitan, sea que estén en La Moneda o el Parlamento. A nivel, incluso, de los municipios es evidente cómo los alcaldes y concejales sirven a los inescrupulosos inversionistas en desmedro de las comunidades y de los trabajadores locales. Como tan claramente se evidencia en los fueros obtenidos por Agrosuper, Pascua Lama y otros casos en que, además, sus empresarios obtienen licencia para afectar severamente el medio ambiente.

Se hace necesario avanzar en organizaciones que —con o sin consideración de las injustas leyes que nos rigen— se propongan conciliar sus respectivos intereses, levantar nuevas organizaciones y avanzar hacia una movilización social contundente. Con sentido de clase y en la convicción de que en la suerte de todos va el destino de cada uno de los trabajadores. Porque tal como ya se demuestra en Europa, el escenario no es otro que el de la calle y la protesta social para defenderse de las directrices políticas destinadas a jibarizar el salario laboral y las conquistas sociales para enfrentar la crisis financiera y la voracidad empresarial. Una movilización que además se proponga impedir que los estados serviles salgan otra vez más a rescatar a los banqueros y especuladores, como siempre afectando el bienestar de la mayoría y las conquistas laborales tan arduamente conquistadas.

8 de julio de 2012

AUTOCOMPLACENCIA Y OPORTUNISMO

En otra manifestación de la crisis terminal de la Concertación, un grupo transversal de militantes hace público un documento destinado a reivindicar la tarea ejecutada por esta alianza política, así como el anhelo de recuperar la mayoría ciudadana que le permitió a este conglomerado gobernar por cuatro períodos presidenciales. Bajo el título “De cara al Futuro” el texto postula una alianza no sólo con los partidos que hoy integran este referente sino que con los movimientos sociales del país, sin precisar cuáles, y sin destacar tampoco entre los 32 firmantes a personas del mundo gremial, sindical o estudiantil. Por el contrario, la mayoría de los convocantes pertenece al reconocido ámbito cupular de la Concertación, a sus principales operadores políticos y a quienes desempeñaron cargos en el área de la educación, las comunicaciones y las relaciones internacionales, es decir, aquellas funciones en que se cometieron los despropósitos más fatales para la continuidad de los concertacionistas en La Moneda. Nombres, por lo demás, que derivaron rápidamente en las tareas del lobby o el tráfico de influencias, así como de los negocios y la educación privada, cuando no continuaron, incluso, vinculados a cargos públicos de confianza del actual gobierno.

Postulando como estrategia la unidad del centro con la izquierda, lo cierto es que los firmantes ven con desagrado el camino propuesto por el PPD y el Partido Radical de consolidar una relación más estratégica que electoral con el Partido Comunista y otras expresiones. Ello explica que “De cara al Futuro” haya caído realmente mal a los dirigentes de estas

colectividades, recibiendo sin embargo la entusiasta aprobación de demócratas cristianos y socialistas. Dos expresiones resueltas a hermanarse, también en Chile, con el centro político, la aceptación del modelo económico neoliberal, cuanto con el régimen político de rasgos autoritarios y tan poco representativo que nos rige. Sin perjuicio que para capturar votos, ambos referentes suelen emitir un discurso vanguardista, así como consolidar pactos electorales y arreglos parlamentarios a diestra y siniestra, legitimando el sistema electoral binominal y, en general, la institucionalidad heredada de la Dictadura.

Expresión de esto es que, ahora en la oposición, demandan con descarado oportunismo un reajuste del salario mínimo mucho mayor del que ellos mismos le otorgaron a los trabajadores durante sus administraciones, tal como postulan hoy, sin sonrojarse, el rol tutelar del Estado en la educación y la explotación de nuestras reservas mineras. Cuando fueron sus gobiernos los campeones en privatizar y extranjerizar la explotación de nuestros yacimientos, cuanto en restringir los presupuestos y afectar la calidad de colegios y universidades públicas. No es casual, asimismo, que entre los 32 nombres que suscriben este manifiesto destaquen personas que durante los últimos años del régimen castrense se empeñaran en romper la unidad política y social consolidada en las movilizaciones sociales, provocando (con el manifiesto respaldo de los Estados Unidos) la irrupción de una Alianza Democrática que separara aguas de las organizaciones políticas de izquierda. Las que se vieron obligadas a agruparse en el Movimiento Democrático Popular (MDP) que, por cierto, no fue parte de la fórmula política que negoció la “salida política” con los militares, los grupos fácticos y el Departamento de Estado Norteamericano.

Lo que no debe sorprender a nadie es que esta iniciativa transversal haya madrugado a todas las directivas partidarias y al conjunto de la política. Reconozcamos mérito a los firmantes de esta declaración haber permanecido distantes de las reyertas que consumen a la política cupular, como de esa encarnizada disputa por convertirse en candidatos presidenciales a más de dos años de los comicios respectivos. Probablemente en éstos no exista la voluntad de irrumpir en ésta con un candidato ya con-

sensuado y mantenido “bajo la manga”. Se trata, en este caso, de personas cuya trayectoria indica que lo que realmente buscan es formar parte del futuro después del interregno piñerista y tener influencia en la nueva repartición de cupos y prebendas para sí y sus adláteres. Muy probablemente de lo que estén verdaderamente convencidos es que Michelle Bachelet es la mejor carta para retornarlos a La Moneda, siempre y cuando ésta no se avenga a una componenda política tan amplia que la obligue a partir la torta entre muchos advenedizos.

De otra manera, habrían hecho un esfuerzo por sumar a sus revenidos rostros aunque fuera unas pocas figuras del mundo social actual y de los nuevos líderes que buscan el relevo en la calle y en la lucha por una educación y un sistema de salud de calidad para todos; por la recuperación de nuestros recursos estratégicos; para ponerle freno a la extrema riqueza y distribuir con justicia el ingreso; exigir la protección de nuestra biodiversidad; el término del las AFP y las isapres; el advenimiento de una Asamblea Constituyente y una democracia auténtica. Y, por supuesto, empeñarse lealmente en una política de integración con nuestros países hermanos, y que renuncie a la carrera armamentista con nuestros vecinos. Junto con ponerle fin a las antiguas impunidades como a las que favorecen actualmente al duopolio de los políticos y empresarios corruptos.

23 de junio de 2012

¿QUIÉNES SON LOS BUENOS POLÍTICOS?

Participando o no de sus ideas, siempre estimé que los buenos políticos eran aquellos que tenían ideas sólidas, ejercían un liderazgo en la sociedad y se comportaban consecuentemente con lo que sostenían. Un buen político era, además, el que en los momentos adversos y amargos eran capaces hasta de morir por sus convicciones. De esta forma es que siempre valoré la heroica lucha de nuestros próceres de la independencia, más allá de que, en su final, fueran traicionados, confinados al ostracismo o completamente apartados de la vida pública como le sucedió a Bolívar, San Martín o nuestro propio Padre de la Patria.

Había buenos políticos de derecha y de izquierda. Dirigentes que desarrollaron partidos y referentes ideológicos, que fracasaron una y otra vez en las elecciones pero que, por su constancia y brillantez, a veces alcanzaron altos cargos, pero en otros casos han sido ulteriormente reconocidos en su legado. Personajes, incluso, que en la cúpula de poder se demostraron capaces de ofrendar su vida en beneficio de las causas que defendieron.

De esta forma es que los ex presidentes Balmaceda y Allende fueron finalmente reconocidos y admirados hasta por muchos de sus adversarios, tal como otros enormes líderes mundiales de la estatura de Gandhi, Lincoln, Juan Bosh y tantos otros que encontraron reconocimiento después de muertos. Porque los buenos políticos tienen que ser seres empecinados, éticamente inquebrantables y soportar que una buena cuota de sus contemporáneos los abomine y persiga. Situación que se ilustra muy certeramente

con el asesinado ministro Diego Portales, tan criticado en su época, pero a quien después se le ha otorgado hasta el exagerado título de fundador de nuestro Estado.

A propósito de unas lamentables expresiones de Patricio Aylwin, no deja de llamarnos la atención que para éste y otros opinólogos la virtud de un conductor político sea la de saber acomodarse a las circunstancias, salvar ileso de las grandes convulsiones y acomodar su discurso de manera de sortear cualquier atolladero. Allende, para éstos, sería un presidente “mártir”, un “héroe” incluso, pero un mal político por lo que sucedió después con el Golpe Militar y los graves trastornos a nuestra convivencia. De esta forma, el extinto Presidente sería “el principal responsable” del quiebre institucional y del alzamiento castrense, más que los propios oficiales golpistas, la instigación del gobierno norteamericano y, desde luego, de la acción de quienes en Chile desde antes que asumiera en La Moneda ya estaban conspirando en su contra.

De sus propias expresiones, debiéramos deducir, entonces, que Aylwin es un buen político si se considera su habilidad para salir indemne de las crisis y por haber encabezado la llamada Transición a la Democracia después de haber sido, sin duda, uno de los principales propiciadores y defensores del Golpe Militar de 1973, desde su cargo de Presidente de la Democracia Cristiana. Un habilísimo político que, después de haber defendido por años en su partido la tesis del camino propio para acceder al poder, terminara pactando y gobernando con los allendistas que él fustigara y, en su momento, considerara un peligro para el país. Debíamos concluir que se trata de un “visionario” dirigente que por tantos años proclamara las ideas del humanismo cristiano, para terminar administrando el modelo neoliberal heredado por el Dictador. Además de asumir la Constitución de 1980, pese a que en su hora la considerara ilegítima en su origen y contenido. ¡Qué lección de política, entonces!

Así también es que debiéramos asumir como buenos políticos a otros como el ex senador y ministro de Economía Carlos Ominami que entre sus “pecados de juventud” formó parte de las más diversas colectividades políticas, como el MIR, el partido socialista de Allende y, luego, ofició como

ministro de Economía del propio Aylwin. Tiempo en que fue vitoreado por la cúpula empresarial chilena, especialmente en una reunión con la SOFOFA en que se le prodigó uno de los más extendidos aplausos que recuerde nuestra historia. Aunque después tuviera el coraje de romper con la Concertación, pero para sorprendernos hoy con una entrevista de prensa en que le enrostra a Allende haber sido un “mal político”. Entre otras cosas por no haber puesto mano dura contra las organizaciones de “ultra izquierda...”.

De ser así, ¡vaya que tenemos buenos políticos en Chile! Si consideramos la habilidad de quienes justificaron las violaciones a los DDHH y el terrorismo de estado y, luego, llegaron impunemente al poder para demandarnos apego a la Ley, el espíritu republicano y la democracia constituida. Buenos políticos como tantos ex exiliados que militaron en vanguardistas expresiones de su época y que ahora han devenido en hombres de negocios, directores de bancos privados y en lobistas, un eufemismo extranjero para los traficantes de influencias de todas las épocas y latitudes. Sujetos que anduvieron por todo el mundo pidiendo compasión y estirando la mano para sus propósitos insurreccionales, para después terminar consolidados en las páginas de El Mercurio y La Tercera como ponderados columnistas. Estudiantes rebeldes que ayer se tomaban las universidades para defender la educación libre y gratis y ahora se los ve en las entidades privadas rendidas al lucro y entregan una educación de mediocre calidad. O quienes condujeron a la muerte a tantos jóvenes combatientes, para luego convertirse en traficantes de cupos y prebendas parlamentarias y municipales.

Los tozudos, en cambio, seguimos pensando que es preferible “vivir con honor o morir con gloria” y que “la revolución es moral o no es revolución”. Que los grandes idearios de justicia y libertad siguen estando pendientes. Que las grandes verdades no se prueban en el presente, sino en el porvenir. Que la fidelidad ideológica debe ser uno de los ingredientes fundamentales de la política.

10 de junio de 2012

CUANDO LA POLÍTICA ES MEDIOCRE

Abundan en la política chilena candidatos y postulantes a ocupar los cargos públicos. Pero éste no es un tiempo en que se defiendan idearios, proyectos de cambio, ni se destaquen líderes o genuinos conductores. Como se ha señalado tantas veces, los dirigentes actuales se han hecho rehenes de sus ambiciones desmedidas, de lo que determinan las encuestas y de lo que suena “políticamente correcto”. Lo que finalmente siempre resulta aguachento, sin audacia y muy oportunista.

Si en algo se desmarcó nuestra historia de la rutina política de otras naciones, especialmente de aquellos regímenes perpetuos y autoritarios que tanto han asolado a América Latina, fue en la oferta notable de estadistas que organizaron partidos, propusieron grandes transformaciones, fomentaron la organización social y fueron capaces de congregarse a cientos de miles de militantes y partidarios que hicieron de la política una insigne actividad humana, al ritmo de un pueblo movilizado, vigilante y celoso de su soberanía. De cierta forma orgullosos de quienes lo convocaban.

Entre el gobierno actual y los que lo precedieron no se descubren diferencias sustantivas, pese a la crítica acerba y cruzada entre aquellos que completaron cuatro períodos presidenciales y los que ahora entran dos años en La Moneda. Tanto en Chile como en el mundo, lo cierto es que sólo existen y persisten diferencias sutiles entre las posiciones socialdemócratas o centro derecha. Incluso, es posible comprobar en regímenes conservadores realizaciones con más sentido social que las logradas por

quienes en una época fueron hasta vociferantes vanguardistas. Desgraciadamente, cuando las izquierdas se apoltronan en el poder no resisten la tentación de ganarse la confianza de aquellos referentes más reaccionarios de la economía, de los medios de comunicación y de las potencias e instituciones gendarmes. El propio gobierno de Sebastián Piñera se animó a emprender algunas reformas que sus antecesores se negaron o temieron realizar, como eliminar las asignaciones para la salud que debían pagar los jubilados de escasos ingresos, extender el derecho postnatal y, ahora, abogar por un ingreso “ético” familiar mínimo que signifique algún alivio para las 160 mil familias más pobres del país.

Pero ello, ciertamente, no le dará el título de progresista a la actual administración, pero estas realizaciones por lo menos podrían haber logrado que sus antecesores renovaran su discurso y subieran su oferta política a un país que sigue manifestando los niveles mundiales más altos de inequidad y de desencanto colectivo. Ello debe explicar que las mismas encuestas señalen que la disposición mayoritaria de los ciudadanos es a abstenerse en los próximos comicios. Como que el desprecio popular a los referentes del oficialismo y de la Concertación supere, incluso, el repudio abrumador que le espetan los sondeos a nuestro Primer Mandatario.

Definitivamente, son muy sutiles las diferencias de unos y otros adeptos a las políticas neoliberales, como a la institucionalidad vigente. Por lo mismo que ya completamos 22 años marcados por la misma mediocridad y su consecuente adopción de medidas insuficientes que no resuelven ni temporalmente los problemas. Más de dos décadas en que se ha rechazado la posibilidad de una Asamblea Constituyente y a la Constitución heredada de la Dictadura de Pinochet sólo se le han aplicado enmiendas menores que no cambian su naturaleza autoritaria, ni logran un sistema electoral de generación genuinamente democrática de los representantes en el Parlamento. Que sigue limitando el voto universal de todos los chilenos mayores de edad, que le asigna al dinero una influencia desmedida en la selección de candidatos, además de desprestigiar el plebiscito y las consultas ciudadanas en cualquier ámbito.

Sucesivas y mediocres reformas tributarias sin intención alguna de co-

rregir las escandalosas diferencias en el ingreso, limitar la usura del sistema financiero y las indecorosas ganancias de las empresas mineras y de servicios básicos. Como tampoco la voluntad de suprimir ese beneficio que todavía se les otorga a las Fuerzas Armadas, haciéndolas receptoras del 10 por ciento de las ventas de nuestra minera estatal, con lo cual sus asignaciones fijas y variables nos han puesto, en el Continente, a la cabeza del gasto militar y la adquisición de armamentos. Además, por cierto, de la pusilanimidad de todos los últimos gobiernos respecto del desafío de una superación definitiva de nuestros litigios fronterizos, para lo que se necesita de verdaderos estadistas, latinoamericanistas y patriotas.

Débiles reasignaciones en el presupuesto nacional que siguen sin hacerse cargo de los recursos que se necesitan para corregir las horribles desigualdades de nuestro sistema educacional y comprometer al Estado en la preparación de buenos profesores, cuanto de una formación pública de calidad en todos los niveles. Cinco gobiernos sucesivos en que se privilegia y no se regula adecuadamente a los establecimientos privados que lucran con un derecho humano esencial.

Una vergonzosa normativa medioambiental que le otorga a los gobernantes de turno y al *lobby* empresarial la facultad de hacer prosperar toda suerte de despropósitos en desmedro del territorio, recursos naturales y equilibrio de nuestros ecosistemas. Políticos y medios de comunicación que se corrompen con las coimas y contratos publicitarios de poderosas compañías que llegan al desparpajo de reconocer públicamente lo que le asignan a las campañas políticas y la elección de parlamentarios, ediles y concejales dóciles. Mediocres, aunque aspavientosas, medidas de mitigación y multas que nunca logran detener o paliar el enorme daño provocado por edificaciones que vulneran los proyectos originales, que no consultan a las poblaciones aledañas y que derivan en enormes trastornos viales y a la salud pública.

Incapacidad crónica del sistema judicial y de las policías para garantizar la seguridad pública. Recursos millonarios para acentuar la represión y adquirir medios de disuasión cada vez más drásticos para reprimir las manifestaciones populares, pero no para prevenir una delincuencia que tiene

origen en la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, como en un sistema carcelario sin recursos para rehabilitar a quienes han delinquido. Supresión de las condenas de cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata” que asaltan masivamente a los consumidores y afectan la fe pública, como apenas se le hacen retoques a la absurda y criticada jurisdicción de los tribunales castrenses. En un país que sigue segregado por la justicia que se le otorga a civiles y militares, como a los pobres y ricos. Tal como existe una magnífica previsión para los uniformados, al mismo tiempo que un horrible destino para los pensionados de las AFP; clínicas militares y exclusivas excelentemente bien equipadas, versus hospitales completamente colapsados en su capacidad de atender efectivamente a los pacientes y evitar que tantos chilenos mueran antes de ser siquiera atendidos.

Políticos mediocres y ensimismados, sólo capaces de ofrecer mediocres soluciones, cuando no completamente tardías, como la reciente Ley Antidiscriminación, por la cual los gobiernos y los legisladores del duopolio político y sus adláteres en el Parlamento se tomaron más de 8 años de discusión. El mismo tiempo que tomó la propuesta de hacer automática la inscripción en el sistema electoral y dejar voluntaria, ahora, la concurrencia a sufragar. Una medida que acaba de sumar a unos cinco millones de chilenos en los registros, pero que ha instalado la incertidumbre, cuanto no el terror, en la clase política respecto de algo inminente cuando campean la mediocridad y la monotonía en la oferta política: que los que se abstienen o anulan su voto sean más que los que vuelvan a entregarle confianza a los consabidos candidatos y partidos. Si es que no se asume, frontalmente, que el país necesita de nuevos referentes, cuanto de verdaderos líderes y propuestas que resulten verdaderamente sensibles a las demandas pendientes, después del estrepitoso fracaso de las políticas de quienes ya están ajados y reseco intelectualmente en su interminable cogobierno. Directrices que se han propuesto aumentar la riqueza, pero sin repartirla. Ufanarse de la democracia, sin practicarla.

13 de mayo de 2012

EL OCASO DE LA CUT

La corrupción de la política tiene su correlato en la descomposición de nuestros referentes sindicales. La misma forma en que se toman decisiones en los partidos y la falta de representatividad de los mismos, se reproduce en la Central Unitaria de Trabajadores y otras mínimas expresiones de los trabajadores chilenos. Lo primero que se debe consignar es que en más de dos décadas de posdictadura, los índices de sindicalización en nuestro país apenas superan el 15 por ciento de la masa laboral. Esto es, que de los 5 millones de trabajadores, menos de 800 mil pertenecen a alguna agrupación sindical. Al mismo tiempo que un porcentaje ínfimo de sindicatos está afiliada a la CUT, entidad que ya no tiene nada de unitaria, ni ejerce liderazgo importante según lo evidencian, incluso, sus paupérrimas convocatorias para conmemorar el Primero de Mayo. Si no fuera por la presencia en éstas de los estudiantes, medioambientalistas y luchadores por los Derechos Humanos, lo cierto es que la concurrencia laboral a las mismas resultaría aún más bochornosa, en medio de un clima nacional marcado por las movilizaciones sociales, cada vez más masivas y extendidas por todo nuestro territorio.

La CUT es una entidad que le ha resultado muy conveniente a los gobiernos de la Concertación como, también, al actual. Para cada uno de los ministros de Hacienda ha resultado cómodo tener interlocución con dirigentes completamente ilegítimos dentro del mundo laboral y sin capacidad de ejercer presión real para imponer las justas aspiraciones, derivadas

de una estrategia política y económica que fomenta el salario paupérrimo, el empleo precario y las colusiones de la clase patronal. La negociación anual respecto del salario mínimo se ha constituido en un trámite cada vez más ignominioso para la dignidad de los trabajadores, quienes en cada oportunidad deben comprobar la distancia existente entre el reajuste que solicitan y el que resulta de la imposición de las autoridades, la decisión de los partidos y los acuerdos parlamentarios.

En el país donde las diferencias salariales son las más pronunciadas del mundo, nuestros representantes sindicales vienen perpetuándose en sus directivas, tal como lo está la camarilla de dirigentes de la CUT y de otras organizaciones, gracias al arreglo cupular y las cuotas de poder que les asignan los comisarios políticos e infectan sus resoluciones y renuncios. Personajes todos que, sin rubor alguno, administran la alcancía sindical en viajes, suculentos almuerzos y viáticos, tanto que para nadie resulta ya un misterio que los fondos que manejan son el resultado de asignaciones de los gastos reservados del Ejecutivo, como de los sobornos empresariales abiertos o disfrazados que premian su buena conducta y “espíritu patriótico” en consentir siempre reajustes que consolidan el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los chilenos, especialmente de los más pobres. En esto es que tiene base, seguramente, el reciente acuerdo de “cuello y corbata” entre la CUT y la confederación patronal de la producción y del Comercio (CPC), en que unos y otros han manifestado un conjunto de “voluntades comunes”.

Cuando se reconoce que el sindicalismo chileno vive en estado de crisis es por la incapacidad demostrada por los dirigentes dignos y limpios para imponerse a las maquinarias electorales de sus organizaciones, donde la cupularidad y el autoritarismo es todavía más escandaloso que el que campea en los propios partidos políticos. Mientras que en los verdaderos regímenes democráticos, los procesos eleccionarios de los sindicatos y otras instancias sociales es reglamentada por ley y vigilada por las autoridades y la prensa, aquí éstos se suceden en el más inaudito secretismo, cuanto que ya es tradicional que las pugnas se resuelvan en la repartición de prebendas y la suscripción de compromisos que prometen renovación y transparencia.

El país no sabe de sus registros y procedimientos electorales, salvo cuando trascienden las prácticas del acarreo de votantes, la desaparición de sufragios y el arreglo final mediante pactos celebrados entre cuatro paredes. De esta forma es que la burocracia sindical de la CUT vuelve a urdir sus comicios internos de agosto próximo, donde lo más seguro es que aquellos que todavía creen posible corregir “desde dentro” a las instituciones descompuestas vuelvan a sufrir una nueva y dramática decepción.

Después de tantos años en lo mismo, es preciso dejar morir a las instituciones arcaicas y proponerse nuevos referentes y propósitos. Que busquen, por cierto, una afiliación sindical masiva y un nuevo pacto laboral destinado a consolidar movilización social, negociación colectiva, salarios dignos, previsión segura, así como la recuperación para Chile de nuestros recursos naturales y empresas productivas y estratégicas. Que ponga a los trabajadores a la vanguardia de aquellas organizaciones sociales que le han dicho **BASTA** al régimen político y económico que nos rige, y sumen esfuerzos por hermanar a Chile con aquellos procesos destinados a recuperar soberanía nacional, impedir la concentración de la riqueza e imponer equidad social.

29 de abril de 2012

LA CORRUPCIÓN COMO OBJETIVO POLÍTICO

Entre los grandes mitos nacionales destaca esa vieja pretensión de que los niveles de corrupción en nuestro país son bajos o muy discretos en relación a lo que sucede en otras naciones del mundo y de América Latina, en particular. Sin embargo, lo que sucede en los más distintos ámbitos nos habla de que en lo que somos realmente insuperables es en esconder la mugre y atribuir como hechos aislados a cada uno de estos deleznable episodios que a diario conmueven e indignan a la opinión pública.

Desde nuestra antigüedad política, el cohecho electoral y los turbios conciliábulos cupulares de la oligarquía estuvieron presentes en las instituciones del Estado. Siempre hubo partidos y caudillos políticos que se enriquecieron en el poder, favorecieron a sus amigos y dispusieron de recursos fiscales para gastar en sus labores proselitistas, más bien electorales. Así lo registran la literatura y los mejores cronistas de ese pasado, donde lo excepcional eran los líderes que asumieron el servicio público con rectitud y vocación de servicio.

Lo mismo ha ocurrido siempre con la llamada clase empresarial, ávida siempre en Chile por ganar dinero de forma fácil y rápida, al abrigo del erario público pero, sobre todo, del bolsillo de los consumidores. La evasión y la elusión tributaria están enraizadas y señalan en cifras los multimillonarios recursos con los que podría el Estado emprender sus objetivos de equidad. La colusión actual de las farmacias, los productores avícolas y las grandes tiendas viene a sumarse a las prácticas de un poderoso grupo de gerentes y ejecutivos que compiten y hacen carrera por ser más eficientes

con las utilidades que recaudan para sus patrones. A costa de restringir el empleo y el salario, elevar los precios de los productos y practicar la usura con el crédito que ellos mismos le ofrecen a los chilenos obnubilados por el consumismo fomentado por los ingentes recursos que gastan en publicidad para, además, tener propicios a los medios de comunicación. Males del pasado tan extendidos, como la triquinosis y otras catástrofes epidémicas, así como ahora la obesidad y las enfermedades respiratorias, tienen mucha explicación en los productores agrícolas, industriales y comerciantes inescrupulosos, capaces de vender veneno y enfermedades hasta en los fármacos con tal de hacer dinero.

Se podrían contar por miles quienes fueron víctimas del abuso sexual de los sacerdotes pero que callaban convencidos de que era preferible hacerlo antes de cometer el más mortal de los pecados: afectar los intereses de la Jerarquía Eclesiástica. De la misma manera como se justificaba la violencia intrafamiliar, la discriminación étnica y la agresión a los homosexuales; como se asume que en las brutales represiones acometidas por Carlos Ibáñez, Arturo Alessandri y Pinochet se incluía a los “maricones” y a los “indios de mierda” como valor agregado en sus siniestros balances.

Claro: en un país que convierte en estatuas la memoria de francos asesinos, no es extraño que acontecimientos luctuosos como el del 11 de septiembre de 1973 sean honrados con el nombre de una avenida de la comuna de Providencia, donde su Alcalde Labbé homenajea a uno de los más brutales torturadores y asesinos vivos, cuanto que ya acumula más de 100 años de condenas dictadas por las cortes. Asimismo como se permite rechazar la sentencia de los jueces que lo obligan a reincorporar a sus establecimientos a los estudiantes expulsado por “razones” políticas. La “familia” militar, en tanto, siempre ha gozado de prebendas que no tienen los otros funcionarios públicos, pero como se trata del más temible de los poderes fácticos, ésta goza de recursos multimillonarios para sus juegos de guerra, hospitales excelentemente dotados para el uso de soldados y familiares, así como acceden a un sistema previsional a todo evento garantizado por los fondos públicos. Mientras, a la inmensa mayoría de los trabajadores se los somete a una escala de sueldos precarios, como a un sistema privado de cotizaciones y retiro dominado por el lucro abusivo y descarado de las AFP y las Isapres.

La palabra “coima” es tan antigua como nuestra trayectoria republicana. Con ella se pagan, por ejemplo, los favores de alcaldes, ministros y toda suerte de funcionarios públicos en la asignación y construcción de obras de infraestructura. Mediante un suculento “peaje político”, la mexicana Tribasa logró la construcción de nuestras últimas carreteras, así como hoy Hidroaysén y otros grandes disparates en contra la naturaleza y la vida humana se aseguran los visados de nuestra turbia institucionalidad medioambiental. Como hasta el voto favorable de un juez que en su peculio personal ostenta más de 100 millones de pesos en acciones de la principal empresa que propicia el proyecto de intervención criminal de dos ríos de uno de los más bellos y límpidos parajes del planeta.

Los abogados más afamados y exhibidos por la televisión son aquellos que, como buitres, andan a la caza de empresarios o políticos procesados por los tribunales. A fin, siempre, y por buenos honorarios, de hacerles breve la cárcel, así como eternos los juicios que por los que están acusados. Como lo que está sucediendo con los especuladores y ladrones de cuello y corbata de La Polar y los sobreseimientos o levisimas sanciones que han conseguido para aquellos que asaltan los recursos fiscales y de sus clientes, o falsean las rendiciones de gastos para destinar platas a sus campañas políticas o allegarle dinero a los partidos.

No es de extrañarse tanto, entonces, de que TODOS los miembros del Senado se hayan procurado un nuevo incremento en sus ya abultadas remuneraciones, bonos de movilización, pasajes aéreos y otros. Casi 20 millones de pesos mensuales, cuando el salario mínimo no llega a los 200 mil y cuando en promedio el ingreso familiar de los chilenos no pasa de los 700. Lo que sí resulta curioso es la hipocresía de la Cámara de Diputados al condenar a sus colegas parlamentarios, cuando ellos ya habían alcanzado la misma suma para su importante labor de legislar y aferrarse a sus cargos gracias a los recursos de que disponen para ganar votos. Como mediante uno de los más espurios sistemas electorales del mundo, que designa a parlamentarios sin elección popular, para que los titulares puedan acceder a otros cargos de la Administración Pública, dejando a buen recaudo sus curules. Cuánto más podría registrarse, todavía, de aquellos políticos que toman años sabáticos como diplomáticos a objeto de pensar y reunir fondos para su nueva reinserción al poder ejecutivo o el Parlamento.

Cuando todo esto ocurre, no es de extrañarse, tampoco, que las autoridades, provistas de tan buenos viáticos y asignaciones, demuestren tanta insensibilidad ante el alza de los combustibles, cuyos precios incide tanto, también, en el transporte, los costos del pan y otras necesidades mínimas. Tanto que Chile ya está a la cabeza de la inflación continental en lo que se refiere al precio de los alimentos, es decir el insumo que representa más de la mitad del gasto de los hogares más pobres y medios. Vaya con cuántas sorpresas nos encontraríamos si se transparentaran los gastos de las incesantes comitivas presidenciales en este país de relaciones tan amplias y diversas, que anda sembrando el mundo con tratados de libre comercio. Para darle, por supuesto, “oportunidades de negocios” a nuestros exportadores, la mayoría de los cuales son extranjeros radicados en nuestros minerales, bosques, empresas de servicio y reservas acuíferas, y que pagan impuestos miserables gracias a que se prodigan en el financiamiento del gasto electoral de quienes mantienen las corruptas concesiones para encantar a los inversionistas foráneos y asegurarse el paso de las décadas en sus “altas funciones”... como suelen definir sus interminables tramitaciones legislativas y el indolente ejercicio de otros cargos.

Todo bajo el manto protector de una institucionalidad nacida de un plebiscito calificado, entonces, como espurio por los mismos que ahora se enseñorean en los cargos públicos. Que perpetúan un sistema económico cruel y perverso en que el lucro de algunos es el objetivo primordial. Por lo mismo que la educación y la salud deben permanecer privatizadas y sujetas a las bulladas “leyes del mercado” que siempre son atropelladas por sus mismos defensores. Un orden económico, social y cultural en que las clases y familias gobernantes no corran el riesgo de verse acosadas por la inmensa mayoría de los chilenos desprovistos de bienes y servicios fundamentales. Condenados, por prescripción ideológica, a ser mano de obra barata para el deleite de los dueños del país. Para quienes la corrupción cotidiana que practican a lo más deviene en “falta de probidad” para el Poder Judicial que siempre han mantenido cautivo. Chilenos privilegiados por generaciones que ahora, finalmente, pueden ser descubiertos gracias a la irrupción del internet, las redes sociales y los comunicadores libres.

15 de abril de 2012

LA DEMOCRACIA AHOGADA

Hoy se acepta a la democracia como una aspiración universal pese a que gran parte de la humanidad ni remotamente vive bajo este régimen, así como bien poco la practican tantas naciones que la proclaman en sus lineamientos institucionales. La Organización de Estados Americanos (la OEA) tiene a la democracia como una condición que deben acreditar los países que la componen, aunque todos sabemos que en la disparidad política de nuestro continente son muy pocos o ninguno los que cumplen con ello de que la democracia es el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, como lo definiera Abraham Lincoln.

El autoritarismo y las graves discriminaciones siguen presentes en la vida de nuestras naciones, al mismo tiempo que en procesos electorarios en que debiera expresarse la soberanía popular sabemos que cada una de nuestras sociedades éstos siguen manipulados por el poder del dinero, de los medios de comunicación y los llamados poderes fácticos. Tales como el gran empresariado, las FF.AA, las iglesias, o las propias zancadillas consagradas en nuestras legislaciones para restringir la representación ciudadana y la posibilidad de que en algunas materias el pueblo participe directamente en las decisiones. Esto es, sin la intermediación de los partidos y los políticos.

En nuestro país, las limitaciones son tan desmedidas, cuanto no sabemos, a ciencia cierta, si vivimos en una dictadura remozada (conforme al legado de la Constitución que nos legara Pinochet), o en un régimen híbrido que contempla elecciones periódicas pero con marcos legales muy

vigilados por las ideologías que el propio autoritarismo y tales instancias fácticas nos impusieran. El binominalismo en la elección del Poder Legislativo, la escandalosa inequidad en el ingreso y el acceso tan desigual a la educación son las más flagrantes muestras de los obstáculos consagrados a la libre y bien informada determinación ciudadana. Pero también hay que considerar nuestra inferioridad democrática en el hecho de que existe un conjunto de autoridades, como los intendentes y gobernadores regionales, que no son elegidos por elección popular, además de gozar de atribuciones y privilegios completamente discrecionales. Sabemos, además, que nuestra vida pública manifiesta vicios tan graves como el cohecho y la posibilidad de que los parlamentarios, alcaldes y otros puedan prácticamente perpetuarse en sus cargos, puesto que en los partidos políticos tampoco existen prácticas democráticas internas que consideren adecuadamente la voz de los militantes. El desinterés actual por formar parte de las colectividades políticas, así como el descrédito de estas arcaicas y ya fantasmales organizaciones se explican en el caudillismo que impera en la política. De allí, además, lo que ocurre con esos pactos electorales espurios, que atienden sólo a devaneos y correlaciones de fuerza cupulares. En el desprecio absoluto a las bases partidarias, los genuinos líderes comunales y regionales.

En las distintas versiones que se tienen sobre “democracia”, nos gusta aquella que indica que un régimen es mejor que otro cuantas veces más tenga que sufragar la población en un periodo de tiempo. Asimetría que se hace evidente, por ejemplo, entre países como Suiza y los escandinavos respecto de naciones como la nuestra, en que votar es una práctica muy esporádica y alcanza difícilmente a decisiones del ámbito comunal y local, como a materias tan trascendentales como modificar o reemplazar la Constitución, resguardar nuestra soberanía territorial y dignidad medioambiental. Mientras que en otros países se escucha al pueblo, incluso, respecto de las estrategias energéticas o el impacto de ciertas inversiones productivas. En las bulladas elecciones primarias recién impulsadas por algunos partidos políticos, éstos no han logrado transparentar el padrón de votantes y se sabe cuánto se impuso en estos comicios el acarreo y el triunfo de los caudillos más acaudalados. En más de 20 años de la llamada Transición a la

Democracia, la sociedad chilena aún no recupera sus estructuras sindicales y gremiales, de tal manera que la inmensa mayoría de los trabajadores sigue a la intemperie en cuanto a sus derechos laborales. Entre todas las instituciones desprestigiadas e ineptas, la CUT se impone en cuanto a la forma en que los viejos dirigentes siguen por décadas apenados a sus granjerías y corrupta colusión con las autoridades gubernamentales de turno. Hasta para acotar el salario mínimo y sacralizar la “flexibilidad laboral”, eufemismo que señala el imperio de las estructuras patronales en la definición de las políticas económicas. De la misma forma, es que los colegios profesionales que en el pasado tuvieron tanta gravitación, hoy en su mayoría no alcanzan a constituir ni clubes de amigos, por lo que los nuevos egresados universitarios muchas veces ni saben que existen. Iglesias y antiguos referentes intelectuales y éticos, incluso, que van quedándose en puras denominaciones, sin feligreses e idearios arcaicos y extemporáneos.

Un patético panorama que, sin embargo, le otorga espacio a la irrupción de auténticas organizaciones estudiantiles que, como la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), une voluntades a lo largo de todo el territorio nacional en su capacidad de convocatoria y convicciones. Así como hay que destacar la esperanzadora organización de asambleas regionales capaces de paralizar ciudades y pueblos enteros en sus demandas económicas, culturales y sociales, como lo ocurrido –por ahora– en Magallanes, Aysén, Calama y Arica. Instancias que cuando asuman que sus expectativas sólo pueden ser posibles en el derrumbe del sistema institucional y económico que nos rige, se constituirán en el definitivo ariete que le abra paso a esa democracia tan ahogada en nuestra vida nacional.

1 de abril de 2012

LA VACUIDAD DE LOS CANDIDATOS

En todas partes es razonable que los políticos quieran escalar hacia las más altas posiciones del estado. Son pocos los que se conforman con llegar a desempeñar sólo determinadas funciones del llamado “servicio público”. Cómo no acordarse, en este sentido, de la determinación que tomara hace años Bernardo Leighton en cuanto a repostularse sólo como diputado, teniendo la oportunidad de llegar a la Cámara Alta y, por qué no, a la propia Presidencia de la República. Ya había sido Vicepresidente el país y tenía un enorme respaldo popular, como que en su reelección obtuvo la primera mayoría nacional sin prácticamente hacer campaña. Como él, la historia política nos señala otra serie de personajes admirables capaces de anteponer a sus ambiciones personales el ánimo superior de servir al país.

En todo caso, quienes en nuestra época republicana se convirtieron en candidatos presidenciales tuvieron que sortear muchos desafíos y obstáculos impuestos, desde luego, por los propios partidos políticos que los respaldaron. En un momento de crisis, Juan Esteban Montero aceptó a regañadientes convertirse en uno de los presidentes de más alta votación, aunque al poco tiempo renunció y retornó muy aliviado a sus afanes de abogado, por cuyo buen prestigio justamente se creyó que pudiera cumplir como jefe de estado.

Registramos, también, que los caudillos han jugado un papel muy decisivo en la política, cuanto que por su propia personalidad y talento logran imponerse en las decisiones partidarias y seducir masivamente a los

ciudadanos. El riesgo es que estos personajes pocas veces están animados de los mejores propósitos y, la mayoría de las veces, resultan un desastre para la convivencia social y la estabilidad institucional. En Chile, Carlos Ibáñez, Arturo Alessandri y el propio Pinochet cometieron las aberraciones criminales que conocemos, además de que sus gobiernos francamente contribuyeron poco o nada al engrandecimiento del país. Sus historias, son las de la represión, la confrontación civil y la deshonra de los militares y civiles que los sostuvieron.

Por otro lado, la decepción popular frente a los políticos suele catapultar a personajes de mundo empresarial y de otros ámbitos que raramente terminan en buenos gobernantes. No hay duda que el oficio de gobernar no es para quienes han hecho del dinero su preocupación fundamental y ejemplos de esto tenemos, claro, en nuestro propio país, pero más contundentemente en los casos de Color de Melo en Brasil; Berlusconi en Italia y Vicente Fox, en México, cuyas administraciones resultaron desastrosas. Como tampoco resultan muy halagüeñas las opciones de actores, deportistas y otros que, a veces, son tentados a incursionar en la política.

Acotada a una clase envejecida y desabrida intelectualmente, nuestra política actual lo que más ofrece son ahora candidatos presidenciales. Es cosa de ponerse a contar para concluir que hemos llegado al absurdo de tener más postulantes que partidos, cuando faltan todavía dos años para los nuevos comicios. El Presidente Piñera tiene al menos tres ministros con ganas de ceñirse la banda presidencial, más unos cuantos que desde los partidos oficialistas también abrigan tal propósito. Lo único positivo de esto es que, a diferencia de otros países, parece no haber nadie en este ámbito que sugiera reelegir al actual mandatario, cometido que ha hecho modificar la constitución y las leyes electorales allí donde la “salvación” se asocia a apenar en el poder a sus caudillos o caudillas de turno.

En la Concertación, asimismo, parece ser que hay más candidatos que militantes, tanto que uno de ellos renunció a la Democracia Cristiana para proclamarse sin necesidad de primarias u otro mecanismo de consulta. Llueven los candidatos en ésta y las otras colectividades de esta alianza electoral sin que se les asocien ideas, programas o prome-

sas, como tampoco trayectorias políticas que les asignen alguna solvencia para alcanzar la primera magistratura del país. Uno de ellos se propone ser el primer alcalde que alcance la presidencia, olvidándose de que en un plebiscito organizado por él en su comuna acaba de obtener un desastroso resultado. Un ex ministro de Hacienda al que le han imputado los concertacionistas ser el primer responsable de la derrota de Eduardo Frei, piensa que él debe ser el ungido, así como existen una serie de parlamentarios que se proponen para el cargo por el simple hecho de haber ganado algunas contiendas a buen resguardo del sistema electoral binominal. Candidatos y candidatas por doquier bajo la sombra de la expresidenta Bachelet, terriblemente cuestionada por lo que no hizo, así como ahora por el tristísimo papel de sus equipos de gobierno en el último terremoto. Lo que le ha provocado un verdadero tsunami político que pudiera afectar realmente sus posibilidades de ser la abanderada de la Concertación. Algo que muchos estimaban seguro.

Distinto es el panorama en los partidos y movimientos de izquierda, incapaces todavía de converger en una alianza política, a pesar de que el descrédito del oficialismo y de la oposición oficial le asignen tan buenas posibilidades. La explicación de que aquí no haya muchos presidencialistas (aunque también los hay) es que probablemente la enorme cantidad de expresiones del sector se deba a que sus pequeños caudillos también crean que es en torno de ellos donde debe consolidarse la unidad tan demandada y una estrategia electoral novedosa. Más allá de que el pragmatismo de algunos los mantenga ocupados tan sólo en retener algunas poquitas alcaldías que les garanticen el sustento a algunos activistas y adláteres. Aunque sea aliándose con quienes han demostrado adicción a la Carta Fundamental y la institucionalidad legada por el Tirano que los combatió tan severamente.

Lo más increíble es que en la política pululan los candidatos, negociaciones, reyertas y proclamaciones mientras Chile crece en ebullición social. Cuando los aiseninos se unen y paralizan su región; mientras los de Calama van por lo mismo y los estudiantes se aprestan a movilizarse de nuevo ya no sólo por sus propias reivindicaciones, sino las del conjunto de

los trabajadores, pueblos indígenas, consumidores, medioambientalistas, pequeños y medianos empresarios. Cada vez más iracundos y convencidos de que la solución no radica en lo sectorial, sino en alterar las bases del régimen injusto e ilegítimo que defiende el conjunto de la clase política. Cada vez más emborrachada por las ambiciones personales, divorciada del pueblo y corrupta en sus ejercicios cupulares. Al grado de ni siquiera aludir al fenómeno de sus contundentes movilizaciones y aspiraciones.

4 de marzo de 2012

NO HAY REMEDIO

Si en Chile tuviéramos una genuina democracia, las autoridades habrían reaccionado severamente en contra de la delictiva colusión llevada a cabo por las tres grandes cadenas de farmacias a objeto de elevar los precios de, al menos, 206 medicamentos. Se habrían hecho eco de la indignación nacional por éstas y otras estafas concertadas sistemáticamente contra los consumidores y deudores por las grandes empresas de ese largo listado integrado por La Polar y otras multitiendas, productoras avícolas, instituciones financieras que han atentado y siguen burlando la “libre competencia” tan vociferada por los activistas y exégetas del sistema económico social que nos rige. Lo único que tenemos, a lo sumo, son los buenos deseos de unos cuantos ingenuos o hipócritas políticos que hacen votos porque estas irregularidades sean sancionadas por la Justicia, en larguísimos procesos que ya se sabe concluyen en muy discretas multas a los infractores. Que en nada, por supuesto, se condicen con las multimillonarias utilidades obtenidas por este tipo de infractores.

De acuerdo a una de las leyes sancionadas en el Congreso durante el propio gobierno de Ricardo Lagos, los ejecutivos de estas empresas fueron librados de la posibilidad de cumplir penas de cárcel por sus despropósitos. A lo más podrían arriesgar otras cuantas multas, pero que en ningún caso afectarán el frondoso patrimonio que estos “emprendedores” han logrado acumular durante los años de Dictadura y posdictadura. Seguramente que a fin de estimular la inversión privada, el conjunto de la clase política agre-

gó al capital foráneo y nacional esta nueva prebenda, además de las exenciones tributarias y a las leyes del gallinero que rigen todavía las relaciones entre empresarios y trabajadores en nuestro país.

Si en Chile tuviéramos una justicia efectiva, nunca nuestro pomposo Tribunal de la Libre Competencia habría negociado con sólo una de las cadenas de farmacias para obtener su autoinculpación a cambio de una multa ridícula, en una resolución que claramente hace dudar de la probidad de los jueces y del fiscal económico que realizaron tal faena. Al menos debiera abrirse un proceso que investigue si Farmacias Ahumada pagó soborno a esos magistrados para comprar apenas por un millón de dólares su impunidad. También habría que indagar porqué el mismo Fiscal Enrique Vergara dejó sin acusar a ese conjunto de laboratorios que proveía las farmacias y cuyos ejecutivos, como se ha dicho, estuvieron totalmente al corriente de esta monstruosa colusión.

Si existiera en nuestro país un régimen de soberanía popular, los representantes del pueblo habrían decretado la intervención del estado para controlar, al menos, los precios de los medicamentos fundamentales que son justamente los que llegaron a incrementar su venta al público hasta en un dos mil por ciento. Por el contrario, lo que escuchamos de los voceros gubernamentales es que sería fatal intervenir políticamente en este asunto, repitiendo majaderamente aquello de que “el Estado es un mal administrador”. Una sentencia que cada vez se hace más absurda con este largo prontuario de desfalcos, usuras y otros que envuelve a la actividad privada. Como también a las empresas públicas que caen en manos del cuoteo político y que, ahora bajo este Gobierno, les han sido confiadas a los ejecutivos de los grandes consorcios mineros. Gerentes que, por ejemplo, aterrizaron en Codelco en un curioso deseo de “servicio público” que en realidad ya toma los perfiles de una comisión de servicio en el ánimo de producir su descalabro y facilitar su próxima privatización. Algo muy similar a lo que ocurrió durante el pinochetismo, en que un puñado de “hombres de confianza” del Tirano vendió a vil precio las empresas de todos los chilenos para terminar enseguida instalados en los directorios y gerencias de Endesa, las sanitarias y otras que finalmente terminaron revendidas por

estos mismos personajes a inversionistas extranjeros. O lo que ocurrió hace algunos años en que el Presidente del Banco del Estado respaldó un millonario empréstito a un poderoso empresario para comprar con crédito del fisco otro banco de la plaza en el que después instalara en su directorio al intermediador fiscal señalado. Es decir, el dirigente socialista Jaime Estévez, que devino de radical exiliado a uno de los conspicuos representantes de las patronales chilenas.

La colusión, las prácticas monopólicas y los abusos de precios que a diario éstas y otras empresas cometen sin tregua contra los chilenos de reducidos ingresos —y que tanto afectan también a pequeños y medianos empresarios— serían imposibles con dirigentes sindicales y organizaciones laborales dignas y poderosas, condición fundamental de una sana democracia. Las buenas acciones del Servicio Nacional del Consumidor caen en el vacío con la corrupción que afecta a la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones que ya son pura denominación y cúpulas perpetuadas en sus cargos gracias a la complicidad de los partidos políticos y las erogaciones que desde los gobiernos de turno les hacen para “convencerlos” de sus impresentables políticas salariales y perpetuar el modelo de inequidad. Una estrategia de “desarrollo” que constituye a nuestro país en paradigma mundial de cómo es posible crecer sin repartir, así como ir concentrando la riqueza en un grupo cada vez más acotado socialmente. Lo que explica que nuestra población ya no pueda estamentarse en quintiles o deciles, y los científicos políticos sugieran la necesidad de repartirnos ahora en veintiles, en razón de que los realmente ricos no exceden jamás el 5 por ciento de la población

Si viviéramos una democracia que garantizara la libertad de expresión y la diversidad informativa, se haría inexplicable que estos escándalos fueran consignados inicialmente por los grandes medios de comunicación para luego desaparecer de sus páginas o noticiarios de la televisión y radios. Como ocurre normalmente con los diarios del duopolio de la prensa escrita, los canales uniformados y las radios crecientemente concentradas en las mismas manos empresariales que delinquen y compran la resoluciones de los legisladores. A propósito de esto, cómo no destacar que un propio

diputado y el Ministro de Salud hayan atestiguado el desfachatado tráfico de influencias o lobby realizado en estos días por las industrias tabacaleras para oponerse a una ley que limita el consumo de cigarrillos. Como ocurre habitualmente, los grandes medios destapan el escándalo y luego lo ocultan al abrigo de los millonarios contratos publicitarios que rápidamente cierran con las empresas cuestionadas. Felizmente el internet, las redes sociales y un puñado de medios libres pueden contrarrestar en parte estas graves transgresiones a la ética profesional cometidas por patrones, editores y periodistas adláteres. Aunque desde los Estados Unidos y los poderosos intereses transnacionales ya se urden severas restricciones a este revolucionario y democrático invento que logra que muchas verdades sobrepasen el umbral de las censuras nacionales y universales.

El cualquier democracia, la protesta por estos abusos tendría encendidas las calles y pueblos, así como cercado a los delincuentes de cuello y corbata. Siempre protegidos por las leyes del más fuerte y un estado de derecho inexistente que, por lo mismo, indica que las enfermedades de nuestra sociedad no tienen remedio dentro de los causes de la Constitución pinochetista, sus instituciones y lo revenidos referentes políticos de esta cuatro décadas de grave interdicción ciudadana.

5 de febrero de 2012

EN ESTADO DE COLUSIÓN

La Corte Suprema acaba de anular un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y decidió condenar a las tres empresas de telefonía celular por coludirse para impedir el ingreso de otros competidores en el negocio. La misma situación por la cual se acusa a las empresas avícolas y por la que se procesó a las tres principales cadenas de farmacias. Un delito reiterado cometido por empresarios y gerentes a objeto de repartirse el mercado del consumo, fijar precios y vulnerar flagrantemente los derechos de los consumidores. Millones de chilenos que están a la intemperie por estas prácticas económicas ilícitas que se demoran largo tiempo en ser sancionadas por la Justicia y ante las cuales se advierte la negligencia culpable de las autoridades políticas y los entes fiscalizadores. Así como de las organizaciones patronales y referentes profesionales que se cruzan de brazos frente a los flagrantes atentados éticos de sus afiliados.

El país tiene la sensación de que de la práctica de las confabulaciones y componendas se producen a escala general. El inicio de la posdictadura, que para algunos sería la transición a la democracia, se fundó en los arreglos secretos de la clase política con los militares y los diversos poderes fácticos, mientras el pueblo combatía en las calles y reclamaba verdad, justicia y reparaciones que después de dos décadas se han conseguido muy limitadamente. Se trataba de darle impunidad a los crímenes de Pinochet, quien fue incluso rescatado y traído al país para impedir una sentencia internacional. Colusión que sirvió, asimismo, para dejar en la impunidad

el gran despojo que se le hizo al Estado de sus principales empresas, para entregárselas a vil precio a los inescrupulosos “hombres de negocios” locales y, posteriormente, revendidas a los inversionistas extranjeros.

Colusión sistemática en el Parlamento para evitar o postergar por años importantes reformas políticas a fin de repartirse y perpetuarse en los cupos, fueros y prebendas legislativas, evitar una profunda reforma tributaria y negarle espacio a los ciudadanos en la toma de decisiones. Acuerdos cupulares para repartirse los cargos de los Tribunales, del Banco Central, los directores de Codelco y otras reparticiones fiscales. Complicidad mutua de oficialistas y “opositores” para echarle tierra, por ejemplo, a los negociados en las obras públicas, el Transantiago y las municipalidades. Para darle, incluso, amparo en Chile a uno de los principales narcotraficantes del mundo, como Amado Carrillo, a quien se les brindo cédulas de identidad y visas para sus secuaces, a cambio de que viniera a “aceitar” las maquinarias electorales y el funcionamiento de los estudios de abogados expertos en defender delincentes de alto calibre. O de “cuello y corbata”, como se los sindicó.

Colusiones en el negocio del fútbol, para consolidar universidades con fines de lucro y repartirse amigablemente hasta las concesiones para la revisión técnica de los automóviles. Para “tercerizar” los trabajos de la gran minería del cobre y conseguir mano de obra con salarios que no alcanzan ni la mitad del de los contratados por Codelco. Confabulaciones entre el Consejo Minero y algunos medios de comunicación para urdir intrigas y conseguir la inhabilidad de un senador empeñado en que las grandes compañías paguen un royalty decente por vaciar nuestros yacimientos. Confabulación entre los gobiernos y la directiva de la CUT para burlar todos los años las demandas salariales, para comprar el voto de diputados “izquierdistas” como René Alinco que, a dos días de apoyar al oficialismo, va a La Moneda a cobrar su comisión. Bochornosa colusión para otorgarles a algunos fieles clientes electorales la pensión de los exonerados, sin que jamás hayan sido despedidos de su trabajo por razones políticas.

Las demoníacas colusiones al interior de la Iglesia Católica para realizar y tapar los abusos sexuales de obispos y sacerdotes. Karadimas, Cox y Ezzatis descarriados del Evangelio y cometiendo el más grave de todos

los pecados: escandalizar a los niños. Así como se encubre, bajo pretexto del secreto de estado y la seguridad, los negociados de los militares en la adquisición de armas y los despropósitos que éstos cometen en su discrecionalidad protegida por los políticos que les temen. Lo que muy posiblemente llevó a la muerte a un grupo distinguido de chilenos en la tragedia aérea de Juan Fernández.

Colusiones de los más prósperos mandamases del *retail*, también, para fijar los precios de los productos esenciales. Hasta para venderle al fisco la solidaria colecta argentina para las víctimas del terremoto, en un escándalo más en que aparece implicado un ricachón como Paulmann, paradójicamente celebrado como “emprendedor” en mérito del ingenio que tiene para esquivar las leyes laborales y tributarias.

Colusiones partidarias que ya se negocian para acomodarse a la posibilidad de que millones de votantes asuman su derecho a voto (pese a que ahora será será voluntario), a objeto de inhibir la concurrencia de los más jóvenes y pobres. Colectividades que pactarán y se concertarán sin apego alguno a sus convicciones políticas (si es que las mantienen), sin otro propósito que permanecer apegado a las diversas ubres fiscales. Suma y sigue en el país de las colusiones, gracias a que tenemos un régimen político todavía más pinochetista que democrático. Lo que se explica por la concentración y falta de diversidad informativa. En un modelo económico que se sustenta en la desigualdad. En la corrupción de la política, el sindicalismo y de los propios referentes éticos.

25 de diciembre de 2011

EL DILEMA DEL PC

Aunque Camila Vallejo obtuvo la primera mayoría entre todos los candidatos a la presidencia de la FECH, los votos de su lista fueron menos que los de la nómina ganadora que encabezó Gabriel Boric. De esta forma, la brillante líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile asumirá ahora solo la vicepresidencia de este referente estudiantil, luego de un proceso electoral marcado por la gran concurrencia de votantes, la radicalización y la casi imperceptible votación de derecha o centro. Casi todos los análisis de los resultados de esta contienda coinciden en que los votos que le faltaron a la lista de Camila expresan un desdén a la militancia comunista de esta destacada dirigente estudiantil. Es decir, representarían el repudio de los jóvenes a la actitud actual de este histórico partido de Izquierda que, después de ser excluido de los pactos políticos que han administrado el gobierno y el parlamento chileno del pospinochetismo, finalmente logró un pacto con la Concertación, cuando se iniciaba la declinación de este referente de partidos mal avenidos que fue derrotado en la última elección presidencial. Y que ahora parece obligada a concordar cualquier fórmula que la libere de un nuevo descalabro electoral, cuando las encuestas le otorgan tan sólo un 14 por ciento de apoyo popular.

Difícil resulta explicarse por qué el Partido Comunista se empeña en alcanzar un nuevo pacto electoral con la Concertación, cuando en estos partidos se suceden las desafiliaciones y escisiones luego de 20 años de gobierno en que el sistema institucional cambió poco o nada de cómo

lo dejara instituido Pinochet en la espuria Constitución todavía vigente; cuando los niveles de desigualdad todavía resultan más oprobiosos que al término del Régimen Militar y luego de que los gobiernos de este sector fueran corrompiéndose en la inconsecuencia ideológica y en las prácticas reñidas con la probidad administrativa, que tanto han afectado el prestigio de toda la política.

A pesar de la pésima imagen pública de Piñera, el gobierno de derecha y sus organizaciones partidistas, la situación de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y del radicalismo todavía es más precaria. Difícil resulta entender, entonces, que justamente con éstos los comunistas busquen establecer alianza, renunciando a buscar alternativa con las numerosas expresiones del vanguardismo que, pese a su atomización, parecieran tener ahora la oportunidad de construir opción política al duopolio del oficialismo actual y de ayer. Cuando centenares de miles de chilenos han irrumpido en las calles para demandar un cambio político radical en un país que sienten anquilosado en sus instituciones y completamente fracasado en el deber que tienen los estados de perseguir igualdad, justicia social y libertad. Cuando alcanzan hasta un 80 por ciento de apoyo popular las demandas por una educación pública de calidad y gratuita, por la renacionalización del cobre, una Asamblea Constituyente, como por un sistema de salud y de previsión que les garantice a toda la población acceso a buenos hospitales y una jubilación digna. O cuando a lo largo de todo el país se repudia la criminal iniciativa de Hidroaysén, la ominosa represión a los mapuches y la colusión de las grandes empresas. Escándalos sucesivos que se demuestran sólo posibles por la connivencia funesta de los políticos y gerentes inescrupulosos, cuanto la existencia de un régimen económico que se nutre del trabajo mal remunerado, de la usura del crédito, la indefensión de los consumidores y de leyes laborales contrarias al sindicalismo y la negociación colectiva. En el marco, además, de un sistema tributario que se funda en esquilmar los recursos de los más pobres y otorgarle todo tipo de privilegios al capital foráneo.

Una realidad nacional la cual, sin duda, abomina el Partido Comunista y que es denunciada a diario por sus dirigentes sindicales y estudiantiles.

Cuyo discurso rupturista de repudio al conjunto del sistema institucional y la clase política fuera expresado persistentemente en las marchas, protestas y debates públicos que han dado origen a lo que ya se identifica como la Primavera de Chile. Donde, por cierto, las personalidades de Camila Vallejo y otros jóvenes comunistas han jugado un papel relevante.

¿Valdrá la pena asegurar unas pocas alcaldías y concejales poniéndose de espaldas a esta explosión social de descontento y posibilidad de un profundo cambio? ¿Valdrá la pena conservar unos pocos asientos en la Cámara de Diputados después de que quedara tantas veces demostrado que, en lo fundamental, oficialismo y Concertación tienen coincidencias fundamentales? ¿Valdrá la pena echar por la borda una trayectoria política consistente de servicio al pueblo para enredarse en las prácticas cupulares del cuoteo electoral?

¿No le resultará mejor a los dirigentes del PC hacerse eco de la sensibilidad y de las expresiones de sus jóvenes líderes que, como la inmensa muchedumbre que sale a las calles, prefiere romper con el orden actual que mantenerse en la ilusión de que los cambios pueden producirse desde dentro del sistema? Como lo prometieron, en su hora, quienes que llegaron a La Moneda y el Parlamento para administrar la herencia institucional del Dictador. A quien, ciertamente, le garantizaron morir en la impunidad.

10 de diciembre de 2011

CON PINOCHET EN EL CORAZÓN

Aunque nos avergüence reconocerlo, el Dictador sigue mucho más presente de lo que creemos en la vida política del país. Seis meses en que el Gobierno desoye las demandas educacionales respaldadas por la inmensa mayoría de la población demuestran la vocación autoritaria y voluntarista de las autoridades, su desprecio por los valores republicanos y el ánimo de hacer prevalecer un modelo desigual que entrega a las leyes del mercado derechos tan esenciales como el de la instrucción y el acceso a la salud. Desprecio por la democracia que se expresa tan nítidamente en el empeño del ministro Hinzpeter de reprimir violentamente las manifestaciones públicas. Como su reiterada intención, avalada por el propio Presidente de la República y su secretario de Justicia, de someter a los tribunales, amenazar a los jueces y fiscales, cuanto exigir de éstos sentencias y resoluciones más drásticas todavía que las leyes vigentes.

El bochornoso episodio en que una asesora presidencial felicita a los organizadores de un homenaje a uno de los mayores violadores de los DD.HH es expresivo de que en La Moneda el espíritu de Pinochet sigue influyendo en sus moradores. Así como que continúen como alcaldes sujetos tan descarados como el ex oficial Cristián Labbé que adquiere el mobiliario del Dictador para alhajar sus oficinas y en cada oportunidad que hace uso de su torpe palabra brinda por el Régimen Militar, del cual fue uno de sus agentes más activos e impunes. La Constitución de 1980 que sigue vigente, el inaudito sistema electoral binominal, el voto que se

les prohíbe a los chilenos del exterior, la soberanía radicada en los partidos políticos, los tribunales militares, el 10 por ciento de las ventas de Codelco para las FFAA y otros tantos privilegios irritantes consagrados para los uniformados, hablan de una institucionalidad que, en lo esencial, tiene la firma y el legado de Pinochet, por más que el ex presidente Lagos haya puesto su rúbrica a modificaciones cosméticas nunca consultadas al pueblo mediante un plebiscito.

De esta forma, es que muchos reconocen que el modelo económico definido por la Dictadura prácticamente continúa campante en la progresiva concentración de la riqueza y los graves niveles de desigualdad en el ingreso. Cuando, después de dos décadas, menos del 15 por ciento de los trabajadores permanece sin sindicalizarse, al tiempo que las organizaciones patronales cada día alzan más la voz para encantar la voluntad de la autodenominada clase política o instalar a sus propios afiliados en cargos de Gobierno, cupos parlamentarios y asientos en los directorios de las empresas que todavía permanecen en manos del Estado. Con un ingreso per cápita, para colmo, que ha crecido notablemente sin que se exprese en bienestar efectivo en al menos 8 deciles de la población, si se considera los millones de asalariados sometidos al salario mínimo, las pensiones de hambre, los impuestos que afectan a los sectores medios y pobres, el endeudamiento de las familias y la usura de las grandes tiendas y bancos cuyas espeluznantes y escandalosas infracciones en el manejo del crédito no logran todavía sancionar a los delincuentes “de cuello y corbata” que las urden desde sus cargos gerenciales.

El actual Gobierno nos ha permitido percibir con todavía más claridad cómo en la política del país siguen instalados los más dóciles colaboradores de Pinochet en connivencia con sus discípulos y una buena cantidad de conversos, después de que en su juventud cometieran el pecado de ser progresistas y rebeldes. Pinochetistas de siempre como el alcalde mencionado y varios de los que están en la cúpula de Renovación Nacional y que, en su desfachatez, reconocen ante los medios haber brindado largo tiempo por el “Pronunciamiento Militar”. En segundo lugar, los todavía jóvenes admiradores del Régimen Militar que hoy ostentan cargos minis-

teriales y parlamentarios y que se iniciaron en el “servicio público” como lugartenientes de los más feroces funcionarios de la Dictadura. Voceros que tienen el descaro de condenar la irrupción pacífica de ciudadanos en las sesiones del Congreso, después de concordar con entusiasmo el bombardeo de La Moneda, la clausura del Poder Legislativo y la interdicción de la Justicia. Hipócritas que reclaman respeto a la democracia cuando muchos de ellos ni siquiera han sido elegidos por el pueblo para sentarse en el Senado y la Cámara de Diputados. Contemporáneos y seguidores de ese lúcido fundador de la UDI, uno de los que concibieron y reglamentaron la llamada democracia “protegida”, la que hoy claramente se manifiesta como la gran camisa de fuerza llamada a comprimir el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Pinochetistas de la primera y la segunda hora, además de esos concertacionistas cooptados por la ideología neoliberal, apoltronados en el Parlamento y que en sus sucesivos gobiernos estuvieron genuflexos ante el ordenamiento institucional, las leyes del mercado, el capital transnacional y los grandes empresarios criollos que terminaron por corromperlos y sentarlos a la mesa de sus negocios y cúpulas gerenciales. Como ese antiguo exiliado mapu socialista en Moscú (de apellido Estévez), que se recicló en el tránsito desde el Banco del Estado a la banca privada y que hoy se vale de Carabineros para impedir el acceso de los hinchas de la popular barra de Colo Colo a su estadio. Ubicado, por cierto, en un exclusivo barrio residencial. U otras figuras mediáticas de la Transición que en sus administraciones sacralizaron el modelo de desigualdad que rige cruel y en todos los ámbitos de la vida nacional. Como que desde el ministerio de Educación, por ejemplo, viraron a los establecimientos privados que lucran con la enseñanza escolar, universitaria y técnico profesional con los recursos fiscales y asaltando el bolsillo de las familias más modestas de Chile. Tres tipos de viejos y nuevos pinochetistas que, felizmente, están todos desacreditados en las encuestas y por las multitudinarias manifestaciones estudiantiles, de los medioambientalistas, de los empleados públicos y de los indignados por doquier de esta sociedad chilena que, por fin, despertó y decidió emprender el camino de la movilización popular. Después de comprobar nuevamente que el “diálogo

go”, cuando no hay genuina democracia, es siempre la puerta giratoria que burla las grandes transformaciones.

Desacertadamente, sin embargo, hay otros grupos que, después de ser impugnados y segregados, buscan ensayar con su negociada inclusión en el sistema la posibilidad de emprender un verdadero rumbo hacia la Democracia. Gente de buena fe, posiblemente, pero completamente obnubilada en la cupularidad de la política, que arriesga ser sobrepasada por los movimientos sociales que ya estallaron y que prefieren desmoronar el injusto orden actual desde afuera que infiltrándose en él. Y que tampoco se dan cuenta de que sólo recibirán las migajas del poder mientras no se avengan a comulgar plenamente con el legado de Pinochet.

19 de noviembre de 2011

¿PARA QUÉ SIRVE EL DIÁLOGO?

Siempre se debe recurrir al diálogo antes de emprender cualquier manifestación de fuerza. En las relaciones interpersonales, el diálogo es una tarea ardua pero que puede evitar desenlaces lamentables, cuanto desavenencias prolongadas o definitivas. Las parejas se pelean, dialogan y muchas veces se reconcilian. Hay quienes lamentan mucho haber adoptado resoluciones unilaterales sin darle al otro, como a sí mismo, la posibilidad de dialogar para encontrar una justa o digna solución a los conflictos.

En las democracias serias, el diálogo es el que inspira la vida de las instituciones y de los habitantes del país. Incluso en plena crisis hoy los griegos aún mantienen abiertos los mecanismos del diálogo en su Parlamento, los medios de comunicación y entre las autoridades del país con la Comunidad Europea. En los regímenes autoritarios y excluyentes, como el nuestro, de las convocatorias a “diálogo” suelen lucrar políticamente los gobiernos, las entidades patronales y otras. En muchas mesas de diálogo hemos visto extinguirse demasiadas demandas y movilizaciones sociales, porque con éstas se reducen demasiado las expresiones sociales, se legitiman los interlocutores oficiales y los medios de comunicación le disminuyen cobertura a lo que no representa severa controversia y conflicto social. La última rebelión en la Araucanía puede dar testimonio de lo que afirmamos.

Los estudiantes quisieron dialogar y recibieron todo tipo de portazos de La Moneda, del desdén parlamentario y el desinterés de los grandes medios por ofrecerles tribuna. Una vez que salieron a las calles, concitaron el mul-

titudinario apoyo popular y el interés mundial, solo entonces las autoridades mostraron disposición a dialogar. Después de empeñarse, ciertamente, en reprimir las manifestaciones, criminalizar las protestas y, por supuesto, desacreditar las posiciones de los jóvenes.

Las agrupaciones educacionales finalmente se sentaron a conversar para darse cuenta inmediatamente que sus propuestas no serían escuchadas y que de boca de las autoridades no habría acogida seria alguna a sus demandas. Se podría decir que los propios rectores de las universidades, muchos alcaldes y el Colegio de Profesores tuvieron que consentir que las dudas o sospechas de los estudiantes tenían bastante sustento, especialmente al momento de que el Ejecutivo mandó su propuesta presupuestaria sin acoger prácticamente nada de lo solicitado y descargando recursos más bien a la educación privada que estatal. En una tozuda intención de consolidar aún más el modelo educacional vigente regido por el mercado, el lucro y la consecuente discriminación entre la educación para los pobres y los ricos.

Con la ilusión del diálogo, de verdad es que la protesta se atenuó y los enemigos de la educación libre y gratis para todos tuvieron una oportunidad exquisita para sembrar en el país la idea de que hay estudiantes y profesores sensatos, pacíficos y dialogantes, versus los intransigentes y violentistas que ya no quieren “comulgar con ruedas de carreta”. Incluso se valieron de una irrupción pacífica en el Senado de la República para estigmatizar a quienes interrumpieron una sesión parlamentaria pero luego se avinieron con el Presidente de la Cámara Alta a abandonar el recinto sin disturbios ni forcejeos para entregarse a la policía. ¡Sí!, para ingresar voluntariamente a las patrullas de Carabineros y someterse a proceso judicial. Todo un incidente, por lo demás, que contrastó con la violencia derivada del ingreso de la policía uniformada, pocos días antes, a la Cámara de Diputados, por disposición del Presidente UDI y piñerista de esta rama legislativa.

Pero hoy por fin todos los sectores educacionales tienen la convicción de que nuestra feble institucionalidad carece de los fundamentos democráticos esenciales; esto es que las autoridades obedezcan, los derechos cívicos se garanticen y la prensa alcance sólida diversidad informativa. Seis meses de luchas y frustraciones terminan dándoles la razón a aquellos

jóvenes que desde el inicio postularon que una auténtica reforma educacional no sería posible sin un régimen democrático, partiendo por lo esencial que es una Asamblea Constituyente, una nueva Carta Magna y un plebiscito que legitime el orden institucional y dé sana convivencia a los chilenos. En este sentido, las movilizaciones multitudinarias –si bien todavía no alcanzan soluciones en la Educación– sin duda han servido para poner en evidencia y aprieto a todo un sistema ilegítimo, que tiene más del régimen autoritario de Pinochet que de las promesas de una Transición frustrada, ya, en sus propios fueros.

Lo que cabe ahora, es aunar fuerzas en el mundo educacional y confluir con todos los “indignados” del país en más protestas y movilizaciones. Especialmente cuando tenemos una gran oportunidad en el estrepitoso descrédito popular de Piñera, de sus partidarios, como de las cúpulas políticas que han cogobernado por más de dos décadas de posdictadura. Como, asimismo, la posibilidad de ser realmente atendidos gracias a esos procesos eleccionarios venideros en que los dirigentes políticos no quieren llegar con los deméritos actuales

Y más que un diálogo, abrigar más bien un armisticio. Una solución digna y duradera que deje en el pasado tantos episodios finalmente bochornosos, por más que fueran celebrados por el conjunto de la clase política con puños en alto y sonrisas.

6 de noviembre de 2011

LA OTRA INEQUIDAD

En el país de las inequidades, resultan bochornosos los privilegios que mantienen las Fuerzas Armadas mientras la clase política en su conjunto sigue de brazos cruzados después de 21 años de pospinochetismo. Mientras se regatean los recursos a la educación y a la salud, el presupuesto fiscal es particularmente generoso con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para financiar las remuneraciones, su propio sistema de previsión, los hospitales institucionales y, desde luego, los más millonarios gastos para la adquisición de armas en América Latina. Además de las partidas fijadas por la Ley de Presupuesto, ninguno de los últimos gobiernos ha logrado suprimirles todavía esa escandalosa contribución que Codelco debe asignarles por el 10 por ciento de todas las ventas (no utilidades) de cobre en el mundo, privilegio que en los últimos años resulta todavía más desmedido cuando el precio del metal ha alcanzado niveles espectaculares.

Cuando se movilizan los estudiantes demandando que el acceso a la educación pública sea gratuito, por cierto que saben que con este royalty que va a parar a los cuarteles demás podría garantizarse que todos los niños y jóvenes chilenos accedan a planteles de enseñanza de calidad. Asimismo como las enormes carencias de los policlínicos y otros centros médicos del Estado podrían resolverse fácilmente con sólo parte de los recursos destinados a comprar mortíferos aviones de guerra que se malogran uno por uno en las pirotecnias militares. Con los dineros destinados a tanques, buques y otros que, además de onerosos, resultan completamente inútiles,

se obsoletan rápidamente en un dispendio que hace caso omiso del avance de la diplomacia y la legislación internacional para enfrentar las eventuales controversias entre las naciones.

Con cargo al erario nacional, es decir al bolsillo de todos los chilenos, los militares gozan de pensiones muy por encima de lo que logra la inmensa mayoría de los trabajadores que corrientemente deben extender sus años de trabajo porque los montos de sus pensiones son de una precariedad extrema. Mientras que las atenciones sanitarias de quienes están en el servicio activo o pasivo les garantizan una calidad de vida excepcional si se lo compara con la de quienes han trabajado una vida entera en el sector productivo, es decir generando bienes y riqueza para el conjunto de la población.

En lo que se refiere a la alta oficialidad, evidente resulta también el contraste de sus prerrogativas en comparación a otros altos funcionarios del Estado, a no ser que sean los propios “legisladores” de la República. Aludimos a los viáticos, medios de transporte, centros vacacionales, acceso a placenteras y lujosas viviendas fiscales en función de sus cargos y el peso de sus charreteras. Por reconocimientos, además, que por más de un siglo nada tienen que ver guerras o batallas a no ser las bregadas contra su propio pueblo. Como aquel cobarde bombardeo al Palacio Presidencial, la llamada “Pacificación” de la Araucanía y tantos episodios contra el espíritu republicano.

Mientras la aeronáutica civil debe cumplir con protocolos estrictos de seguridad, la Fuerza Aérea tiene sus propias reglas y sus pilotos usan a su antojo los aviones de guerra para funciones que no son las propias de su actividad, como muchas veces se los ve transportar a sus propios familiares y amigos a lo largo de Chile. Con una ínfima parte de lo que gastan en aparatos y combustible se podría dotar satisfactoriamente a la Corporación Nacional Forestal para hacer frente a los incendios de bosques y pastizales que año a año afectan nuestro patrimonio natural. Hasta Carabineros podría tener más recursos en este aspecto para satisfacer las necesidades de tantos chilenos pobres e indigentes aislados que a veces requieren trasladarse con urgencia ante los cataclismos o la enfermedad.

Los privilegios militares que escupen la conciencia y dignidad nacional

se explican, desde luego, en una clase política abyecta que nos se les atreve por lo manotazos que los uniformados suelen darle a la institucionalidad, así como por la información recabada por los servicios secretos castrenses en relación a sus propios despropósitos. Vigilados como todos solemos estar por las escuchas telefónicas, seguimientos o amedrentamientos ejercidos por esos agentes encubiertos en todas las actividades del país y que a los grandes oficiales les facilita, también, las operaciones e impunidad respecto de sus operaciones fraudulentas de compra y venta de armas al exterior. Episodios que, cuando llegan a los medios de comunicación, rara vez logran ser resueltos por la Justicia, porque curiosamente su tramitación procesal suele perpetuarse indefinidamente.

Tampoco los últimos gobiernos han podido recuperar la autoridad civil sobre lo militar. Varios episodios nos demuestran la imposibilidad de las autoridades para exigirle a las entidades castrenses colaborar con el esclarecimiento de las violaciones contra los Derechos Humanos e imponer la erradicación de estas instituciones de quienes cometieron delitos de hecho, complicidad u omisión en aquella tragedia que todavía enluta a la nación. En este sentido, nos aparece como un desparpajo que una de las principales naves de la Armada haya sido bautizada con el nombre de José Toribio Merino, el deschavetado Almirante que organizó el Golpe Militar de 1973, así como todavía una importante avenida santiaguina le rinda honores a la más trágica y vergonzosa efeméride de nuestra historia republicana.

Sinceramente, pensamos que un gobierno de derecha, de quienes históricamente se han servido de los militares, pudiera haber ejercido un gesto republicano acotando los recursos y privilegios castrenses que irritan la “razón” apelada por nuestro escudo patrio. Pero nos equivocamos: se ve que la “fuerza” es la que se impone dramáticamente en nuestra trayectoria. Y que los ministros de defensa de éste y de los gobiernos anteriores rápidamente adquieren el semblante, el lenguaje y las franquicias de los uniformados.

11 de septiembre de 2011

LA BATALLA DECISIVA

Las movilizaciones estudiantiles fueron el detonante de la enorme explosión social que vive nuestro país después de 17 años de autoritarismo y dos décadas de expectativas frustradas. Más allá de ese conjunto de manifestaciones que en algún momento nos hicieron despertar del prolongado letargo de la posdictadura, lo cierto es que ha sido la demanda por una educación pública gratis, de calidad y amplia cobertura la que ha despertado el malestar de los trabajadores, como los consumidores y de todos los chilenos vulnerados por las inequidades escandalosas y la inicua aplicación a que nos someten las directrices políticas y económicas dispuestas por el Dictador y sacralizadas por los gobiernos que le siguieron.

Lo que hoy tenemos es un país que pertenece efectivamente a un puñado de empresas que se enseñorean en todo nuestro territorio y en que el crédito de hasta las grandes tiendas defrauda a diario los precarios recursos de la inmensa mayoría. En que nuestro medio ambiente es degradado por el bandidaje de los grandes inversionistas y la complacencia criminal de quienes deben velar por nuestra soberanía e integridad, es decir, la clase política y las Fuerzas Armadas. Las cuales comparten prebendas escandalosas en relación a los escuálidos recursos destinados a la educación, la salud, la vivienda y las pensiones de los jubilados. Convertidos en el paradigma del capitalismo más salvaje, en más de 30 años se ha hecho todo por segregar a la población, favorecer a una ínfima minoría y prostrar en la ignorancia y el salario mínimo a los más. En el objetivo preconcebido de que nos constituíamos en la mano de obra más barata y atractiva para las transnacionales

y monopolios, alcancemos un ingreso per cápita general que no alcanza a obtener ni el 20 por ciento de la población y vaciemos a precio vil nuestros recursos estratégicos a los “mercados” mundiales.

Hemos vivido un tiempo en que se descarga la brutalidad policial a cualquier forma de protesta, demanda o disidencia. En que las horribles violaciones a los Derechos Humanos tienen las resoluciones indulgentes de los Tribunales, cuanto refrendadas por los gobernantes a quienes Pinochet heredó la administración del país y salieron en su rescate para evitarle la sanción internacional por sus delitos de lesa humanidad. Años de falsa transición a la democracia en que se han sucedido cinco gobiernos sin que, por ejemplo, los chilenos en el extranjero alcancen derecho a voto y en que impera un sistema electoral acotado por los partidos, el binominalismo y los recursos millonarios que disponen las familias gobernantes para solventar sus inversiones políticas. Las que se demuestran, después, completamente digitadas por los poderosos empresarios y compensadas por el buen recaudo de todo tipo de operaciones para asaltar el erario público ante una población atónita por la impunidad y la complacencia de los grandes medios de comunicación. Es decir, por ese grupo apadrinado de canales de televisión y diarios que, por supuesto, han renunciado a fiscalizar y representar los intereses del pueblo a cambio de la publicidad estatal y el avisaje de los monopolios consolidados por un modelo que concentra cada vez más la riqueza, la producción y el comercio. Para lo cual se persigue, además, impedir la diversidad informativa y el disenso.

Las multitudinarias marchas han puesto de manifiesto la indolencia de las autoridades, la grosera tergiversación de los acontecimientos y el carácter represivo del sistema que nos rige. Sin embargo, en lo principal, han desnudado la realidad del país ante el mundo y la propia población todavía obnubilada por el exitismo de farándula, oropeles y sabor a chatarra que se le ofrece al pueblo en desmedro de su dignidad intelectual y derechos soberanos. Las redes del internet, la voluntad inquebrantable de los jóvenes y la insobornable actitud de diversas instituciones y líderes de la sociedad civil le hacen descubrir al país que el origen de estas perversiones no radica en la falta de recursos sino en el empecinamiento de un modelo político y

económico perverso, necesario de ser derribado para romper las cadenas de la desigualdad y subdesarrollo cultural.

Tal como lo advirtieran en su hora nuestros grandes próceres libertarios, el problema otra vez es el imperio de una Constitución ilegítima, heredada de un régimen de facto, jamás aprobada por el pueblo y que, en el caso de la actual Carta Fundamental, ha cautivado a quienes en su hora la denostaron, pero en el ejercicio del gobierno se satisficieron completamente en ella, la cupularidad y la traición a los valores republicanos. No en vano es ahora la exigencia de una Asamblea Constituyente la que se viene imponiendo en el lúcido discurso de los dirigentes estudiantiles, conscientes de que la educación clasista y la renuencia del Estado en satisfacer las demandas sociales tienen cobijo en un texto deplorable, ilegítimo en su origen y ejercicio, como en la hipocresía de quienes han gobernado el país en la senda trazada por el Dictador. Por lo mismo que apenas han consentido algunos cambios mínimos en su redacción e, incluso, aprobado enmiendas tan deleznable como la posibilidad que se han dado los partidos políticos de reemplazar por sí mismos a los diputados y senadores que renuncian a sus cargos, con lo cual en el Parlamento abundan los diputados y senadores designados por los mismos que han convertido a los distritos y circunscripciones en sus cotos de caza.

Fatal sería que los insurgentes de hoy depositáramos en la Constitución, las leyes vigentes y la tramitación parlamentaria la solución de la crisis educacional, la reforma tributaria y otras múltiples demandas ciudadanas. Es preciso que los cambios exigidos multitudinariamente en las calles y plazas de todo el país resulten de un acuerdo explícito con los actuales moradores de La Moneda si es que no se quieren reiterar las dilaciones y las amnesias en que cayeron otras aspiraciones del pasado. De esta forma es que la lucha por la educación, concebida como “la madre de todas las batallas”, requiere derivar ahora en una batalla decisiva, como es la de imponer la Asamblea Constituyente, el plebiscito y una nueva Constitución. Después de lo cual podremos hablar de democracia, justicia y libertad en un Chile poseído aún por la discriminación y la incompetencia del conjunto de la clase política.

28 de agosto de 2011

AL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO

Una de las graves carencias de la política chilena es la incapacidad de los partidos y sus dirigentes de plantearse ideológicamente sobre los desafíos que debe enfrentar el país y la forma de consolidar una vida nacional más igualitaria, auténticamente democrática y en el que el crecimiento económico derive en prosperidad para el conjunto de la población. Nunca en nuestra historia habíamos tenido más recursos económicos para invertir y hacer frente a las demandas sociales, sin embargo hay políticos que se solazan en nuestras enormes reservas monetarias a resguardo en el extranjero y en su cortoplacismo se ufanan, incluso, de tener un superávit fiscal después de un devastador terremoto.

De esta forma, se da la situación increíble de ministerios que no alcanzan a gastar los recursos asignados y que el único gasto que satisface a los gobernantes es el militar, que, como se sabe, favorece enormemente a los países y empresas vendedoras de armas y no implica un impacto importante en la inflación, el bien supremo cuidado invariablemente por nuestros ministros de Hacienda, empeñados en restringir siempre el consumo de la inmensa mayoría de la población. Manteniendo los sueldos reprimidos para que las onerosas utilidades de las grandes empresas y el consumismo extremo de un puñado de chilenos queden lo más completamente desregulados. Favoreciendo, como lo proclaman, la inversión privada y el consecuente dominio extranjero de nuestros yacimientos, aguas, empresas y servicios fundamentales.

El modelo neoliberal aquí sigue siendo el catecismo del conjunto de la expresiones políticas, cuyo quehacer ha quedado acotado casi enteramente al electoralismo y el cuoteo de los cargos públicos. Bajo las restricciones, además, de una institucionalidad poco o nada de republicana, tanto que quienes se interesan en ser ciudadanos se han reducido a menos de la mitad de los mayores de edad.

Este año se proyecta un crecimiento del 6 por ciento, pero el salario mínimo fue (con mucha presión) elevado sólo en un 5.5, en la constatación, además, de que la canasta de productos esenciales que consumen los pobres se elevó por sobre el 7. Todos los días, la prensa informa de las vertiginosas utilidades de las empresas que, en el caso de los bancos, por ejemplo, supera en más de un 40 por ciento los rendimientos de un año a otro. Apenas 6 familias o grupos económicos se hacen cotidianamente de las empresas mineras, forestales, de los fondos de pensiones, de la salud, el transporte y otros que, con frecuencia, ofrendan después a los especuladores foráneos, al grado que más de 80 por ciento de nuestros recursos acuíferos y energéticos ya pertenecen a consorcios transnacionales. Hasta las universidades que, por ley, tienen prohibido el lucro se venden y se compran en multimillonarias cifras, gracias a que el Estado no supervisa y a que esta actividad se ha convertido en el coto de caza de políticos de todos los pelajes que ven en la educación una excelente oportunidad para realizar un aterrizaje más digno en la empresa privada e incrementar sus cajas electorales. Mientras esto ocurre, más del 70 por ciento de los estudiantes se endeuda severamente y por toda la vida para financiar sus estudios que, por lo general, imparten universidades estatales y privadas desacreditadas que incumplen con los estándares de una educación de calidad.

Los trabajadores del cobre nos han advertido con una contundente paralización de faenas sobre los intentos de sus ejecutivos por seguir privatizando filiales de Codelco, nuestra principal fuente de ingresos fiscales, pero que ya representa menos del 40 por ciento de las exportaciones de cobre del país. Enormes expresiones ciudadanas, asimismo, se oponen a la consolidación de proyectos termo e hidroeléctricos que se constituyen en un horrendo crimen para nuestro medio ambiente y calidad de vida, según

la certeza de los más prestigiados científicos e investigadores. Iniciativas que como la Hidroaysén, Pascua Lama y otras adjudican ingentes sumas de dinero para hacer lobby, financiar campañas políticas y comprar la conciencia de los medios de comunicación.

Con todo, la actividad de líderes sociales, de los medioambientalistas, de los defensores y promotores de los Derechos Humanos, así como de las redes comunicacionales y los medios informativos dignos, vienen ganando la guerra ideológica y convenciendo al país que sólo su indignación y protesta puede poner freno a tanta explotación, traición y venta de soberanía. Los jóvenes y estudiantes no sólo se han activado sino que han hecho los más lúcidos diagnósticos y lineamientos de lo que hay que hacer para obtener una educación de calidad, de amplia cobertura y equidad, pero también para consolidar aquella promesa incumplida en más de dos décadas: avanzar efectivamente en la consolidación de una democracia participativa, que supere el conciliábulo cupular, nazca de una Asamblea constituyente y una Carta Fundamental refrendada por el pueblo. Como lo han hecho casi todos nuestros países vecinos después de la pesadilla común de las dictaduras castrenses.

Como en las grandes gestas de nuestra historia, debe ser la confluencia de demandas, la expresión callejera y la confrontación frontal con los abusos y los intereses abyectos los que derriben nuestra institucionalidad autoritaria que, para colmo, ha devenido en corrupta y gravemente represiva. Una movilización que desde ya le anuncie al mundo, y a los que especulan del entreguismo de los políticos perpetuados en el Gobierno y el Congreso, que nada de lo que hoy se disponga será perpetuado en el futuro. Que no les quepa duda que las privatizaciones, el asentamiento de las transnacionales, el afán de lucro en la educación, la usura bancaria y la estafa perpetuada de ciertas empresas como La Polar contra los chilenos, serán revertidos e indemnizados por nuevas nacionalizaciones, expropiaciones y procesos judiciales que castiguen la práctica del delito económico. Que hoy nuestras leyes y códigos consagran prácticamente impunes para los llamados hechores de “cuello y corbata”.

Servir a Chile hoy es hacerse cargo de que la mayoría está en la incon-

formidad, irrumpe en las calles y se propone desalojar del Estado a los más que deslegitimados dirigentes políticos, quienes ya no representan siquiera a sus esmirriados partidos. Un renacer ideológico y una movilización que ojalá no vuelvan a ser arrebatados a sus propios y espontáneos dirigentes. Como ocurrió en el pasado con aquella Asamblea de la Civilidad que fue cooptada por los partidos tradicionales, para administrar la transición interminable y frustrada que hemos vivido. En que ojalá nunca vuelvan a presentarse esa suerte de “notables” que lo que finalmente logran es desmovilizar al pueblo con promesas y falsos diálogos como los que han frustrado una y otra vez la causa de los pueblos indígenas, la emblemática y bella Revolución de los Pingüinos y tantas demandas laborales.

23 de julio de 2011

EL RESCATE

Los terremotos y otras tragedias como la que sepultó a 33 mineros en el norte suelen provocar estados de alta conmoción social en que a los chilenos nos parece descubrir identidad y destino común cuando, en realidad, somos uno de los países de mayor contraste cultural y abrupta estratificación. Como se sabe, no somos una nación que comparta lo mismos hábitos, ritmos y sabores tan propios de otros lugares del mundo, a pesar de las profundas distancias socioeconómicas e, incluso, contrastes étnicos. Más que identificarnos, la cotidianidad nos hace marcar diferencias entre unos y otros por la forma de hablar y vivir. Seguramente en ello influye nuestra larga y contrastada geografía y las muy disímiles actividades que se realizan si se vive en el norte o el sur; en la Cordillera o en la costa.

Nuestras grandes efemérides nacionales en lo que más devienen siempre es en borracheras patriotas y excesos catárticos que más bien contradicen la idea de una genuina chilenidad. Carecemos de verdaderos hitos republicanos como los que existen en otros países, muchas veces de más corta data que el nuestro. Cruzados, como siempre, por profundas rivalidades, no reconocemos siquiera los mismos padres de la Patria, líderes políticos o intelectuales que, nos gusten o no, nos han marcado rumbo a todos. Quizás en esto radique la causa de aquel majadero recurso de reconocer las glorias de nuestro Ejército o Fuerzas Armadas en las mismas fechas de nuestro Aniversario Patrio. Celebración que abunda en marcialidad y despliegue bélico, pero que carece de contenido como las propias fondas

dieciocheras. Por sus uniformes prusianos, unas, como por los bailes y vestimentas que se usan en las ramadas, por ejemplo, y que se imponen sobre los que atribuimos como populares. Lo hemos repetido una y otra vez: las grandes “glorias” castrenses son sólo esa seguidilla de masacres contra nuestra propia nación y en las que se llegó al extremo de bombardear la sede del Palacio de Gobierno.

El terremoto, del maremoto y el rescate de los mineros le han dado este año una magnífica oportunidad a quienes nos gobiernan de invocar los nobles sentimientos del país y teñirlo de norte a sur con los colores de nuestro pabellón. Toda una parafernalia comunicacional con las mismas consecuencias habituales: provocar la solidaridad que siempre exudan los más humildes, despertar a una que otra conciencia dormida, pero confirmar también lo de siempre: la insensibilidad de los que más tienen y su pertinaz afán de lucrar política o económicamente incluso de estas desgracias.

Aunque sin éxito, es claro que las autoridades y los medios de comunicación adictos se valieron de los acontecimientos de la mina San José para ignorar la huelga de hambre y las demandas mapuche hasta que la presión internacional, la acción del periodismo independiente, como el temor a un desenlace fatal hizo reaccionar a los gobernantes y conceder un avenimiento que era francamente poco factible en un gobierno de derecha, más aún cuando sus antecesores de la Concertación desoyeron sistemáticamente el clamor de la Araucanía. Es evidente que el Ejecutivo no podía llegar a un final feliz y glamoroso teniendo pendiente un conflicto social y cultural de tanta envergadura. Por lo que siempre habrá de reconocerse que los mapuche lograron avances en su lucha gracias a su pertinaz movilización y coraje para resistir más de 80 días en huelga de hambre, pero también al propósito oficial de que nada enturbiara la fiesta del Rescate.

La tragedia que sepultó a 33 mineros por más de dos meses quedará inscrita entre los grandes hitos de nuestra historia, con la cualidad de hacer concitado el interés de todo el país y del mundo. Todos los chilenos podemos sentirnos orgullosos de la proeza de penetrar más de 500 metros de roca para rescatar a los sepultados. En un esfuerzo que honra a nuestros ingenieros y técnicos; que habla de lo mejor de nuestra condición humana

y que, sin duda, reconoce en las autoridades su enorme cuota de tenacidad para lograr el cometido. En un logro que supera con creces nuestros modestísimos triunfos deportivos o artísticos, por los que se acostumbra a volcar aspaviento y jolgorio desmedidos.

No se puede ser mezquino con el Presidente Piñera y sus colaboradores. Su desempeño ha sido notable en este caso y hay que reconocerlo sin remilgos políticos. Sin embargo, ya estamos en presencia de extremos mediáticos y aprovechamiento político que amenazan con la celebración colectiva que merece este acontecimiento. No vaya a ser cosa que el abusivo marqueteo conspire finalmente contra la popularidad alcanzada por el Presidente y algunos de sus ministros. Lo que se explica de gran manera en su buen desempeño en este particular episodio.

Nuestra esperanza más bien radica en la posibilidad que el Gobierno se sensibilice con la situación de los mineros y trabajadores explotados en todo el país y que todos los días corren riesgos y aflicciones por la precariedad de sus ingresos y condiciones de trabajo, la voracidad de la clase patronal o la indolencia de un Estado llamado a supervisar las tareas productivas, procurando más equidad en un país tensionado y con serios riesgos en su convivencia por la injusticia social y la impunidad de quienes se enseñorean en la economía, la política y en lo que se transmite por los grandes medios de comunicación. En un país que se presume democrático, pero en el que, ciertamente, no existe diversidad informativa ni organización ciudadana. Como tampoco un esfuerzo sincero por la igualdad y el rescate cultural manifestado en nuestra raíces históricas, el aporte de nuestras naciones fundacionales y la creación intelectual de tantos chilenos y chilenas ignorados por las ideología e intereses hoy dominantes, o francamente tergiversados por los cronistas e historiadores oficiales.

12 de octubre de 2010

ABRIENDO LAS ALAMEDAS

Con sus movilizaciones, los estudiantes secundarios y universitarios llaman la atención del país y las autoridades respecto de la inequidad de nuestra educación y la responsabilidad que el Estado debe asumir para garantizarles a todos una instrucción de calidad. Nos advierten sobre una situación que también compromete a sus padres, maestros y, por cierto, a todas las instituciones de enseñanza. Sin embargo, en la práctica, son sólo ellos los que salen a las calles, se toman sus establecimientos y sufren la drástica represión de las fuerzas policiales.

Si en las democracias serias el pueblo no tiene que pedirle permiso a las autoridades para movilizarse y protestar por medios pacíficos, aquí en Chile la principal avenida y el barrio cívico de la Capital están vedados para la circulación de los manifestantes. Mientras que en las democracias sólidas, las policías se despliegan para resguardar la seguridad de quienes protestan, en nuestro país los carabineros, los agentes de civil y los provocadores contratados copan desde las primeras horas de la mañana los espacios escogidos por los jóvenes y los trabajadores para reunirse y marchar. Esperándolos, como se sabe, con lumas, gases lacrimógenos y carros lanzaguas y un despliegue enorme de agentes que a veces hasta supera en número a los convocados. Han transcurrido más de 20 años desde el término de la Dictadura, pero las prácticas represivas siguen plenamente vigentes y se expresan a lo largo y ancho de todo el país, militarizando la Araucanía, aplicando la Ley Antiterrorista y aplastando toda forma de descontento social.

En tanto todo esto ocurre, la televisión y los grandes medios escritos

ignoran las demandas populares o las estigmatizan con imágenes trucadas y sacadas de contexto. Otra vez uniformada, grotesco nos parece el silencio de la prensa ante la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, protesta que ya se extiende por casi dos meses y arriesga dramáticamente la vida de quienes no hacen más que luchar por sus derechos reconocidos universalmente. Del mismo modo en que se constituye en un grave atentado a la ética profesional la emisión de reportajes televisivos en que se condena ante la opinión pública a detenidos y procesados sin que los Tribunales hayan corroborado las graves imputaciones que se les hacen desde el Ministerio del Interior y ciertas fiscalías.

En toda nuestra vida republicana han sido los estudiantes y los trabajadores los primeros en reaccionar frente a las injusticias sociales y los abusos del poder, pero sus movilizaciones llegan a ser plenamente efectivas cuando el conjunto de la sociedad civil toma conciencia y resuelve sumarse a estas protestas. De esta forma, desde el alzamiento de los secundarios en su “Revolución de los Pingüinos” la sociedad en su conjunto sigue en deuda con la causa de los estudiantes que, por supuesto, es también la de los maestros, padres y apoderados y la nación toda.

No es justo observar las movilizaciones desde los balcones. Menos, y todavía, enterarse de éstas por los sesgados medios de comunicación. Se hace preciso acompañar las marchas estudiantiles y convertirlas en manifestaciones tan masivas y contundentes que inhiban la represión policial y obliguen a las autoridades a abrir las puertas del diálogo y el cambio. Para los jóvenes cualquier dilación es fatal para su porvenir; tienen asumido que las erradas estrategias educacionales han convertido a Chile en uno de los países más desiguales de la Tierra y nos ponen ante un escenario de nuevos y más dramáticos momentos de confrontación y violencia.

Hoy como ayer, es necesario que los jóvenes se encuentren en la calle con sus maestros y familiares, confluyendo también con las demandas de los millones de trabajadores que sufren los efectos de las políticas de discriminación que los herederos de Pinochet finalmente sacralizaron en la economía, los acotamientos del sistema electoral y el sindicalismo cooptado.

24 de agosto de 2010

¡QUÉ HIPOCRESÍA!

Nos sorprende la enorme preocupación que causa en los políticos chilenos la situación de los presos políticos en Cuba y las elecciones parlamentarias de septiembre próximo en Venezuela. Del mismo modo que las acciones y presiones ejercidas por parlamentarios gobiernistas y opositores en pro de la pronta normalización de las relaciones diplomáticas con Honduras, confiriéndole legitimidad al gobierno derivado de un golpe de estado y un proceso electoral lleno de irregularidades y sospechas. A lo anterior, hay que sumar los incondicionales y reiterados apoyos que desde las altas esferas políticas se le tributa al gobierno de Uribe en Colombia, cuanto la complacencia que se manifestó por el triunfo de un candidato de su signo para sucederlo en la Presidencia de esta nación sacudida por más de medio siglo de guerrilla, grupos paramilitares y represión.

Oficialistas y opositores involucrados en un internacionalismo derechista extremadamente sensible a todo lo que ocurre en estos países como en Bolivia, Ecuador y otros que se proponen profundas transformaciones, luego de que sus pueblos tomaran conciencia de las bicentenarias injusticias y alcanzaran el poder mediante elecciones libres, informadas y reiteradas. Dirigentes y partidos que recién justificaban la dictadura de Pinochet y que ahora se erigen en guardianes de la democracia continental y veladores de los Derechos Humanos universales. Figuras que desde el oficialismo o la oposición fueron al rescate del Tirano en Londres, abogaron por la impunidad y otorgaron indulto a represores y narcotraficantes. Los mismos que, desde La Moneda o el Parlamento, han sacralizado la Constitución Autoritaria, las exclusiones de nuestras leyes electorales, la extranje-

rización de nuestros yacimientos y sistema productivo, la distribución más inequitativa del ingreso nacional. Como aquella flagrante concentración de medios de comunicación que se opone a uno de los pilares del régimen democrático: la diversidad informativa.

Como si viviéramos en un remanso de justicia y paz, nuestros políticos se conducen de lo que sucede fuera de nuestras fronteras, aunque su preocupación no incluya lo que acontece en la Tiranía de Marruecos, por ejemplo, destino dilecto para los que quieren veranear o hacer una escala más en sus frecuentes viajes a España. Consolidada, ahora sí, en nuestra verdadera Madre Patria, después de esperar dos siglos de republicanismos para conquistarnos plenamente, lo que se les desbarató una y otra vez en los tres siglos de Colonia y heroica resistencia de nuestros pueblos primigenios. Como tampoco les preocupa mucho las incursiones criminales de Israel en Palestina, ni el horror que se sucede en Guinea Ecuatorial, países aliados de Estados Unidos, ese gran gendarme mundial que tiene licencia para matar en Afganistán e Irak, torturar en Guantánamo y alentar el derrocamiento de todos los gobiernos que le fueran incómodos.

Sensibles y honorables parlamentarios chilenos que apenas balbucean interés ante los horrores que se viven en nuestra Araucanía, donde se reprime cruel y sistemáticamente a las comunidades y familias mapuche, se practica el terrorismo de estado, se aplica la Ley Antiterrorista, se mata a los opositores inermes y se condena a la pobreza y la miseria a toda una región, como quedara revelado en el último y dramático Informe Casen. Hipócritas de todo el espectro partidista que son digitados por una maquinaria financiada por los servicios abiertos y encubiertos de los gobiernos derechistas que se han hecho parte de esta nueva cruzada internacionalista. Políticos que, aunque se empeñen en marcar diferencias y competir electoralmente, de verdad no manifiestan visiones alternativas. Doble moral que queda tan manifiesta con la actitud de nuestra Cancillería de ofrecer a nuestro país como tierra de asilo para los disidentes cubanos, mientras confina a nuestras poblaciones indígenas a reducciones y cárceles que, por supuesto, muy difícilmente quedan en el registro de la CNN internacional y los grandes medios de comunicación que nutren la inconsciencia mundial.

23 de julio 2010

EL VERDADERO DILEMA

Cada vez resulta más difícil trazar una línea divisoria entre derechistas e izquierdistas. Es cosa de observar la conducta de unos y otros en nuestro Parlamento para comprobar que las diferencias son apenas sutiles. No es tan raro que desde la derecha nos sorprendan con actitudes en pro de ciertos cambios, así como que desde la izquierda nos escandalicen con posturas e iniciativas que en nada se condicen con el discurso socializante antes vociferado. En definitiva, lo que hoy se comprueba en Chile (también en otros países) es una suerte de cogobierno entre conservadores y liberales que explica, entre otras cosas, que a 20 años de la Dictadura unos y otros hayan sacralizado la Constitución pinochetista y el sistema de inequidad económica y social que nos rige. Al mismo tiempo que quienes fueron cómplices del terrorismo de Estado hoy acepten que estos delitos sean investigados y sancionados por los Tribunales.

De este sincretismo ideológico es absurdo esperar que el país impulse grandes transformaciones como sean las de tomar medidas para que la riqueza se reparta más equitativamente entre todos los chilenos. Quienes hoy co gobiernan se demuestran completamente incapaces de impulsar la renacionalización de nuestros recursos básicos, cedidos a dominio extranjero, en la más bochornosa renuncia histórica a nuestra soberanía y dignidad. Unos y otros es difícil que retrocedan en la privatización de la educación y la salud, gracias a lo cual muchos miembros de su clientela electoral hacen pingües negocios. Tampoco unos y otros serán capaces de recuperar

para Chile alguna prestancia internacional, felices como están de ser hijos dilectos y obedientes de los Estados Unidos. Una sumisión patética que ha conducido a los izquierdistas a asumir la crónica doble moral de los derechistas. Lo cuales, como sabemos, son demócratas y republicanos cuando les conviene, así como golpistas y terroristas en la adversidad electoral.

Con algunas tensiones (más religiosas que políticas) izquierdistas y derechistas podrán converger en acuerdos relativos al matrimonio civil, un estatus legal para los homosexuales o en ciertas medidas de protección del medio ambiente. Bajo la condición, claro, de que los moradores del poder político no cambien y a lo más roten de un cogobierno a otro entre los distintos poderes del Estado y las empresas públicas y privadas. Es decir, mientras unos y otros formen parte de la cúpula dirigente que sólo se jubila con embajadas o cuando ya se consolida un buen botín para decirle adiós al “servicio” público.

De esta forma, creo que las denominaciones debieran ser las de reaccionarios o revolucionarios. Sí, aunque estos términos produzcan escozor en un país de eufemismos y oportunismos, en el que hasta la palabra “pueblo” ha quedado excluida del lenguaje político postmodernista. Porque no hay más que ser revolucionario para desalojar (el término no es mío) a los grandes intereses enquistados en el gobierno, los parlamentos, los tribunales y los medios de comunicación dirigidos desde los poderes fácticos. Como lo ha hecho Evo Morales, en Bolivia y, con terribles tropiezos, el presidente Correa en Ecuador. Actitud que, `por desgracia, no ha querido o podido tener Chavez, en Venezuela, cada vez más horquillado (como Allende en su momento) por los grupos poderosos que siguen enseñoreados en la economía y los medios de comunicación que defienden su monopólica libertad de informar.

Por reaccionarios deberemos entender a los que se solazan con el desorden actual, otorgan un salario mínimo de 172 mil pesos y encuentran una maravillosa oportunidad de negocios con un royalty minero que no supere en 4 por ciento de las utilidades y sin que los trabajadores superen los ínfimos niveles actuales de sindicalización. Los que creen que la seguridad se puede garantizar con más y más policías en las calles y una Ley

Antiterrorista todavía más terrorífica que la que tenemos. Los que todavía se complacen con un “modelo” que guarda más de 20 mil millones de dólares en el exterior y todos los días cierran sus ojos, oídos y corazones a las demandas angustiantes de los pobres, los damnificados por el terremoto, los cesantes y el clamor pisoteado a diario por los mapuches cercados por el Estado en nuestra Araucanía.

Este es el verdadero dilema. Las contradicciones que observamos hoy en nuestra política no son más que pura farándula y nunca tan entretenida como la de la televisión.

9 de julio de 2010

RICOS PERO POBRES

El terremoto dejó al desnudo la situación de pobreza e indigencia que afecta al menos a un 23 por ciento de nuestra población. Porcentaje que se duplica en los que sufren menos inclemencias aunque también drásticas carencias. Por más que se ufanen nuestras autoridades por los índices de crecimiento, lo cierto es que los beneficios de nuestra economía recaen en muy pocos, como que el 10 por ciento de los más ricos percibe ingresos más de 31 veces por encima del que reciben los más pobres. Brecha que se separa por sobre cien veces en cuanto a los recursos del 2 por ciento más pudiente, lo que explica que tengamos dos o tres multimillonarios, ya, en aquella selecta lista de los más ricos del mundo.

En los últimos 20 años se sacralizó el modelo socioeconómico heredado por la Dictadura y todos los gobiernos se empeñaron en ser los mejores discípulos y administradores del mismo, incluidos los que en el pasado sostuvieron rabiosas ideas socialistas y estatistas. Lo mismo que hicieron con la Constitución de 1980, pese a su ilegitimidad de origen y contenido tan denunciado por quienes después llegaron a La Moneda. Con la catástrofe de febrero, se teme que haya aumentado bastante el número de pobres, situación que ya ha sido señalada por las nuevas autoridades, ante la evidencia de que hay más de un millón de hogares destruidos o con serios daños por los movimientos sísmicos y el maremoto.

Dos décadas han transcurrido sin que el sindicalismo haya crecido y sus cúpulas renovadas. Lo que hemos tenido es una flagrante colusión entre la política y las dirigencias laborales, para atenuar y postergar las deman-

das de los trabajadores. Dejándole libre el campo a la codicia de muchas empresas, bancos e inversionistas extranjeros favorecidos por la ausencia de normas de protección laboral, indignantes exenciones y evasiones tributarias, tanto como por aquellos antipatrióticos incentivos que le permiten vaciar nuestros yacimientos y abusar de recursos acuíferos y pesqueros, así como agraviar gravemente nuestros ecosistemas. No es de extrañar, entonces, que una vez en la oposición haya dirigentes políticos que sean insultados y escupidos por los manifestantes del Día del Trabajo. Irritados por su tosco oportunismo y falta de sentido común.

Se habla del asalto popular de que fueron objeto los supermercados y multitiendas, pero se soslaya el saqueo que afectó a las empresas del estado durante la Dictadura y después de ella. Tal como se oculta la codicia con que actúan las entidades financieras y las empresas eléctricas y sanitarias extranjeras en nuestro país. Gracias a la cual pueden ostentar las mayores utilidades del mundo, pese a la crisis internacional y al reducido tamaño de nuestra economía. Centenares de chilenos son detenidos y procesados por la tentación de llevarse un televisor y otros electrodomésticos a sus casas, mientras que permanecen en la más completa impunidad los políticos corruptos que se llevaron en coimas y licitaciones brujas los recursos destinados a las obras públicas y a los planes de empleo. Favorecidos, como se comprueba, por todos los artilugios que sus abogados discurren para postergar y burlar la justicia. En este sentido, hasta hoy replican sus escándalos, como la estafa practicada por algunas universidades privadas y operadores de los partidos para hacerse de los recursos destinados a los presos y torturados deseosos de emprender o continuar sus estudios superiores.

Entre los privilegios más groseros están los otorgados a las Fuerzas Armadas, verdaderamente erigidas como garantes y guardianes de nuestra “convivencia” desigual. Ni el régimen castrense dotó de tantos recursos bélicos y prebendas a nuestros cuerpos armados, en el ánimo, por supuesto, de disuadir sus prácticas sediciosas y criminales. Ineptos oficiales que siguieron durmiendo a la hora del terremoto y ni siquiera tuvieron la experticia de advertir lo que para tantos era inminente. Es decir, aquel maremoto que dejó centenares de víctimas. Uniformados que hasta ahora no son llevados a

los tribunales por su negligencia culpable y que, para colmo, se empeñan en justificarse y negar las advertencias que la propia Presidenta de la República le hizo en tan sentido. La misma que los llenara de charreteras, aviones, tanques y barcos para que siguieran distraídos en sus juegos de guerra. Dispendiosos recursos que bien pudieran haberse destinado a corregir las flagrantes desigualdades y, ahora, derivarse a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Este estado de cosas sólo tiene explicación en la paralización ciudadana, la falta de organización y el tiempo que siempre se toman los pueblos para aquilatar la realidad y rebelarse. Tiene también fundamento en nuestras precarias libertades de expresión y de prensa; en la falta de diversidad informativa y en la colusión de los gobiernos con los grandes medios de comunicación para domesticar las conciencias y sosegar las voluntades. Así como también se explica en el estado policial que se manifiesta tan brutalmente contra todo tipo de protestas. Las de los pueblos originarios, las de los estudiantes, hasta las de los desempleados o deudores estafados. Represión que todos los últimos gobiernos como el actual fortalecen con más policías en las calles, cámaras de vigilancia y servicios secretos que infiltran las organizaciones y delinquen al abrigo del estado. Como por aquellas disposiciones judiciales que permiten los testigos ocultos y las detenciones arbitrarias para perseguir los supuestos delitos terroristas que luego se desbaratan. Como acaba de ocurrir los la documentalista Elena Varela, apresada y asaltada por una presunción calumniosa avalada desde el mismísimo ministerio del Interior.

Todo tiene también explicación en la ilusión de que vivimos en democracia, cuando en realidad lo que tenemos luego de 20 años es posdictadura, con un sistema electoral acotado a la mitad de la población y por la ínfima participación de los jóvenes. Con un Parlamento reducido a sólo a un duopolio político, a la concentración más vergonzosa de la riqueza y de los medios de comunicación. Como a las más extremas formas de discriminación que se expresan en la educación, la salud y el salario. Un sistema que quiere contentarnos con ser opositores o pacientes marginados, cuando en realidad lo que necesita es de disidentes.

6 de mayo de 2010

UN COLLAR DE ESMERALDAS

El pillaje que siguió al terremoto es simplemente expresión de los fundamentos que sustentan nuestra realidad económica y social. Es, además, consecuencia de la impunidad que favorece a las más graves expresiones de vandalismo. Desde los inicios de nuestra sísmica historia hay quienes se aprovechan de las circunstancias, sobre todo en situaciones de caos y angustia.

Pero no hay que ir tan atrás. Basta que nos remontemos al pillaje que siguió a la instalación de la Dictadura cuando los militares arrasaron hasta con las especies personales del Presidente depuesto. Situación que se prolongó con la venta a precio vil de las empresas del estado, como que, de la noche a la mañana, simples funcionarios públicos adictos alcanzaran el estatus de “hombres de negocio”, gracias a lo que se le sustrajo sin apelación a todos los chilenos. Una supuesta amante del Dictador ostentó mucho tiempo un hermoso collar de esmeraldas que se había donado para la “reconstrucción nacional” que prometía el régimen castrense.

Es sabido que el nuevo arquetipo de empresario no es el de ese viejo emprendedor que trabajaba codo a codo con sus operarios y que se enorgullecía del empleo que generaba y de las condiciones laborales que propiciaban sus fábricas e industrias. El exitoso, ahora, es el que gana más dinero en breve tiempo; es decir, pagando el mínimo y exigiendo el máximo. Tratando siempre de evadir o eludir los impuestos o simplemente quedándose con los recursos previsionales de sus trabajadores. Hay quienes se enorgullecen de ganar sólo en un día el equivalente a todos los salarios de su personal. El “valor agregado” de nuestros productos de exportación se sabe que resulta del salario injusto y de las granjerías que las empresas obtienen

del poder político a cambio de las coimas que reparten para financiar la política y la falta de probidad.

Es de reconocimiento general que los partidos políticos han infectado la administración pública de operadores que manejan los presupuestos fiscales, rapiñan la caja chica y otorgan concesiones a empresas que saben muy bien sobornarlos para ganarse las licitaciones públicas. Exasperadamente lentas avanzan las investigaciones judiciales en tal sentido y las primeras condenas realmente resultan jocosas en relación a la cuantía de desfalco fiscal.

El micro tráfico de estupefacientes se impone en las poblaciones más pobres y con ello se le ha dado sitio a todas las formas de delincuencia que proveen de material informativo a los noticiarios de televisión. Todo el mundo se escandaliza con esto, pero desde La Moneda se indulta a los grandes narcotraficantes chilenos y se le da asilo y albergue a uno de los más tenebrosos narcotraficantes mexicanos. Una denuncia que permanece por más de 10 años en la más completa impunidad.

Los propios obispos han condenado la usura bancaria, así como se denuncian los arbitrarios cobros de las cuentas de los servicios básicos. Así como es sabido que las más grandes empresas del cobre arrasan con nuestros yacimientos y no pagan lo mínimo razonable por estas graves prácticas de rapiña productiva. Los médicos extienden licencias de trabajo falsas, cuanto que las empresas constructoras profitan con las viviendas sociales que duran menos de un lustro, como ahora con la construcción de edificios que prometieron ser anti sísmicos. Hasta las asignaciones para fomentar el deporte y el empleo han sido desfalcadas, sin que hasta ahora sean condenados sus hechores.

La explicación de todo esto hay que encontrarla en la “condición humana”, pero muy especialmente en los paradigmas que rigen nuestra economía, como en una democracia que ni siquiera ha resultado representativa. En el progreso o desarrollo que sólo se traduce en enormes ganancias para algunos y peligrosos rezagos para la mayoría. En la falta de independencia de nuestros tribunales. En el régimen que sigue tutelado por los militares que se favorecen por el miedo que le tienen los gobernantes. En la ausencia de organización social, fuerza sindical y gremial. En la solidaridad acotada a instituciones de beneficencia. En un estado maniatado por una ideología desquiciada que simplemente no reconoce los valores de la igualdad y justicia social.

9 de marzo de 2010

EL TRIUNFO DEL NO

En la relación tan recurrente de las matemáticas y la política, por cierto que cualquiera de los dos candidatos presidenciales puede imponerse en las elecciones del próximo 17 de enero. Sin embargo, en esta oportunidad no vale predicción alguna que no esté necesariamente influida por nuestros propios anhelos y temores. La incertidumbre es completa y tiene que ver con la actitud que tomen los adherentes de las otras dos candidaturas de la primera vuelta electoral, como en la de ese millón de ciudadanos que no concurrió a votar o no marcó preferencia alguna.

Poco o nada valen las adhesiones personales que reciben Frei y Piñera. Tampoco las adhesiones más corporativas, como la de los dirigentes de los empleados fiscales o líderes gremiales. Felizmente el voto es individual y secreto. Los últimos comicios parlamentarios demostraron, una vez más, que las adhesiones de partidos sirven muy poco ante el influjo de ciertos candidatos que desafían todos los pronósticos y acuerdos cupulares. En la actualidad, valen más el dinero, la propaganda y la exhibición en los medios de comunicación. Queda claro que los partidos sólo ejercen sus privilegios al momento de designar los candidatos e integrar las listas, sobre todo cuando en este afán ni siquiera se someten a la voluntad de sus bases. En esto es cuando mejor se expresa la desacreditación de la política, como que estos referentes estén tan menoscabados en su prestigio.

Quien resulte elegido tendrá más del 50 por ciento de los sufragios, pero en ningún caso más de la mitad de la adhesión ciudadana. Quedaron

en el camino dos candidatos que sumaron poco menos de un tercio del electorado y manifestarán frustración frente al presidente electo al menos otro tercio más del candidato derrotado. A lo anterior, hay que considerar que unos 800 mil jóvenes permanecieron sin interés en inscribirse en el registro electoral. Más los que voten nulo, en blanco y esa apreciable cantidad de chilenos en el exterior al que aún nuestra legislación no le reconoce el derecho a sufragio.

De esta manera, lo que se puede predecir sin error es que una amplia mayoría nacional quedará disgustada con el resultado de las próximas elecciones. Los que no votaron por el ganador, los que no quisieron o no pudieron sufragar, como los que invariablemente votan con asco por lo que estiman el mal menor. Esta situación dejará más en evidencia la precariedad de nuestro sistema democrático, puesto que a la falta de legitimidad de nuestros parlamentarios, se sumará ahora la bajísima adhesión a nuestro jefe de estado. Cuanto de quienes designe como intendentes y gobernadores, los que todavía no resultan del voto popular.

Esta situación lo que augura es el crecimiento del descontento y de la movilización social, lo que sin duda alarma a los sectores conservadores, los inversionistas y los que se han favorecido por largos años con la inequidad y marginación perversas de nuestra economía. Muy posiblemente, además, sea este estado de ilegitimidad de nuestros dirigentes e instituciones el que nos abra a la creación de nuevos referentes políticos y sociales. Al desmoronamiento definitivo de estructuras partidarias arcaicas y al surgimiento de liderazgos modernos, sin los nombres y apellidos que se repiten en un régimen que no es ni representativo ni participativo.

Un triunfo del NO que nos da motivo suficiente para estar muy optimistas ante el año que recién se inicia.

8 de enero de 2010

DESPUÉS DE 20 AÑOS

Estos últimos años son suficientes para abandonar la idea de que en la institucionalidad vigente vamos a superar las graves injusticias y discriminaciones que afectan a la gran mayoría de los chilenos. Es preciso que la movilización social recupere la fuerza que siempre demostró en la historia para alcanzar los cambios. La consolidación de nuestra soberanía financiera y económica, la conquista de trabajo y salario justo, el acceso igualitario a la educación, entre tantas otras demandas, no van a derivarse de una institucionalidad autoritaria y excluyente, de un parlamento ilegítimo en su composición, en el señoreamiento de los poderes fácticos y con políticos arrodillados ante los propietarios del dinero, la arrogancia militar y la corrupción de los partidos.

Las campañas electorales nos ofrecen superar la escandalosa inequidad, promover reformas democráticas y acabar con lacras como la delincuencia. Sin embargo, nuestro crecimiento es más que discreto; la cesantía casi llega al 11 por ciento, los niveles de sindicalización y participación ciudadana no prosperan. Así como la violencia y el crimen organizado desafían la tranquilidad de ricos y pobres. Para colmo y, pese a la crisis, los bancos y empresas extranjeras recaudan en nuestro territorio las más pingües utilidades del mundo.

Con más represión y ley antiterrorista se reprimen las justas demandas de los pueblos indígenas y con una tajada grosera del presupuesto de la nación y de las exportaciones del cobre se complace a los uniformados. Todo

esto, mientras los hospitales se desquician por falta de recursos, las escuelas públicas se desmoronan ante el paso del tiempo y la convivencia nacional se deteriora cada día en las abismantes desigualdades. Para acotar más todavía nuestra precaria participación ciudadana, en el Congreso está lista una disposición para consagrar el voto voluntario y el gobierno renuncia o deja para la próxima administración las reformas prometidas al mundo laboral. En el ánimo cierto de no intranquilizar a las cúpulas empresariales y estimular sus aportes al financiamiento electoral.

Los candidatos, en fila, han ido a exponer sus intenciones ante los empresarios, el Ejército, la jerarquía eclesiástica y estas curiosas entidades que le han arrebatado a la autoridad intelectual que antes tuvieron. Nos referimos a esas llamadas “think tank” financiadas desde el extranjero o por aportes empresariales oblicuos que determinan lo “políticamente correcto”, manipulan los sondeos públicos y determinan desde los medios de comunicación qué candidatos están dentro del “establishment”, cuáles se sitúan en una posición díscola sin mayores riesgos y a quienes simplemente conviene ignorar. Total, entre la dictadura y esta posdictadura no ha habido mayores cortapisas a su propósito de que todo se mantenga igual, que Chile sea la copia feliz del modelo neoliberal y nuestros gobiernos se mantengan como hijos diletos de la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones extranjeras, Instituciones donde van a descansar o reciclarse nuestros ex ministros de Hacienda y grandes ejecutores de este milagro chileno que hace a los ricos cada vez más ricos, y a los pobres se los engatusa con farándula televisiva y uno que otro bono para consumir en fechas onomásticas.

No quisiera dejar la idea de que todo está perdido y que la próxima contienda electoral nos espera más de lo mismo. Hay que celebrar algunas saludables rupturas, candidatos que desordenarán la repartija de escaños en el Congreso y abren posibilidad de que se consoliden, desde la izquierda, nuevos e indispensables referentes. En la condición humana, no hay que descartar, incluso, que candidatos multimillonarios se resuelvan ahora a repartir más desde el Estado a los pobres. Y otros que, a la luz de su dilatada trayectoria en la política, se animen a ponerle término a tanta corrupción,

cuoteo, como aquellas prebendas que también los favorecieron. Quizás alguien nos brinde alguna sorpresa ya instalado en La Moneda o el Parlamento. Todo es posible. Pero ningún cambio será sólido si el pueblo sigue esperando un milagro o un mesías que nos conduzca a la tierra prometida... El desafío será siempre consolidar poder social, alentar la movilización, sobrepasar el orden vigente y reconocer como líderes a los que están dispuestos a obedecer los anhelos del pueblo. A ser mandatarios, más que sus gobernantes.

8 de octubre de 2009

A modo de epílogo...

ABSTENERSE O MARCAR EL VOTO

Lo más que hay que agradecerle a las movilizaciones estudiantiles es haber relevado el tema de la educación, así como haber despertado la atención pública hacia las situaciones de extrema injusticia y discriminación que afectan al grueso de los habitantes de este largo y segregado país. Las preocupaciones de los medioambientalistas, la represión que le ejerce el estado a las minorías étnicas, como los abusos de los bancos y las multitiendas contra los consumidores, son ahora repudiadas por una amplia mayoría. Así como también son cada día más los que entienden que nuestros representantes políticos no van a hacer nada sustantivo en defensa del pueblo si es que éste no le ejerce presión constante en las calles, ciudades y pueblos.

Los abusos del sistema crediticio, previsional y de salud por largos años han sido denunciados sin que todavía las autoridades resuelvan dotar al Estado de los mecanismos para frenar el lucro desembozado de los bancos, las AFPs y las isapres, en un afán que se expresa con la misma voracidad que el de los sostenedores de universidades y colegios. Ya es un hecho de la causa que la política se ha vendido al tráfico de influencias o lobby bien pagado de las empresas privadas y transnacionales, que han convertido a Chile en su paraíso fiscal y en un territorio enseñoreado por los inversionistas foráneos propuestos a multiplicar en poco tiempo sus capitales en el despojo incontrolado de nuestros recursos naturales.

Gracias a la movilización social y a los medios de comunicación libres, hoy existe un sentimiento nacional de que la bullada prosperidad de nuestra economía sólo se traduce en grandes beneficios para una ínfima minoría, mientras que los bienes y servicios que reciben la clase media y los pobres están siempre

hipotecados por la usura de los préstamos que sirven durante toda su vida en uno de los países más endeudados de la Tierra. El trabajo precario y el salario mínimo indigno ocultan los verdaderos índices del desempleo y de la indigencia social, agravados, todavía, por la manipulación de las cifras oficiales. Como lo indica el último escándalo que se ha sumado a la corrupción de la política, los partidos políticos, las agrupaciones sindicales y otras instituciones que en el pasado nos resultaban irreprochables, como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Es esta realidad la que, sumada a las desvergüenzas de la política, levantan la convicción que la esperanza de justicia ya no radica en las elecciones, el sistema electoral o la institucionalidad heredada de la Dictadura. Que más bien será en la unidad de los referentes sociales y políticos nuevos, así como en su acción callejera, donde el país construya los arietes que derriben el orden actual y echen las bases de una democracia real y participativa. Que ya no serán el sufragio ni los falsos y acicalados profetas los que consigan las transformaciones. Con tan poca consistencia como que uno a uno empiezan a caer en las propias prácticas fratricidas de la clase política, así como por el descubrimiento de sus irregularidades y connivencia con los poderes fácticos. Los que por fin, además, han quedado en evidencia en sus reiterados episodios de sobornos, estafas, evasiones tributarias y colusiones comerciales indignantes y criminales.

Son muchos ya los ciudadanos dispuestos a abstenerse en los próximos comicios electorales, actitud absolutamente lícita si es que conlleva el objetivo de deslegitimar este prolongado sistema de abusos e impunidades. Tal como también resulta apropiada la de quienes se proponen marcar su papeleta demandando Asamblea Constituyente (A.C), a objeto de darle una última oportunidad a los que resulten electos (o más bien reelectos) de impulsar una nueva Carta Fundamental, que sea refrendada como corresponde por la ciudadanía. Sin embargo, es propicio que en la opción que unos y otros adopten se reconozca por todos que la matriz del esfuerzo hay que descubrirla en las calles, la huelga, la resistencia y ese arrojo popular que siempre ha acompañado los mejores momentos de nuestra vida republicana.

14 de mayo de 2013

Títulos Publicados

Bajo el agua

Juan Pablo Cárdenas S.

Luz, cámara, transición.

El rollo del cine chileno de 1993 a 2003

Antonella Estévez B.

Relatos y crónicas para no olvidar

Roberto Hernández P.

Chile de baquelita.

Cuando el éxito le ganó a la felicidad

Wilson Tapia V.

En torno a las artes

Margarita Schultz

Buscando el bello sino

Sergio Jara D. (Argos Jeria)

El periodismo comprometido

Juan Pablo Cárdenas S.

Su primer desnudo

José Rodríguez E.

Crónicas para los días de lluvia

Mario Valdovinos

Violeta Parra: la vida intranquila

Fernando Sáez

Con los ojos en los 60

Sergio Jara D. (Argos Jeria)

Modelos imaginarios

Acerca de la enunciación artística

Margarita Schultz

Crónicas para incomodar

Juan Pablo Cárdenas S.

El mayo de los pingüinos

Andrea Domedel y Macarena Peña y Lillo

Medio ambiente, empresa y globalización

Luis Eduardo Thayer M.

José Carrasco. Asesinato de un periodista

Patricia Collyer y María José Luque

Espera larga. Crónicas de un actor

Nissim Sharim

Vuelan las plumas.

Conversaciones con escritores y artistas en el Metro de Santiago

Vivian Lavín A.

Chile me quita el sueño

Alex Acosta M.

Lenguaje y poder en la sociedad del conocimiento.

El paradigma del caleidoscopio

Roberto Meza A.

Habla Ávila. Manifestaciones en tribunas

Nelson Ávila

Lo esencial en el periodismo. Ayer, hoy y mañana.

Juan Pablo Cárdenas S.

Desde la cárcel

Jorge Lavandero I.

Multitiendas en Chile: El negocio del siglo XXI

Andrea Ortega y Loreto Soto

Amarrados

Juan Ignacio Pomés

Conversando con el presidente Lincoln

Iván A. Muñoz Riveros

Diccionario científico

Sergio Prenafeta J.

Chile, entre terremotos y tsunami

Wilson Tapia V.

Los pasos del elefante: El imperio de Herr Paulmann

Paulina Andrades y Marcelo Cerda

Rompiendo el cerco

Mónica Iglesias V.

**Testimonios y fantasías. Improvisaciones
en mi computador**

Juan Orrego-Salas

Nuestros pecados capitales

Un examen crítico del país que somos

Juan Pablo Cárdenas S.

Vuelan las plumas Conversaciones con la Cultura

Vivian Lavín A.

Los relatos del viejo Antonio

Beatriz Aurora Castedo

Relatos y apuntes

Cristián Fierro C.

Historia del Diario Financiero de Chile

Roberto Meza A.

**El enigma de la cinta con la última
arenga de Allende**

Toño Freire

La guerra civil Siria

La telaraña de influencias e intereses del Medio Oriente

Sofía Brinck V.

El Nikkei, a la sobra del Samarái

Ariel Takeda

Tortura y resistencia en Chile

Paz Rojas, Patricia Barceló y Katia Reszczynski

Pasión de invierno

Roberto Meza A.

